

100ª REUNION — Continuación de la 4ª SESION EXTRAORDINARIA — NOVIEMBRE 30 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Miguel P. Del Pero

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
AGUIRRE CAMARA, José
ALFONSÍN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARROYO, Ramón F.
BACCAY, Rodolfo D.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BILBAO, Saturnino
BOBILLO, Luis Ignacio
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
CÁCERES, Roberto M.
CAGGIANO, Ángel R.
CALABRESE, Pablo
CANTONI, Ángel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CATALÁN, Guillermo
CÓGGIOLA, Luis S.
CONDOLUCI, Domingo A.
CORAL, Juan Carlos
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COSTANTINO, Adolfo I.
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DEL PERO, Miguel P.
DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
ELENA, Reinaldo
FERNANDEZ, José M.
FERNANDEZ, Raúl
FERNANDEZ MENDY, Julio O.
FERNANDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERREIRA, Jorge W.
FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FREGA, José
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio

GARCÍA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GARÓFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GÓMEZ MACHADO, Hector
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIÉRREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRÉ, Emilio
LEÓN, Luis Agustín
LUCO, Juan A.
LLORENS, Héctor
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto K.
MARSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MENDEZ DOYLE, Abel Victor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOR ROIG, Arturo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco
NOUGUÉS, Isaías J.
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PÉREZ, Raúl
PERNASETTI, Horacio
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor Silverio
RENE, José Maria
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
RODRÍGUEZ, Rogelio Ramón
ROIS, Roberto
ROMEU VERDIER, Gabriel
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Hector R.
SARRULLE, Oscar E.

SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Juan Antonio
TORREIRO, Raúl
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE de PÉREZ TORT, Lidia
VÁZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES. EN COMISION:

ANTÓN, Luis
ARRASCAETA, Félix de
AVETA, Francisco O.

AUSENTES, CON LICENCIA:

CHEBLE, Francisco R.
MERCADO, José Ignacio
PENA Y LILLO, Silvestre

AUSENTES, CON AVISO:

AVILA, Eduardo Miguel
BACHINI, José A.
BERRINI, Emilio
BO, Ángel
CALVÓ, Carlos Alberto
DE CARA, José Eduardo
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
DOMÍNGUEZ, Luis C.
FABRIZIO, Luis N.
FERRARI, Luis
GODOY, Ruperto Honorio
LOZANO, Martín
LLAVER, Santiago Felipe
MOLINAS, Ricardo F.
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUNIAGURRIA, Camilo
PALACIOS, Alfredo L.
PESSINO, Felipe
RASINES, Osvaldo Gregorio
REQUENA, Raúl María
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
SCALITER, Juan
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
TACHELLA, Eliberto S. J.
TORRIGLIA, Enrique F.
VACA LOBO, Juan Manuel

AUSENTES, SIN AVISO:

ACHIARY, Juan C.
BUSACCA, Salvador F.
CARO, José Armando
CASTELLAR, Miguel A.
CENTENO, José Isaac
COLELLO, Clemente Juan
CONTINI, Juan Carlos

DÍAZ, Diógenes C.
FRAGA, Jorge Horacio
GALEANO, Roberto A.
LEJARRAGA, Pablo
LESCANO, Edmundo A.
LILJESTROM, Eduardo R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILIA, José R.
MARTÍNEZ, Ramón S.

MONTE, Ricardo Alvaro
ORTIZ HERNANDEZ, Ángel H.
PEREIRA, Antonio
PÉREZ GALLART, Alcides B.
ROBERTO, Mario
RODRIGUEZ VAGARIA, Eduardo
SOLARI, Eduardo A.
TARULLI, Pascual
VINALS, Fernando J.

SUMARIO

1.—Continuación de la sesión.

2.—Estatuto de los Partidos Políticos. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda (orden del día 417).

—En Buenos Aires, a los treinta días del mes de noviembre de 1964, a la hora 16 y 30:

1

CONTINUACION DE LA SESION

Sr. Presidente (Mor Roig).— Continúa la sesión.

Corresponde considerar el orden del día 417, sobre Estatuto de los Partidos Políticos.

2

ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

(Orden del día número 417)

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda han tomado en consideración el proyecto de ley orgánica de los partidos políticos enviado por el Poder Ejecutivo, las iniciativas de los señores diputados Muñiz y otros, Fernández (J. M.) y otros, Massolo, y peticiones particulares vinculadas con el tema; y, por las razones que dará el miembro informante y las que hace mérito el informe escrito correspondiente, os aconsejan, en mayoría, la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Principios generales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º— 1) Se garantiza a los ciudadanos el derecho de asociación política, para agruparse en partidos políticos democráticos.

2) Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento, como partido político, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política, para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones y los requisitos que establece esta ley.

Art. 2º — Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y la realización de la política nacional, y les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.

Art. 3º — La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

- a) Grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo permanente;
- b) Doctrina que en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez que propugne expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano, y el de los principios y los fines de la Constitución Nacional;
- c) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma que establezca cada partido;
- d) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, a los efectos de su existencia legal, la que comporta su inscripción en el registro público correspondiente.

Art. 4º — Los partidos reconocidos, además de su personalidad jurídico-política, son personas jurídicas de derecho privado, en cuyo carácter podrán adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con el Código Civil y las disposiciones de esta ley.

Art. 5º — Esta ley es de orden público y se aplicará a los partidos que intervengan en la elección de autoridades nacionales y municipales de la ciudad de Buenos Aires y territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Art. 6º — Corresponde a la Justicia Nacional Electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la ley orgánica respectiva, el contralor de la vigencia efectiva de los

derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

TÍTULO II

De la fundación y constitución

CAPÍTULO I

Requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico-política

1) Partidos de distrito.

Art. 7º — Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personalidad jurídico-política como partido de distrito deberá solicitarla ante el juez nacional electoral competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Acta de fundación y constitución, que acredite la adhesión de un número de electores no inferior al 4% del total de los inscritos en el Registro Electoral del distrito correspondiente, hasta un máximo de un millón y sin computar el excedente; este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en el que conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes;
- b) Nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;
- c) Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la asamblea de fundación y constitución;
- d) Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución;
- e) Acta de designación de las autoridades promotoras, las que convocarán a elecciones para constituir las autoridades definitivas del partido, conforme con la carta orgánica y dentro de los seis meses a partir de la fecha del reconocimiento definitivo. El acta de la elección de las autoridades definitivas deberá remitirse al juez nacional electoral;
- f) Domicilio partidario y acta de designación de los apoderados;
- g) Libros a que se refiere el artículo 43, dentro de los dos meses de obtenido el reconocimiento, a los fines de su rubricación.

2) Partidos nacionales.

Art. 8º — 1) El o los partidos de distrito reconocidos que resolvieren actuar en dos o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programas o bases de acción política y carta orgánica, como partido nacional, deberán solicitar su reconocimiento en tal carácter

ante el juez nacional electoral del distrito de su fundación, cumpliendo con lo determinado en el artículo 7º.

2) Obtenido el reconocimiento, el partido recurrente deberá inscribirse en el registro correspondiente ante los jueces nacionales electorales de los distritos donde decidiera actuar, a cuyo efecto, además de lo preceptuado en el artículo 7º, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Testimonio de la resolución que les reconoce personalidad jurídico-política;
- b) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica nacionales;
- c) Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las autoridades de distrito;
- d) Domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados.

Art. 9º — 1) A los efectos del artículo anterior se considera distrito de la fundación aquel donde se hubieren practicado los actos originarios y de la constitución del partido.

2) En el caso de los partidos que hayan obtenido cualquier reconocimiento anterior el distrito de la fundación será el de esa sede judicial, mientras subsista la voluntad de mantenerlo y una sentencia definitiva no establezca otro distrito.

Art. 10. — En los partidos nacionales, los partidos de distrito carecen del derecho de secesión. En cambio, los organismos centrales competentes tendrán el derecho de intervención a los distritos.

3) Confederaciones nacionales o de distrito.

Art. 11. — 1) Esta ley se aplicará a la constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de las confederaciones de partidos, sean nacionales, de distintos o de un mismo distrito, ya reconocidos.

2) El reconocimiento de las confederaciones deberá ser solicitado al juez nacional electoral del lugar del domicilio de la fundación, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Especificación de los partidos que se confederan y justificación de la voluntad de integrar la confederación con carácter permanente, expresada por medio de los órganos partidarios competentes;
- b) Testimonio de la resolución de la justicia nacional electoral que reconoció personalidad a cada uno de los partidos que se confederan;
- c) Nombre de la confederación;
- d) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica de la confederación;

- e) Nómina de autoridades de cada partido;
- f) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica de cada partido;
- g) Acta de elección de las autoridades y designación de apoderados de la confederación;
- h) Domicilio central de la confederación.

Art. 12. — Los partidos confederados tienen el derecho de secesión y podrán denunciar el acuerdo que los confedera. En cambio, sus organismos centrales carecen de derechos de intervención, salvo disposición estatutaria en contrario.

4) De la fusión de partidos.

Art. 13. — Esta ley se aplica a los partidos que resulten de la fusión de dos o más partidos nacionales, confederados o de distrito, ya reconocidos.

El reconocimiento del partido fusionado deberá solicitarse al juez nacional electoral del lugar del domicilio de cualquiera de los partidos que lo forman, cumpliendo con los requisitos establecidos en los incisos b) a g) del artículo séptimo, y acompañando testimonio de la resolución de los partidos que se fusionan.

5) De las alianzas transitorias.

Art. 14. — 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los partidos de distrito, nacionales y las confederaciones reconocidos, podrán concertar alianzas transitorias con motivo de una determinada elección.

2) El reconocimiento de la alianza deberá ser solicitado por los partidos que la integren por lo menos dos meses antes de la elección, al juez nacional electoral del lugar del domicilio de cualquiera de ellos, cumplimentando los siguientes requisitos:

- a) Testimonio de las resoluciones de las respectivas organizaciones deliberativas máximas partidarias, que autorizaron la alianza y sus condiciones;
- b) Nombre adoptado;
- c) Plataforma electoral común;
- d) Forma acordada para la integración de las listas de candidatos, los que deberán ser elegidos de conformidad a las normas estatutarias de los partidos a los que pertenezcan;
- e) Designación de apoderados comunes.

6) Reconocimiento.

Art. 15. — 1) Los partidos de distrito, nacionales, confederados o fusionados deberán solicitar su reconocimiento hasta tres meses antes de la fecha de la elección al juez nacional electoral del distrito de la fundación, sin perjuicio de solicitarlo en los distritos en que resolvieren actuar, dentro del mismo término.

2) Los partidos, para tener derecho a obtener ese reconocimiento, y el pronunciamiento del juez nacional electoral sobre la oficialización de las candidaturas, deberán justificar el cumplimiento de todas las condiciones y requisitos legales con anterioridad al día del vencimiento del plazo establecido por la legislación electoral.

CAPÍTULO II

Del nombre

Art. 16. — 1) Se garantiza a los partidos el derecho a un nombre, su registro y su uso.

2) El nombre deberá ser adoptado en el acto de la constitución del partido, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación.

3) La denominación «partido» únicamente podrá ser utilizada por los partidos en constitución o reconocidos, así como también por los partidos a los cuales les haya sido cancelada su personalidad política.

4) El nombre no deberá contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni provocar confusión material o ideológica, y deberá distinguirse razonablemente del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

5) La denominación de los partidos no podrá formarse mediante aditamento o supresión de vocablos correspondientes a los nombres de partidos reconocidos, ni usarse los vocablos argentino, nacional o internacional, o sus derivados, o vocablos cuyos significados afecten o puedan afectar las relaciones internacionales de la Nación o implicar antagonismo de razas o religiones, ni que contravengan otras disposiciones de esta ley.

Art. 17. — 1) El nombre de un partido legalmente constituido es un atributo exclusivo y no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación, agrupación o entidad de cualquier naturaleza en todo el territorio de la Nación.

2) Cuando una persona, un grupo de personas, un partido o una asociación o entidad de cualquier naturaleza usare indebidamente el nombre registrado de un partido reconocido, la Justicia Nacional Electoral decidirá, a petición de parte, el cese inmediato del uso indebido disponiendo el empleo de la fuerza pública para su cumplimiento, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes.

3) Cuando un partido fuere declarado extinguido, su nombre no podrá ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurridos seis años de la sentencia firme que declare la extinción del partido.

Art. 18. — 1) El nombre partidario, su cambio o modificación deberán ser aprobados por la Justicia Nacional Electoral, previo cumplimiento de las disposiciones legales.

2) Solicitado el reconocimiento del derecho al nombre adoptado, el juez electoral dispondrá la notificación a los apoderados de los partidos y la publicación por tres días en el Boletín Oficial de la Nación de la denominación, así como la fecha en que fue adoptada, al efecto de la oposición que pudiere formular otro partido o el procurador fiscal.

3) Los partidos reconocidos o en constitución podrán controlar y oponerse al reconocimiento del derecho al nombre, con anterioridad a que el juez electoral resuelva en definitiva o en el acto de la audiencia establecida en esta ley, con cuya comparecencia tendrán el derecho de apelar, sin perjuicio del ejercicio ulterior de las acciones pertinentes.

4) La resolución definitiva deberá ser comunicada a la Cámara Nacional Electoral a los fines del artículo 49.

CAPÍTULO III

Del domicilio

Art. 19. — Los partidos deberán constituir domicilio legal en la ciudad capital correspondiente al distrito en el que solicitaren el reconocimiento de su personalidad jurídico-política. Asimismo deberán denunciar los domicilios partidarios central y local.

Art. 20. — A los fines de esta ley el domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en la libreta de enrolamiento o cívica.

TÍTULO III

De la declaración de principios, programa o bases de acción política

CAPÍTULO I

De la doctrina y organización

Art. 21. — La declaración de principios, el programa o bases de acción política deberán cumplimentar de manera formal y real las exigencias del artículo 3º. inciso b).

Art. 22. — 1) No cumplen con las condiciones exigidas en el artículo anterior los partidos que, en su doctrina política o por la vía de sus organismos, autoridades estatutarias o candidatos, auspicien o realicen de modo directo actos violatorios de los principios democráticos.

2) A los efectos del inciso anterior se consideran violatorios del régimen democrático la promoción, especialmente, de los siguientes hechos o actos:

- a) Concentración del poder político, social o económico;
- b) Partido único;
- c) La adhesión o elogio a actos violatorios de los principios republicanos producidos por regímenes presentes o pasados;

- d) El antagonismo de razas o religiones;
- e) La aplicación de las penas de confiscación, destierro o muerte por causas políticas;
- f) El fraude o la violencia electoral en cualquiera de sus formas;
- g) La negación del derecho de asociarse con finalidades gremiales (de trabajadores, empresarios, profesionales, etcétera), culturales, científicas o de cualquier otra naturaleza;
- h) La implantación, por medio de leyes o decretos, de proscripciones o inhabilitaciones electorales de personas o partidos determinados;
- i) El desconocimiento del derecho de las mayorías a gobernar y de las minorías a controlar la gestión gubernativa;
- j) La alteración o supresión del principio de la separación de los poderes;
- k) El desconocimiento de los derechos humanos y de sus garantías.

CAPÍTULO II

De la carta orgánica y de la plataforma electoral

Art. 23. — La carta orgánica reglará la organización y el funcionamiento del partido conforme con los siguientes principios:

- a) Gobierno y administración, distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios; las convenciones, congresos o asambleas generales serán los órganos de jerarquía superior del partido;
- b) Sanción por los órganos partidarios de la declaración de principios, el programa o bases de acción política;
- c) Apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año durante el término mínimo de cuarenta días y anunciado con un mes de anticipación; la carta orgánica deberá asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión vinculada con el derecho a la afiliación;
- d) Participación y control de los afiliados en el gobierno y administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos;
- e) Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
- f) Determinación de las causas y la forma de extinción del partido.

Art. 24. — 1) La carta orgánica constituye la ley fundamental y suprema del partido, en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y las

obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación.

2) Los organismos partidarios podrán regir la actividad interna del partido mediante la sanción de reglamentos, para su gobierno y administración.

Art. 25. — La carta orgánica y sus modificaciones deberán ser sancionadas por los órganos deliberativos del partido y aprobadas por la Justicia Nacional Electoral, en lo concerniente a las exigencias del artículo 23.

Art. 26. — La justificación de la documentación exigida en los títulos segundo y tercero de esta ley se cumplimentará mediante testimonio o copia autenticada por escribano público, sin perjuicio de que pueda ser requerida la documentación original.

Art. 27. — 1) Con anterioridad a la elección de candidatos los organismos partidarios competentes deberán sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la declaración de principios, el programa o bases de acción política.

2) Copia de la plataforma, así como la constancia de la aceptación de las candidaturas por los candidatos, deberán ser remitidas al juez nacional electoral, en oportunidad de requerirse la oficialización de las listas.

TITULO IV

Del funcionamiento de los partidos

CAPÍTULO I

De la afiliación

Art. 28. — Para ser afiliado a un partido se requiere:

- a) Estar domiciliado en el distrito en que se afilie, de acuerdo a las normas del artículo 20;
- b) Comprobar la identidad con la libreta de enrolamiento o cívica;
- c) Presentar por cuadruplicado una ficha solicitud que contenga: nombre y domicilio, matrícula, clase, sexo, estado civil, profesión u oficio, y la firma auténtica o impresión digital, cuya autenticidad deberá ser certificada en forma fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determinen los organismos ejecutivos, cuya nómina deberá ser remitida a la Justicia Nacional Electoral; la afiliación podrá también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital. Las fichas solicitud serán suministradas

sin cargo por la Justicia Nacional Electoral, a los partidos reconocidos o en formación.

Art. 29. — No pueden ser afiliados:

- a) Los excluidos del registro electoral, en consecuencia de disposiciones legales vigentes;
- b) El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio;
- c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias en actividad, o jubilados llamados a prestar servicios;
- d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial.

Art. 30. — La calidad de afiliado se adquirirá a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprobaren la solicitud respectiva. Una ficha de afiliación se entregará al interesado, otra será conservada por el partido y las dos restantes se remitirán a la Justicia Nacional Electoral, salvo lo dispuesto en el artículo 33.

Art. 31. — El registro de afiliados estará constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores, el cual será llevado por los partidos y por la Justicia Nacional Electoral.

Art. 32. — El padrón partidario será público solamente para los afiliados. Podrán confeccionarlo los partidos o el juzgado, a petición de aquéllos formulada dos meses antes del acto eleccionario. En el primer caso, actualizado y autenticado, deberá remitirse al juez antes de cada elección interna o cuando éste lo requiera. En el segundo, se confeccionará en base al registro que llevará el juzgado y se entregará sin cargo a los partidos, con antelación suficiente a cada elección interna.

Art. 33. — Los partidos podrán, ajustándose a las disposiciones e instrucciones del juzgado, llevar bajo su responsabilidad el registro de afiliados y el padrón partidario, sin otra participación de la Justicia Nacional Electoral, que la relativa al derecho de inspección y fiscalización, que se ejercerá por el juez de oficio o a petición de parte interesada.

CAPÍTULO II

Elecciones partidarias internas

Art. 34. — 1) Los partidos practicarán en su vida interna el sistema democrático a través de elecciones periódicas para la nominación de autoridades y candidatos, mediante la participación de los afiliados de conformidad con las prescripciones de su carta orgánica.

2) En caso de oficializarse una sola lista de autoridades o candidatos, podrá prescindirse del acto eleccionario.

Art. 35. — Las elecciones partidarias internas se registrarán por la carta orgánica, subsidiariamente por esta ley, y en lo que sea aplicable, por la legislación electoral.

Art. 36. — La Justicia Nacional Electoral podrá nombrar veedores de los actos electorales partidarios a pedido de parte interesada.

Art. 37. — El resultado de las elecciones partidarias internas será publicado y comunicado al juez nacional electoral.

Art. 38. — No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

- a) Los excluidos del Registro Electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;
- b) El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad, y en situación de retiro cuando hayan sido llamados a prestar servicio;
- c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias en actividad, o jubilados llamados a prestar servicio;
- d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional y de provincias y Tribunal de Faltas municipal;
- e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.

Art. 39. — Los jueces no podrán denegar la oficialización de candidaturas en razón de las calidades que exige la Constitución Nacional, cuyo juicio compete a los cuerpos para los cuales se postulan.

Art. 40. — El ciudadano que en una elección partidaria interna suplante a otro sufragante, o votare más de una vez en la misma elección, o de cualquier otra manera sufragase sin derecho y dolosamente, será inhabilitado por seis (6) años para elegir y ser elegido, inclusive en las elecciones partidarias internas y para el desempeño de cargos públicos.

CAPÍTULO III

De la titularidad de los derechos y poderes partidarios

Art. 41. — Se garantiza a las autoridades constituidas, el uso del nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno y administra-

ción del partido, y en general el desempeño de todas las actividades inherentes al mismo, de conformidad con esta ley, demás disposiciones legales sobre la materia y la carta orgánica del partido.

Art. 42. — La titularidad de los derechos y poderes partidarios, reglada en el artículo anterior, determina la de los bienes, símbolos, emblemas, libros y documentación del partido.

CAPÍTULO IV

De los libros y documentos partidarios

Art. 43. — Sin perjuicios de los libros y documentos que prescriba la carta orgánica, los partidos, por intermedio de cada comité nacional y comité central de distrito, deberán llevar en forma regular los siguientes libros y documentos, rubricados y sellados por el juez nacional electoral correspondiente.

- a) Registro de afiliados;
- b) Libro de inventario;
- c) Libro de caja, debiendo conservarse la documentación complementaria correspondiente por el término de tres años;
- d) Libro de actas y resoluciones en hojas fijas o movibles.

CAPÍTULO V

De la propaganda y proselitismo partidarios

Art. 44. — Se garantiza la libertad de propaganda y proselitismo partidarios, dentro de la letra y el espíritu de esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

Art. 45. — Los carteles, avisos y en general todo medio de propaganda y proselitismo partidarios, no podrán ser destruidos, alterados o superpuestos por otros.

Art. 46. — La Justicia Nacional Electoral, por conocimiento directo o por denuncia, ordenará la destrucción de los medios de propaganda y proselitismo utilizados en contravención con las disposiciones legales.

CAPÍTULO VI

De los símbolos y emblemas partidarios

Art. 47. — Se garantiza a los partidos reconocidos el derecho al registro y al uso exclusivo de sus símbolos y emblemas, los cuales no podrán ser usados por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

Art. 48. — El ejercicio del derecho al registro y al uso exclusivo de los símbolos y emblemas partidarios se regirá por las disposiciones contenidas en el título II, capítulo II de esta ley, en lo que sean aplicables.

CAPÍTULO VII

Del registro de los actos que hacen a la existencia partidaria

Art. 49. — 1) La Cámara Nacional Electoral y los juzgados de distrito llevarán un registro público, a cargo de sus respectivos secretarios, donde deberán inscribirse:

- a) Los partidos reconocidos y la ratificación de los partidos preexistentes;
- b) El nombre partidario, sus cambios y modificaciones;
- c) El nombre y domicilio de los apoderados;
- d) Los símbolos y emblemas partidarios que se registren;
- e) La cancelación de la personalidad jurídico-política partidaria;
- f) La extinción y la disolución partidarias.

2) Todo movimiento en las inscripciones, cambios o modificaciones será comunicado inmediatamente por los juzgados de distrito a la Cámara Nacional Electoral para la actualización del registro a su cargo.

TÍTULO V

Del patrimonio del partido

CAPÍTULO I

De los bienes y recursos

Art. 50. — El patrimonio del partido se integrará con los bienes y recursos que autorice la carta orgánica y que no prohíba la ley.

Art. 51. — Los partidos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente:

- a) Contribuciones o donaciones anónimas, salvo las colectas populares. Los donantes podrán imponer cargo de que sus nombres no se divulguen, pero los partidos deberán conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la donación por tres años;
- b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o provinciales, o de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas, o de empresas que exploren juegos de azar, o de gobiernos o entidades extranjeras;
- c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales;
- d) Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en situación de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando hubieren sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o empleadores.

Art. 52. — 1) Los partidos que contravinieren las prohibiciones establecidas en el artículo anterior, incurrirán en multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución ilícitamente aceptada.

2) La persona de existencia ideal que efectúe las contribuciones o donaciones prohibidas en el artículo anterior, incurrirá en multa equivalente al décuplo del monto de la donación o contribución ilegítimamente realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

3) Las personas físicas que se enumeran a continuación, incurrirán en inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones públicas y partidarias internas, a la vez que inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, por el término de dos a seis años:

- a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones contempladas en el artículo 51 y, en general, todas las personas que contravinieren lo allí dispuesto;
- b) Los afiliados que por sí o por interpósita persona aceptaren o recibieren a sabiendas, donaciones o aportes para el partido de las personas mencionadas en el inciso precedente; así como los afiliados que, por sí o por interpósita persona solicitaren a sabiendas de aquéllos, donaciones o aportes para el partido o aceptaren o recibieren donaciones anónimas, en contra de lo prescrito por el artículo 51;
- c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervinieren directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus inferiores jerárquicos o empleados, para un partido; así como los afiliados que, a sabiendas, aceptaren o recibieren para el partido contribuciones o donaciones así obtenidas;
- d) Los que utilizaren, directa o indirectamente, fondos de un partido para influir en la nominación de cualquier persona en una elección partidaria interna.

Art. 53. — Todas las multas que se aplicaren en virtud de las disposiciones anteriores, ingresarán al «Fondo partidario permanente», creado por el artículo 57.

Art. 54. — Los fondos del partido deberán depositarse en bancos oficiales nacionales, provinciales o municipales, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que determinaren la carta orgánica o los organismos directivos.

Art. 55. — Los bienes inmuebles adquiridos con fondos partidarios, o que provinieren de donaciones efectuadas con tal objeto, deberán inscribirse a nombre del partido.

Art. 56. — 1) Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos, estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras.

2) Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en comodato, siempre que se encontraren afectados, en forma fehaciente, exclusiva y habitual, a las actividades específicas del partido y cuando las contribuciones fueren a su cargo.

3) La exención alcanzará a los bienes de renta del partido siempre que ésta fuere invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acrecentare, directa o indirectamente, el patrimonio de persona alguna; así como también a las donaciones en favor del partido y al papel destinado a uso exclusivo del mismo.

CAPÍTULO II

Del «Fondo partidario permanente» y de los subsidios y franquicias

Art. 57. — Créase el «Fondo partidario permanente», con la finalidad de proveer a los partidos reconocidos, de los medios económicos que contribuyan a facilitarles el cumplimiento de sus funciones institucionales.

La ley general de presupuesto determinará, con carácter permanente, la afectación de los recursos necesarios bajo el rubro «Fondo partidario permanente».

El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, dispondrá de dicho fondo, a los efectos que determina esta ley y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Art. 58. — Los partidos con personería reconocida tendrán derecho a los siguientes beneficios y franquicias, los que regirán desde noventa días antes y hasta diez días después de cumplido cada proceso electoral, salvo los establecidos en los incisos a), b) y c) que serán permanentes:

- a) Exención del pago de tasas y derechos postales y telegráficos a la correspondencia que remitieren;
- b) La instalación y abono de hasta dos aparatos telefónicos en cada sede del organismo máximo nacional, confederal o de distrito y las comunicaciones telefónicas realizadas entre sedes partidarias o aparatos adscritos a las mismas, o entre éstas y los tribunales o juntas electorales, o bloques legislativos nacionales, provinciales o municipales, todos sin cargo;
- c) Concesión de cinco pases libres «impersonal especial» para todo el país válidos cuatro de ellos para todos los medios nacionales de transporte de pasajeros, con excepción de los aéreos, y el restante sin esta limitación;

- d) Concesión de diez pases libres «impersonal especial» para ser utilizados exclusivamente dentro de cada distrito, válidos para todos los medios nacionales de transporte de pasajeros, con excepción de los aéreos, salvo en los referentes a los distritos de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, de los cuales cinco no tendrán tal limitación;
- e) Concesión de espacios sin cargo en las estaciones de radiodifusión y televisión administradas por el Estado, que deberán acordarse consultando las necesidades de programación de las emisoras;
- f) Percepción del importe mínimo de veinte pesos que se establecerá separadamente para cada distrito electoral, por cada voto computado a su favor en la última elección, tomándose el total mayor en el caso que se hayan elegido distintas categorías de candidatos.

El Poder Ejecutivo podrá efectuar anticipos a partidos nuevos sobre la base de los votos que se presuma puedan obtener, con garantía a satisfacción. Realizada la elección se efectuará el reajuste y liquidación definitivos.

Si una vez percibido el adelanto o el pago el beneficiario se abstuviere o aconsejare votar por otro partido, deberá reintegrar el importe dentro del tercer día de adoptada la resolución, con más el 1 % de interés mensual;

2) El Poder Ejecutivo adoptará las providencias necesarias para que los importes referidos en el inciso f) se hagan efectivos inmediatamente después de aprobadas las listas de candidatos o de realizada la elección, para el caso de los partidos nuevos.

CAPÍTULO III

Del control patrimonial

Art. 59. — Los partidos, por el órgano que determine la carta orgánica, deberán:

- a) Llevar contabilidad detallada de todo ingreso de fondos o especies, con indicación de la fecha de los mismos y de los nombres y domicilios de las personas que los hubieren ingresado o recibido; esta contabilidad deberá conservarse durante tres ejercicios con todos sus comprobantes;
- b) Dentro de los sesenta días de finalizado cada ejercicio, presentar al juez nacional electoral correspondiente el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificados por contador público nacional o por los órganos de control del partido;

- c) Dentro de los sesenta días de celebrado el acto electoral nacional en que haya participado el partido presentar al juez nacional electoral correspondiente cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral.

Art. 60. — 1) Las cuentas y documentos a que se refiere el artículo anterior, deberán estar en la secretaría del juez nacional electoral competente, para conocimiento de los interesados, y del ministerio fiscal, durante treinta días hábiles.

2) Si dentro de los cinco días hábiles de vencido dicho término no se hicieron observaciones, el juez ordenará su archivo.

Si se formularen observaciones por violación de las disposiciones legales o de la carta orgánica, el juez resolverá, y en su caso, aplicará las sanciones correspondientes.

3) Los estados anuales de las organizaciones partidarias en el distrito y en el orden nacional deberán publicarse por un día en el Boletín Oficial.

TÍTULO VI

De la caducidad y la extinción de los partidos

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 61. — 1) La caducidad dará lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de la personalidad política, subsistiendo aquél como persona de derecho privado.

2) La extinción pondrá fin a la existencia legal del partido y dará lugar a su disolución.

Art. 62. — Son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos:

- a) La no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro años;
- b) La no presentación en distrito alguno en tres elecciones consecutivas sin causa debidamente justificada;
- c) No obtener en alguna de las dos elecciones anteriores el dos por ciento del padrón electoral en ningún distrito;
- d) La violación de lo determinado en los artículos 7º, incisos e) y g) y 43, previa intimación judicial.

Art. 63. — Los partidos se extinguen:

- a) Por las causas que determine la carta orgánica;
- b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica;
- c) Cuando la actividad del partido, a través de la acción de sus autoridades o candidatos no desautorizados por aquéllas, fuere atentatoria a los principios fundamentales establecidos en los artículos 3º, 21 y 22;

- d) Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente.

Art. 64. — La cancelación de la personalidad política y la extinción de los partidos serán declaradas por sentencia de la Justicia Nacional Electoral, con todas las garantías del debido proceso legal, en que el partido será parte.

Art. 65. — 1) En caso de declararse la caducidad de la personalidad política de un partido reconocido, en virtud de las causas establecidas en esta ley, previa intervención del interesado y del procurador fiscal electoral, podrá ser solicitada nuevamente después de celebrada la primera elección, cumpliendo con lo dispuesto en el título II.

2) El partido extinguido por sentencia firme no podrá ser reconocido nuevamente, con el mismo nombre, la misma carta orgánica, declaración de principios, programa o bases de acción política, por el término de seis años.

Art. 66. — 1) Los bienes del partido extinguido tendrán el destino establecido en la carta orgánica, y en el caso de que ésta no lo determinar, ingresarán, previa liquidación al «Fondo partidario permanente», sin perjuicio del derecho de los acreedores.

2) Los libros, archivos, ficheros y emblemas del partido extinguido quedarán en custodia de la Justicia Nacional Electoral la que pasados 6 años y previa publicación en el Boletín Oficial por 3 días, podrá ordenar su destrucción.

TÍTULO VII

Del procedimiento partidario ante la Justicia Electoral

CAPÍTULO I

De los principios generales

Art. 67. — El procedimiento partidario electoral será sumario, verbal y actuado, en doble instancia.

Art. 68. — La prueba se ofrecerá en la primera presentación y se producirá en la audiencia.

Art. 69. — Tendrán personería para actuar ante la Justicia Nacional Electoral, los partidos reconocidos o en constitución, sus afiliados, cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados por la carta orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias, y los procuradores fiscales electorales en representación del interés u orden público.

Art. 70. — La personería se acreditará mediante copia autenticada del acta de elección o designación de las autoridades o apoderados, o por poder otorgado ante escribano público o por acta-poder extendido por ante la secretaría electoral.

Art. 71. — 1) Ante la Justicia Nacional Electoral se podrá actuar con patrocinio letrado.

2) Los tribunales de primera y segunda instancia podrán exigir el patrocinio letrado cuando lo consideren necesario para la buena marcha del proceso.

Art. 72. — Las actuaciones ante la Justicia Nacional Electoral se tramitarán en papel simple, y las publicaciones dispuestas por ella, en el Boletín Oficial, serán sin cargo.

CAPÍTULO II

Procedimiento para el reconocimiento de la personalidad

Art. 73. — El partido en constitución que solicitare el reconocimiento de su personalidad, deberá acreditar las autenticidad de las firmas y demás documentación, mediante certificación de escribano o funcionario público competente; en su defecto el juez nacional electoral verificará dicha autenticidad arbitrando los medios idóneos a ese fin.

Art. 74. — 1) Cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y vencidos los que se refiere el artículo anterior, y vencidos los términos de notificación y publicación dispuestos por el artículo 18, párrafo 2º, el juez nacional electoral convocará a una audiencia, dentro de los diez días hábiles siguientes, al procurador fiscal electoral y a los apoderados de los partidos reconocidos o en formación de cada distrito, así como a los de otros distritos, que se hubieren presentado invocando un interés legítimo.

2) En ese comparendo verbal, podrán formularse observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por ley o referentes al derecho, registro o uso del nombre partidario propuesto, debiendo concurrir quien las formule con la prueba en que se funde sin perjuicio de la intervención del ministerio público por vía de dictamen.

3) Los comparecientes a la audiencia antes indicada, podrán apelar.

Art. 75. — 1) El juez nacional electoral, cumplidos los trámites necesarios, procederá mediante auto fundado y dentro de los diez días hábiles, a conceder o denegar la personalidad solicitada.

2) Concedido el reconocimiento, ordenará publicar en el Boletín Oficial, por un día, el auto respectivo y la carta orgánica del partido.

Art. 76. — 1) De toda resolución definitiva o que decida artículo, las partes interesadas, y el procurador fiscal electoral, podrán apelar dentro del término de cinco días hábiles para ante la Cámara Nacional Electoral.

2) Este recurso se concederá en relación y a los efectos regulados en los artículos siguientes.

CAPÍTULO III

Del procedimiento contencioso

1) Primera instancia.

Art. 77. — 1) Iniciada la causa se correrá traslado a los interesados por cinco días hábiles. Vencido el término, el juez nacional electoral convocará a una audiencia dentro de los cinco días hábiles, bajo apercibimiento de celebrarse con la parte que concurra, debiendo expedirse en el plazo de diez días hábiles de realizada ésta. La incompetencia o la falta de personería del representante deberá resolverse previamente.

2) El procurador fiscal electoral, dictaminará en la audiencia o dentro de los tres días hábiles de celebrada aquélla.

3) Los términos establecidos por esta ley son perentorios. No obstante, durante el proceso concial, la Justicia Nacional Electoral podrá aplicar los plazos determinados por la legislación electoral, cuando sea justificada la urgencia.

2) Segunda instancia.

Art. 78. — 1) De toda sentencia o resolución definitiva o que decida artículo, podrá apelarse dentro del plazo de cinco días hábiles, para ante la Cámara Nacional Electoral, excepto en el caso previsto por el artículo 61 de la ley electoral.

2) La apelación se concederá en relación y en ambos efectos, y comprende el recurso de nulidad.

Art. 79. — Al interponerse el recurso ante el juez nacional electoral, las partes interesadas constituirán domicilio en jurisdicción de la Capital Federal. En su defecto, la Cámara Nacional Electoral intimará a hacerlo dentro de los cinco días hábiles bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en sus estrados.

Art. 80. — 1) Recibidos los autos se pondrán en la oficina por el término común de cinco días hábiles, durante el cual podrán presentar las partes un memorial que haga a sus derechos. El tribunal, como medida para mejor proveer, podrá disponer la recepción de pruebas no rendidas en primera instancia u otras diligencias probatorias así como comparendos verbales, todo dentro del plazo de diez días hábiles.

2) Agregados los memoriales o vencido el término y producida la prueba o efectuado el comparendo verbal, en su caso, el procurador general electoral dictaminará. Agregado el dictamen, pasarán los autos al acuerdo para dictar sentencia.

3) Las partes podrán pedir pronto despacho, en cuyo caso el procurador general o la Cámara, según corresponda, deberá pronunciarse dentro del plazo de quince días hábiles.

Art. 81. — 1) En el recurso de queja por retardo o denegación de justicia, vencidos los tér-

minos legales, el interesado podrá pedir pronto despacho, y pasados tres días podrá ocurrir ante el superior.

2) En igual término podrá interponer recurso de queja por denegación de apelación.

3) La aclaratoria de las sentencias definitivas podrá interponerse, en ambas instancias, dentro de las veinticuatro horas de la notificación y deberá ser resuelta en primera instancia, dentro de las cuarenta y ocho horas. La interposición de la aclaratoria interrumpirá el término para la apelación.

Art. 82. — Declarada la nulidad de una sentencia o resolución definitiva que decida artículo, la cámara dispondrá que los autos pasen al subrogante legal, para que dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Art. 83. — En todo lo no previsto en los artículos anteriores se aplicarán por analogía los principios generales del derecho procesal, que aseguren fundamentalmente la defensa en juicio.

TITULO VIII

Disposiciones generales

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 84. — Quedan derogados la ley 15.793 y los decretos leyes 2.390/63, 3.284/63, con excepción del artículo 5º, apartados 1 y 10, y 12.530/62 y las disposiciones legales que se opongan a la presente.

Art. 85. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de rentas generales, con imputación a la misma.

TITULO IX

Disposiciones transitorias

CAPÍTULO ÚNICO

De los partidos preexistentes

Art. 86. — Los partidos de distrito y nacionales y las confederaciones, existentes y reconocidos a la fecha del comienzo de la vigencia de esta ley, conservarán su personalidad jurídico-política, nombre y demás atributos, derechos y poderes inherentes a la misma en todos los distritos del país, hayan actuado o no en alguno de ellos, siempre que soliciten su inscripción ante la Justicia Nacional Electoral del domicilio de la fundación o de las autoridades centrales, y adecuen su organización y funcionamiento a lo dispuesto en los títulos I, III, IV y V dentro del plazo de tres meses. Igual derecho se reconoce a los partidos de distrito en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 87. — A todos los fines de esta ley se considera también partido preexistente al que haya resultado de la fusión, registrada o no, de

dos o más partidos con personería, a la fecha de la sanción de esta ley, a cuyo efecto aquél deberá cumplimentar la exigencia del artículo anterior y éstos acreditar la voluntad de fusionarse expresada por los órganos partidarios permanentes.

El partido fusionado gozará de todos los derechos, franquicias y beneficios legales y patrimoniales que le hubiere correspondido a cada uno de los partidos originarios. Así mismo tendrá las autoridades que hubieren sido elegidas conforme a su carta orgánica.

Art. 88. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 20 de octubre de 1964.

Con disidencias parciales:

Guillermo A. Belgrano Rawson. — José Frega. — Fermín J. Garay. — Mario A. Grau. — Jorge D. Solana. — Enrique de Vedia. — Raúl R. Alfonsín. — Tomás P. Arana. — Isidro G. Balbi. — Pedro J. Berhongaray. — Saturnino Bilbao. — Roberto M. Cáceres. — Angel R. Caggiano. — Emilio Carreira. — David Jorge Casas. — Jorge J. Christie. — Horacio O. Domingorena. — Horacio García. — Ruperto Honorio Godoy. — Pablo González Bergez. — Eduardo O. Gutiérrez. — Santiago Felipe Llaver. — Héctor Llorens. — Rafael J. Martínez Raymonda. — Ricardo F. Molinas. — Camilo Muniagurria. — Ramón A. Muñiz. — Vicente M. Musacchio. — Angel H. Ortiz Hernández. — Roberto M. Pena. — Oscar Rial. — Rogelio Ramón Rodríguez. — M. Oscar Rosito. — Adolfo R. Rouzaut. — José Oscar Ruiz. — Alberto Serú García. — Antonio A. Tróccoli. — Juan Claudio Zanoní.

TEXTO DE LAS DISIDENCIAS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS: HORACIO GARCIA, ANGEL H. ORTIZ HERNANDEZ, SANTIAGO FELIPE LLAYER, ADOLFO R. ROUZAUT; HORACIO O. DOMINGORENA y VICENTE M. MUSACCHIO; GUILLERMO A. BELGRANO RAWSON; PABLO GONZALEZ BERGEZ; JORGE J. CHRISTE; CAMILO MUNIAGURRIA, RAFAEL J. MARTINEZ RAYMONDA y RICARDO F. MOLINAS; ENRIQUE DE VEDIA

1

Artículo 12. — Suprimir la frase: «...salvo disposición estatutaria en contrario».

Artículo 14. — Suprimirlo.

Artículo 23. — d) agregar al final del inciso, la expresión: «...de conformidad a lo que establece el artículo siguiente».

Artículo nuevo. — (Después del artículo 23): «Régimen de la elección de las autoridades par-

tidarias y de los candidatos a cargos públicos electivos por el voto obligatorio, secreto y directo de los afiliados. Exceptúase de la obligación del voto directo:

- a) La designación de los candidatos a electores de presidente y vicepresidente de la Nación, y de senadores por la Capital Federal, la que deberá ser realizada en la forma que determine la carta orgánica;
- b) La designación de autoridades superiores de los partidos de distrito, nacionales y confederados, la que deberá realizarse en la forma que determine la carta orgánica.

Artículo 27. — 1) Agregar al final: «... la que comporta mandato del partido para los electos».

Artículo nuevo. — (Después del artículo 29): «No podrá haber doble afiliación a un partido. La afiliación a un partido implicará la renuncia automática a toda afiliación anterior y su extinción. También se extinguirá, por renuncia, expulsión, o por violación de lo dispuesto en los artículos 28 y 29, debiendo cursarse la comunicación correspondiente al juez electoral nacional.»

Artículo nuevo. — (A continuación del artículo 37): «Los candidatos a cargos electivos deberán ser afiliados del partido con la antigüedad mínima de un año, salvo el partido que tenga una existencia menor.»

Artículo 39. — Suprimirlo.

Artículo 74. — Sustituir donde dice: «... de cada distrito» por «... del distrito de su jurisdicción».

Artículo 83. — Reemplazar donde dice: «...que aseguren fundamentalmente la defensa en juicio», por: «...en relación con la naturaleza de la materia».

Artículo 86. — Reemplazar donde dice: «...siempre que solicite su inscripción», por: «...siempre que solicite la ratificación de su inscripción».

Reemplazar donde dice: «...del domicilio de la fundación o de las autoridades centrales», por: «...del domicilio de las autoridades centrales».

Artículo nuevo. — (A continuación del artículo 86.): El incumplimiento por los partidos preexistentes de las condiciones previstas en el artículo anterior para conservar la personalidad jurídico política, operará la caducidad de la misma, la que será declarada en cada caso por sentencia de la Justicia Electoral Nacional.

Horacio García. — Adolfo R. Rouzaut. — Santiago Felipe Llaver. — Angel H. Ortiz Hernández.

2

Inciso b), artículo 39: suprimir.

Inciso 19, artículo 89 — En lugar de «dos o más», ocho o más.

Inciso 39, artículo 16. — Suprimir la frase: «Así como también por los partidos a los cuales les haya sido cancelada su personalidad política.»

Artículo 21. — Reemplazarlo por el siguiente: «No se otorgará reconocimiento a ningún partido que en su doctrina, declaración de principios, programa o base de acción política promueva la desobediencia a las leyes, la sustitución por la violencia de los poderes constituidos o la reforma de la Constitución Nacional por medios distintos a los que la misma establece.»

Artículo 22. — Suprimirlo por el siguiente: «En ningún caso el reconocimiento a un partido político podrá ser negado invocando hechos anteriores a la vigencia de la presente ley.»

Artículo 63, inciso c). — Reemplazar la frase «en los artículos 39, 21 y 22» por «en el artículo 21».

Horacio O. Domingorena. — Vicente M. Musacchio.

3

He firmado el despacho de mayoría, en cuyo estudio y redacción participé desde el primer momento.

Las disidencias parciales que acompaño son las resueltas por el bloque de la Federación de Partidos de Centro, el que participa de la mecánica seguida en la redacción del despacho, habiendo acordado las disidencias parciales que serán fundadas en el debate en particular, y que son las siguientes:

Artículo 39 — Agregar como inciso d) el siguiente:

- d) La no subordinación, con respecto a entidades o partidos internacionales o a Estados, partidos o personas extranjeras o domiciliadas en el extranjero.

Agregar como inciso e) el inciso d) del despacho de mayoría.

Artículo 59 — Reemplazar su texto por el siguiente:

Artículo 59 — Esta ley se aplicará a los partidos que intervengan en las elecciones de autoridades nacionales y así mismo a los que concurran a elecciones municipales en la ciudad de Buenos Aires y en el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 22. — Agregar como inciso l) el siguiente:

- l) No cumplen con las condiciones exigidas en el artículo anterior los partidos que, en su doctrina política o por la vía de sus organismos o autoridades estatutarias y candidatos, auspicien o realicen de modo directo, actos violatorios de los principios democráticos, o propicien la implantación, en forma directa o indirecta, de regímenes autocráticos o totalitarios.

Agregar en el apartado 2, inciso a): «en una persona, un partido, agrupación gremial u organización de intereses económicos o financieros».

Suprimir el inciso h).

Artículo 33. — Suprimirlo.

Artículo 34. — Agregar en el apartado 1, lo siguiente:

Los partidos que adoptaren el sistema de convenciones, deberán realizar la elección primaria por voto directo, secreto y obligatorio de los afiliados.

Artículo 38. — Sustituir el inciso e) por el siguiente:

- e) Los que desempeñaren cargos directivos o fuesen apoderados de sindicatos con personería gremial otorgada de acuerdo con la ley 14.455, o de empresas concesionarias de servicios públicos de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.

Artículo 39. — Suprimirlo.

Artículo 43. — Suprimir la expresión «y documentos» en el primer párrafo.

Suprimir el inciso a).

Agregar como apartado 2, el siguiente:

2. Además, los comités centrales de distrito llevarán el fichero de afiliados.

Guillermo A. Belgrano Rawson.

4

1º — Se sustituyen los artículos 1º a 8º por los nueve artículos siguientes:

Artículo 1º — Los ciudadanos tienen el derecho de asociarse para formar partidos políticos, de conformidad con la presente ley. También de acuerdo con ella los par-

tidos tienen derecho a su propio gobierno y su libre funcionamiento.

Artículo 2º — Compete exclusivamente a los partidos organizados de acuerdo con la presente ley la nominación de candidatos a cargos públicos electivos.

Artículo 3º — 1. La existencia de los partidos requiere:

- a) La coincidencia de un número de ciudadanos no menor al que determina esta ley, unidos por un vínculo permanente;
- b) La declaración y práctica de una doctrina política que propugne expresamente el respeto a los derechos humanos y el régimen republicano democrático, con pluralidad de partidos actuando en libertad;
- c) Organización estable y funcionamiento reglados por una carta orgánica ajustada en lo interno al sistema democrático: renovación periódica de los organismos partidarios y elección de ellos y de los candidatos, directa o indirectamente, por sus afiliados;
- d) La no subordinación con respecto a entidades o partidos internacionales o a Estados, entidades, partidos o personas extranjeros o domiciliados en el extranjero;
- e) Reconocimiento judicial de su personalidad política como partido, la que comporta la inscripción en el registro correspondiente.

2. Violan los requisitos de los incisos b) y c) los partidos que por su doctrina o en su actuación auspicien en forma directa o indirecta o lleven a la práctica, en su acción exterior o en su organización y vida interna, la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático por cualquier otro, el empleo ilegal y sistemático de la fuerza o la concentración personal del poder.

Artículo 4º — El reconocimiento judicial de su personalidad política otorga a los partidos la calidad de personas jurídicas de derecho privado.

Artículo 5º — Esta ley se aplicará a los partidos que intervengan en las elecciones de autoridades nacionales y así mismo a los que concurren a elecciones municipales en la ciudad de Buenos Aires y en el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 6º — El control de la vigencia efectiva de las normas de la presente ley en cuanto a la organización, funcionamiento y acción de los partidos corresponde a la justicia nacional electoral.

Artículo 7º — 1. La personalidad política como partido de distrito será reconocida a toda agrupación política que se presente solicitándola al juez nacional electoral competente y acompañando:

- a) Acta de fundación y constitución como partido, que acredite la adhesión de un número de ciudadanos electores del distrito correspondiente no inferior al cuatro por mil (4‰) del total de los inscritos en el registro electoral del mismo hasta un máximo de un millón y sin computar el excedente. Este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en que conste el nombre, domicilio y número de la matrícula de enrolamiento de los firmantes;
- b) El nombre adoptado por la asamblea de fundación y constitución;
- c) La declaración de principios y el programa o bases de acción política, sancionados por la asamblea de fundación y constitución;
- d) La carta orgánica sancionada por la misma asamblea;
- e) Acta de designación de las autoridades promotoras, las que deberán convocar a elecciones para designar las autoridades definitivas del partido conforme con la carta orgánica y dentro de los seis meses a contar desde la fecha del reconocimiento;
- f) Denuncia del domicilio partidario y acta de designación de los apoderados.

2. Obtenido el reconocimiento, los partidos deberán presentar al juez electoral que lo otorgó:

- a) Dentro de los dos meses, los libros a que se refiere el artículo 40, a los fines de su rubricación;
- b) Dentro de los ocho meses, el acta de la elección de autoridades definitivas.

Artículo 8º — 1. Se consideran partidos nacionales los que se integran por dos o más partidos de distrito unidos por un vínculo permanente, bajo un mismo nombre, una misma declaración de principios y programa o bases de acción política nacionales, una carta orgánica nacional y una misma autoridad superior.

2. En los partidos nacionales, los partidos de distrito carecen del derecho de secesión. En cambio, los organismos centrales competentes tendrán el derecho de intervención a los distritos.

Artículo 9º — 1. Los partidos de distrito que deseen integrar un partido nacional deberán expresarlo así en el acta de su fundación y constitución, o posteriormente por los medios que prevea su carta orgánica o, en caso de no preverlo, por decisión del organismo capacitado para reformarla. El acta en que conste esa decisión se registrará en el juzgado electoral del distrito.

2. Se reconocerá personalidad política como partido nacional a toda agrupación política que se presente solicitándola al juez nacional electoral del distrito de su fundación, o del distrito donde hayan de funcionar sus autoridades nacionales, acompañando:

- a) Acta de su fundación y constitución;
- b) Declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica nacionales;
- c) Actas de designación de las autoridades nacionales del partido y de las autoridades del distrito;
- d) Denuncia del domicilio partidario central y acta de designación de los apoderados;
- e) Constancias auténticas de haberse llenado en dos o más distritos, incluyendo el de la presentación, los requisitos del artículo 7º y los del apartado 1 del presente. De tales recaudos deberá surgir la coincidencia de los partidos de distrito en los puntos del apartado 1 del artículo 8º.

3. El juez nacional electoral que reconozca a un partido personalidad política como partido nacional, deberá comunicarlo a los jueces nacionales electorales de los otros distritos donde se haya registrado el mismo partido.

2º — Se suprimen los artículos 9º y 10. El 9º por innecesario; el 10 va como párrafo 2 del artículo 8º.

3º — Se sustituyen los artículos 11 a 16 por los siguientes:

Artículo 11. — 1. Esta ley se aplicará a la constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de las confederaciones de partidos, sean nacionales, de distritos o de un mismo partido.

2. Los partidos confederados tienen el derecho de secesión y podrán denunciar el acuerdo que los confedera. En cambio, sus organismos centrales carecen del derecho de intervención, salvo disposición estatutaria en contrario.

Artículo 12. — El reconocimiento de las confederaciones deberá ser solicitado al juez

nacional electoral del lugar de su fundación, acompañando:

- a) Acta de fundación y constitución, con especificación de los partidos que se confederan, y justificación de la voluntad de integrar la confederación con carácter permanente, expresada por medio de los órganos partidarios competentes;
- b) Testimonios de las resoluciones que reconocen personalidad a cada uno de los partidos que se confederan;
- c) El nombre adoptado para la confederación;
- d) La declaración de principios, el programa o bases de acción política y la carta orgánica de cada partido confederado y los de la confederación;
- e) La nómina de las autoridades de cada partido confederado;
- f) Actas de designación de las autoridades y de los apoderados de la confederación;
- g) Denuncia del domicilio central de la confederación.

Artículo 13. — 1. Esta ley se aplicará a los nuevos partidos que resulten de la fusión de dos o más partidos ya reconocidos.

2. El reconocimiento del partido fusionado deberá ser solicitado al juez nacional electoral del lugar del domicilio de cualquiera de los partidos preexistentes que lo formen, cumpliendo los requisitos establecidos en los incisos b) a f) del apartado 1) del artículo 7º y acompañando actas o testimonios de las resoluciones de los partidos que se fusionan, emanadas de sus autoridades competentes. Oportunamente el partido fusionado deberá cumplir las exigencias del apartado 2) del mismo artículo 7º.

Artículo 14. — 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, los partidos de distrito o nacionales y las confederaciones de partidos podrán concertar alianzas transitorias con motivo de una determinada elección.

2. Los partidos políticos aliados deberán requerir de la justicia nacional electoral el reconocimiento de su alianza, mediante presentación conjunta o simultánea con la que se acreditará:

- a) La coincidencia de voluntades de los organismos partidarios competentes y el objeto de la alianza;
- b) El nombre adoptado por la alianza;
- c) La plataforma electoral común con que los partidos aliados concurrirán al comicio;

- d) La forma acordada para la integración de las listas y designación de los candidatos, que deberá ajustarse, respecto a los propuestos por cada partido, a las normas de la presente ley;
- e) La designación de apoderados comunes a los partidos aliados.

3. El reconocimiento de la alianza se recabará del juez del distrito en que ella se haga efectiva o, en caso de ser uno de los aliados o ambos un partido nacional o una confederación, del juez del domicilio central; y éste deberá comunicar el reconocimiento que haya hecho a los jueces nacionales electorales de los distritos en que los partidos aliados hayan de presentarse al comicio con listas comunes de candidatos.

Artículo 15. — Ningún partido o alianza de partidos podrá presentarse a oficializar listas de candidatos para una elección determinada, si no hubiese solicitado su reconocimiento en legal forma con antelación no menor de dos meses a dicha elección, acompañando los recaudos pertinentes.

Artículo 16. — 1. Los partidos tienen derecho al nombre adoptado o que adopten de acuerdo con la presente ley, a su registro y su uso.

2. El nombre adoptado en el acto de la constitución del partido podrá ser ulteriormente modificado o cambiado por el órgano competente para reformar la carta orgánica.

3. La denominación «partido» únicamente podrá ser utilizada por los partidos en constitución, por los reconocidos y por aquéllos a los cuales les haya sido cancelada su personalidad política.

4. El nombre no podrá contener designaciones personales ni derivados de ellas, ni provocar confusión material o ideológica y deberá distinguirse razonablemente del de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

5. La denominación de los partidos no podrá formarse mediante aditamento o supresión de vocablos correspondientes a los nombres de partidos reconocidos, ni podrán usarse los vocablos argentino, nacional o internacional o sus derivados, o vocablos cuyo significado afecte o pueda afectar las relaciones internacionales de la Nación o implicar antagonismo de razas o religiones, o que contravengan otras disposiciones de esta ley.

4º — Artículo 18. Se sustituye el apartado 3) por el siguiente:

3. Los partidos reconocidos o en constitución podrán oponerse a que se reconozca a otro el derecho a determinado nombre,

antes de que el juez nacional electoral resuelva al respecto o en el acto de la audiencia que determina el artículo 74, sin perjuicio del ejercicio de las acciones pertinentes.

59 — Se sustituye el artículo 19 por el siguiente:

Artículo 19. — Los partidos deberán constituir domicilio legal en la ciudad capital del distrito en el que solicitaren su reconocimiento. Así mismo deberán denunciar los domicilios partidarios central y local.

60 — Se sustituyen los artículos 21 a 25 por los siguientes:

Artículo 21. — La declaración de principios y el programa o bases de acción política deberán ajustarse a la exigencia del artículo 39, apartado 1), inciso b), y orientarán la acción del partido.

Artículo 22. — La declaración de principios y el programa o bases de acción política sólo pueden ser sancionados, cambiados o modificados por el órgano deliberativo de jerarquía superior del partido o confederación de partidos y deben ser aprobados por la Justicia Nacional Electoral, previa verificación de su conformidad con las exigencias de la presente ley.

Artículo 23. — La carta orgánica reglará la organización y el funcionamiento del partido con arreglo a los siguientes principios:

- a) Gobierno y administración distribuidos en órganos deliberativos y ejecutivos. Las convenciones, congresos o asambleas generales serán los órganos de jerarquía superior del partido;
- b) Apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año durante un término mínimo de cuarenta días, anunciada con un mes de anticipación. La carta orgánica deberá asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión vinculada con la afiliación;
- c) Participación y control de los afiliados en el gobierno y administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos, sea por medio del voto directo o indirectamente por medio de organismos colegiados;
- d) Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de esta ley;

e) Determinación de las causas y la forma de extinción del partido.

Artículo 24. — 1. La carta orgánica es la ley fundamental del partido y a ella deben ajustarse obligatoriamente su actuación las autoridades partidarias y los afiliados.

2. Los organismos partidarios podrán regir la actividad interna del partido y la suya propia mediante reglamentos dictados con arreglo a la carta orgánica.

Artículo 25. — La carta orgánica y sus modificaciones deberán ser sancionadas por el órgano deliberativo de jerarquía superior del partido y aprobadas por la Justicia Nacional Electoral, previa verificación de su conformidad con las exigencias de la presente ley.

70 — Se suprime el artículo 26.

80 — Se sustituyen los artículos 28 a 32 por los siguientes:

Artículo 28. — Para afiliarse a un partido se requiere:

- a) Tener domicilio en el distrito en que se solicite afiliación;
- b) Comprobar identidad con la libreta de enrolamiento o cívica;
- c) Presentar por cuadruplicado una ficha-solicitud que contenga: nombre, domicilio, matrícula de enrolamiento, año de nacimiento, sexo, estado civil, profesión u oficio y la firma o la impresión digital del solicitante, cuya autenticidad deberá ser certificada por funcionario público competente o por las autoridades partidarias que determinen la carta orgánica o en su defecto los organismos ejecutivos, autoridades cuya nómina deberá ser entregada a la Justicia Nacional Electoral. La afiliación podrá también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de la misma certificará la autenticidad de la firma o impresión digital. Las fichas-solicitud serán suministradas sin cargo por la Justicia Nacional Electoral a los partidos reconocidos o en constitución.

Artículo 29. — No pueden ser afiliados:

- a) Los excluidos del registro electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;
- b) El personal de las fuerzas armadas de la Nación en actividad; y así mismo el que se encuentre en situación

de retiro, cuando haya sido convocado a prestar servicio;

- c) El personal de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias en actividad; y así mismo los jubilados llamados a prestar servicio;
- d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Buenos Aires.

Artículo 30. — 1. La calidad de afiliado se adquirirá a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes aceptando la solicitud respectiva. Una ficha de afiliación se entregará al interesado, otra será conservada en el partido y las dos restantes se remitirán a la Justicia Nacional Electoral.

2. La afiliación se extingue por renuncia presentada al partido o a la Justicia Nacional Electoral, por expulsión o por encontrarse el afiliado en alguna de las situaciones del artículo 29. La afiliación a un partido implicará automáticamente la renuncia a toda afiliación anterior.

3. El partido comunicará al juez nacional electoral todo hecho que importe la extinción de una afiliación que se le presente, en ambos casos en el término de un mes.

Artículo 31. — El registro de afiliados estará constituido por el ordenamiento actualizado de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores y será llevado paralelamente por el partido y por la Justicia Nacional Electoral.

Artículo 32. — El padrón partidario será público. Será confeccionado por el partido o por la Justicia Nacional Electoral a petición de aquél. En el primer caso deberá remitirse al juez nacional electoral antes de cada elección interna o cuando él lo requiera, actualizado y autenticado. En el segundo, se confeccionará en base al registro que llevará al juzgado y se entregará sin cargo a los partidos, actualizado, con antelación suficiente a cada elección interna.

99. — Se suprime el artículo 33.

10. — Se sustituyen los artículos 34, 38, 41, 43 y 44 por los siguientes:

Artículo 34. — 1. Los partidos practicarán en su vida interna el sistema democrático, a través de elecciones periódicas para la nominación por los afiliados de las autoridades partidarias y de los candidatos. Se admitirán las elecciones indirectas por el sistema de convenciones.

2. El voto de los afiliados será secreto.

3. Cuando para una elección interna se oficialice una sola lista de candidatos, podrá prescindirse del acto eleccionario.

Artículo 38. — No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos ni ser designados para ejercer cargos partidarios los que según el artículo 29 no pueden ser afiliados ni los que sean miembros de la comisión directiva de un sindicato con personería gremial otorgada de acuerdo con la ley 14.455.

Artículo 41. — Las autoridades partidarias constituidas tienen derecho exclusivo al uso del nombre del respectivo partido y serán protegidas en él, así como en el ejercicio de las funciones de gobierno y administración del mismo que les competen y en general en el desempeño de todas las actividades inherentes, de conformidad con esta ley y la carta orgánica.

Artículo 43. — 1. Sin perjuicio de los libros y documentos que prescribe la carta orgánica, los partidos deberán llevar, por intermedio de su comité central, los siguientes libros, rubricados y sellados por el juez nacional electoral correspondiente:

- a) Libro de inventario;
- b) Libro de caja;
- c) Libro de actas y resoluciones.

2. Los partidos de distrito deberán llevar, además, el fichero de afiliados.

3. La documentación complementaria de la contabilidad deberá conservarse por el término de tres años.

Artículo 44. — La propaganda y proselitismo partidarios son libres, dentro de la letra y el espíritu de esta ley y demás disposiciones aplicables, en tanto no afecten derechos de terceros o el orden o la moral públicos.

11. Se suprime el artículo 45.

12. Se sustituyen los artículos 47 y 48 por uno solo que diga:

Artículo 47. — 1. Los partidos reconocidos tendrán derecho al registro y al uso exclusivo de sus símbolos y emblemas.

2. Regirá en esta materia lo dispuesto con respecto al nombre por los artículos 16 a 18, en cuanto sea aplicable.

13. — Se sustituye el artículo 51 por el siguiente:

Artículo 51. — Los partidos no podrán aceptar o recibir, directa ni indirectamente:

- a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes podrán imponer cargo de que sus nombres no se di-

vulguen, pero los partidos deberán conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la donación por tres años;

- b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas de la Nación, las provincias o las municipalidades; de empresas concesionarias de servicios públicos o contratistas de obras públicas de la Nación, las provincias o las municipalidades; de empresas que exploten juegos de azar, o de gobiernos o entidades extranjeros;
- c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales con personería gremial otorgada de acuerdo con la ley 14.455;
- d) Contribuciones o donaciones de personas que se encontraren en situación de subordinación administrativa o en relación de dependencia, cuando hubieran sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o empleadores.

14. — Dividir el artículo 52 en dos artículos, a saber:

Artículo 52. — Los apartados 1) y 2) del artículo 52 del despacho.

Artículo 52 bis. — El apartado 3) del artículo 52 del despacho; pero en el inciso c), después de «aportes o donaciones», agregar: «compulsivos».

15. — Se modifica el artículo 56 en la siguiente forma:

a) En el apartado 1), después de «partidos» agregar: «o confederaciones de partidos»;

b) En el apartado 2) suprimir la palabra «fehaciente».

16. — Se modifica el artículo 58 en la siguiente forma:

a) En el encabezamiento, después de «partidos» agregar: «y confederaciones de partidos»;

b) Suprimir el inciso g);

c) Suprimir el apartado 2).

17. — Se sustituye el inciso c) del artículo 63 por el siguiente:

- c) Cuando la actividad del partido, a través de la acción de sus autoridades, o de sus candidatos, no desautorizados por aquéllas, fuere atentatoria a los principios o requisitos establecidos en el artículo 39.

18. — Se sustituye el artículo 64 por el siguiente:

Artículo 64. — La cancelación de la personalidad política y la extinción de los partidos serán declaradas por sentencia de la justicia nacional electoral, siguiendo el procedimiento de los artículos 77 y siguientes.

19. — Se sustituye el artículo 86 por el siguiente:

Artículo 86. — 1. Los partidos y las confederaciones de partidos existentes y reconocidos a la fecha del comienzo de la vigencia de esta ley conservarán su personalidad política, su nombre y demás atributos, derechos y poderes inherentes a la misma, en los distritos en que hayan actuado en virtud de aquélla, siempre que soliciten la ratificación de su inscripción ante la Junta Nacional Electoral, dentro de los tres meses.

2. Dentro del plazo de un año a contar de la vigencia de esta ley los partidos y las confederaciones de partidos que soliciten la ratificación de su inscripción deberán adecuar su organización y funcionamiento a las normas de la misma. De no hacerlo así, se operará la caducidad de su personalidad política.

Pablo González Bergez.

5

Sin perjuicio de algunas otras observaciones de detalle que serán materia de las respectivas puntualizaciones en el recinto, los suscritos, en representación del bloque de la Unión del Pueblo Argentino, formulan las que a continuación se expresan, como consecuencia de la disidencia parcial señalada al despacho producido sobre el proyecto de ley de Estatuto de los Partidos Políticos:

19. — Proponemos la sustitución del artículo 19 por el siguiente:

Se garantiza a la ciudadanía la defensa del régimen democrático mediante el derecho de asociación política para organizarse en partidos políticos.

Entendemos que el objetivo primordial del estatuto es regir la vida de los partidos para que éstos constituyan el substrato de la democracia, evitando que por razón de una inorgánica subsistencia sirvan a los fines de coonestar cualquier intento totalitario. Sentado este objetivo, el derecho de asociación a tales propósitos es su consecuencia.

2º. — Proponemos la intercalación de la expresión «o indirecta» entre las palabras «directo» y «actos» del inciso 1º del artículo 22.

Creemos que los partidos políticos que auspician directa o indirectamente actos violatorios de los principios democráticos no satisfacen las exigencias del artículo 3º, inciso b).

3º. — Proponemos como agregado al artículo 22, y como inciso 1º, el siguiente: «La apología de regímenes o sistemas autocráticos o totalitarios.»

Pensamos que nunca habremos de excedernos los hombres sinceramente democráticos en la defensa del único modo de vida del hombre en libertad. De ahí que no pueda investir el calificativo de democrático el partido que caiga dentro de la mencionada cláusula prohibitiva.

Jorge J. Christie.

6

Artículo 18 bis. — Se reconoce así mismo a los partidos el derecho al uso permanente de un número de identificación, el que será asignado por la Justicia Nacional Electoral y registrado de acuerdo a lo establecido en el artículo 49. Dicho número será el mismo, adjudicado definitivamente para cada partido, en todos los distritos.

La primera vez la adjudicación se realizará por sorteo y en los partidos que en el futuro se reconozcan, en el orden numérico correspondiente a la fecha de su reconocimiento.

Artículo 42. — Agregar después de «emblemas», la palabra «número».

Artículo 47. — Suprimir la conjunción «y» entre las palabras «símbolos» y «emblemas» y agregar a continuación de esta última la expresión «y número».

Artículo 49, inciso b) bis. — El número asignado a cada partido;

Camilo Muniagurria. — Rafael J. Martínez Raymonda. — Ricardo F. Molinas.

7

1º — Sustituir el inciso b) del artículo 3º por el siguiente:

Compromiso de promover el bien común, sostener las formas representativas de gobierno y reconocer y garantizar los derechos humanos y cívicos, ratificados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sancionada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

2º — Sustituir el inciso l) del artículo 8º por el siguiente:

Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personalidad jurídico-política como partido nacional, deberá constituirse de acuerdo a cualquiera de las dos formas siguientes:

- a) Por acuerdo de delegaciones de distrito reunidas en asamblea nacional, que resuelvan y ejecuten una posterior presentación simultánea o sucesiva, en no menos de doce distritos;
- b) Por presentación ante el juez nacional electoral del distrito de su fundación con las constancias debidas, de su constitución en no menos de doce distritos.

3º — Suprimir en el inciso 3º del artículo 16, el párrafo que dice:

...como así también por los partidos a los cuales les haya sido cancelada su personalidad política.

4º — Sustituir en el artículo 21, las palabras «formal y real» por «expresamente».

5º — Supresión del artículo 22.

6º — Agregar al final del inciso d) del artículo 23 el siguiente párrafo:

...garantizando por lo menos la representación de una minoría, siempre que ésta alcance el 25 % de los votos emitidos en cada caso.

7º — Agregar como artículo nuevo (28 bis) el siguiente:

No podrá prohibirse la afiliación, ni el consiguiente ejercicio de los derechos correspondientes, bajo ningún concepto, a los funcionarios o empleados públicos en general, o de las reparticiones autárquicas, empresas estatales o mixtas, docentes, funcionarios o empleados u obreros de las empresas privadas, ni a ningún ciudadano no comprendido en las prohibiciones expresamente determinadas por la presente ley.

8º — Agregar al inciso g) del artículo 58, el siguiente párrafo:

No podrá acumularse en una misma persona la retribución prevista en este inciso con la de legislador nacional.

9º — Suprimir en el inciso c) del artículo 63, los términos «y 22».

Enrique de Vedia.

INFORME

El proyecto de ley reglamentario de los partidos políticos, enviado por el Poder Ejecutivo, ha sido analizado exhaustivamente por las comisiones a las cuales fue girado, conforme a las disposiciones reglamentarias. Como pocos proyectos, ha sido objeto de consultas amplias, no solamente a los partidos reconocidos, sino también a otras fuerzas políticas y a gran cantidad de personas e instituciones autorizadas. Es decir, que el proyecto que se aconseja sancionar es la consecuencia de una larga elaboración y constituye un esfuerzo grande y sincero, encaminado a dotar al país de un instrumento apropiado para el ordenamiento de sus fuerzas políticas.

Quienes firman el despacho no pretenden haber elaborado una proposición perfecta; creen que constituye, eso sí, una contribución elevada para el progreso institucional de la República.

El hecho de presentarse un dictamen casi unánime, marca una voluntad; con la sola excepción de un sector de los representados en las comisiones, todos los demás han coincidido en algo fundamental, cuya trascendencia deberá medir el país: un despacho común, con la coincidencia en lo medular. Desde luego, las disidencias parciales existen, y cada grupo político las ha concretado. No podía ser de otra manera. La unanimidad en un todo no hubiera podido lograrse en materia tan compleja, pero en los principios básicos sí.

Es este un proyecto que si se sanciona, constituirá un avance para el ordenamiento de los partidos políticos, que, institucionalizados, constituyen el esquema básico de la democracia. Su aplicación irá marcando sus posibles defectos, que se podrán corregir. Lo importante es que se aplique, a fin de que las prácticas de la democracia se introduzcan necesariamente en todos los partidos para concluir con las deformaciones que paulatinamente influyen en forma negativa en la vida institucional. El día que todos los partidos observen las prácticas democráticas en su vida interna con plenitud, no habrá que temer por la continuidad de la democracia argentina.

Este proyecto no contiene trampas ni segundas intenciones ocultas. Es decir, no está encaminado a sofocar la vida política argentina. Da los elementos necesarios para que aquellos partidos que no adecuen su organización interna y su acción pública a las normas del proyecto, sean estudiados por la justicia.

En adelante, toda la materia vinculada con los partidos políticos quedará en manos del Poder Judicial. Creemos que ello eliminará toda posibilidad de arbitrariedades por parte del poder político, cualquiera sea el partido que lo ejerza. Con ello se brindan elementos de gran utilidad para la moralización del país y la estabilidad real de los partidos políticos.

Tales son algunas de las notas características de este dictamen. El miembro informante dará en el debate la fundamentación de todo el proyecto, para el cual se solicita el voto favorable de la Honorable Cámara.

Guillermo A. Belgrano Rawson. —
José Frega. — Fermín J. Garay.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda han tomado en consideración el proyecto de ley orgánica de los partidos políticos enviado por el Poder Ejecutivo, las iniciativas de los señores diputados Muñiz y otros, Fernández (J.) y otros y Massolo y peticiones particulares vinculadas con el tema; y, por las razones que dará el miembro informante y las que hace mérito el informe escrito correspondiente, os aconsejan, en minoría, la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Los partidos políticos constituidos o que se constituyan para intervenir en la elección de miembros de los poderes públicos de la Nación, del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires deberán ajustarse a las disposiciones de la presente ley.

Art. 2º — El Estado garantiza el libre funcionamiento de los partidos políticos en todo el territorio de la Nación.

Art. 3º — La aplicación de las disposiciones de esta ley estará a cargo de los jueces encargados del registro electoral en cada uno de los distritos electorales.

Art. 4º — Las agrupaciones políticas que se propongan actuar en más de un distrito deberán solicitar su reconocimiento ante el juez electoral de la Capital Federal, y solicitar la inscripción de testimonios del auto que los reconozca como partidos políticos, así como del acta de designación de apoderados de distrito, ante el juez electoral de cada uno de los distritos donde tengan el propósito de actuar. Esta inscripción sólo podrá ser denegada en caso de que en el mismo distrito ya estuviera inscrito otro partido de nombre igual o notoriamente confundible.

Art. 5º — El reconocimiento de los partidos políticos será automático, y sólo estará supeditado a los siguientes requisitos:

- a) Presentación de una solicitud de reconocimiento con las firmas de adherentes en número no inferior al uno por mil de los electores inscritos en el padrón electoral de la Capital Federal, en el caso de partidos que deseen actuar en más de un distrito; o en número no inferior al uno por mil de los electores inscritos en el padrón electoral del distrito en el que deseen inscribirse como partido de distrito solamente. En todos los casos el número de adherentes no podrá ser inferior a quinientos;
- b) Presentación de la declaración de principios del partido, la que no deberá contener manifestaciones contrarias al régimen republicano y representativo de gobierno, a la separación de poderes, ni a las libertades, derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional, sin perjuicio de que puedan propugnar expresamente la reforma por las vías legales de la Constitución Nacional;
- c) Presentación de la carta orgánica de la agrupación, que asegure la participación de los afiliados en la dirección y fiscalización de las actividades del partido;
- d) Acta de constitución provisional del partido, y designación de dos apoderados, con indicación de su domicilio, para que representen a la agrupación ante la justicia electoral;
- e) Un nombre que no contenga designaciones personales y que se distinga razonablemente del nombre de otros partidos reconocidos. Cuando la agrupación que solicite su reconocimiento sea una fracción o desmembramiento de un partido reconocido, deberá agregar al nombre del partido de origen un aditamento que la distinga claramente de éste.

Art. 6º — Toda reforma del nombre, de la declaración de principios o de la carta orgánica de los partidos reconocidos deberá ser presentada para su inscripción ante el juzgado electoral que otorgó el reconocimiento, con sujeción a los recaudos previstos por el artículo 5º, incisos b), c) y d), de esta ley.

Art. 7º — El reconocimiento de un partido político implica el de su personería jurídica de derecho privado, a los efectos de adquirir derechos y obligaciones con arreglo al Código Civil.

Art. 8º — Los partidos actualmente existentes deberán inscribirse ante la justicia electoral de la Capital Federal en la forma establecida en el artículo 4º de esta ley, pero no les serán aplicables las disposiciones del artículo 5º. Dicha inscripción deberá gestionarse en el plazo de treinta días hábiles a partir de la promulgación de esta ley, bajo pena de caducidad de los partidos que así no lo hicieren.

Art. 9º — Las actuaciones judiciales relativas a los partidos actualmente en formación que tramitarán ante los jueces electorales que correspondan de acuerdo al artículo 4º de esta ley, y el reconocimiento de tales partidos se otorgará conforme al artículo 5º de esta ley.

Art. 10. — Los partidos políticos reconocidos podrán constituir libremente coaliciones o alianzas en el orden nacional o en uno o más distritos a los efectos de una elección determinada, y adoptar una denominación común, sin perjuicio de indicar en todos sus actos públicos y en las boletas de sufragio la nómina de los partidos integrantes de la alianza o coalición. A fin de poder participar en la elección de que se trate, dichos partidos deberán comunicar la constitución de la alianza o coalición al juez o a los jueces electorales que correspondan con arreglo a los artículos 3º y 4º de esta ley, con treinta días de anticipación a la fecha del comicio.

Art. 11. — Los partidos políticos reconocidos podrán integrar sus listas con candidatos extrapartidarios.

Art. 12. — Podrán constituirse federaciones de partidos de dos o más distritos, a cuyo efecto deberán gestionar su reconocimiento ante la justicia electoral de la Capital Federal, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5º, incisos b), c) y d), de esta ley.

Art. 13. — Los partidos políticos reconocidos deberán llevar como mínimo, por intermedio de sus autoridades de distrito, los siguientes libros, que deberán ser rubricados y sellados por el juez electoral del distrito respectivo:

- a) Libro de afiliados, con indicación de nombre, domicilio, matrícula, clase y ocupación, y con la firma e impresión digital de cada afiliado, o indicación del número de ficha de afiliación donde figure dicha firma o impresión digital. El uso de fichas de afiliación es optativo;
- b) Libro de inventario, rubricado y sellado por el juez electoral del distrito respectivo;
- c) Libro de caja, rubricado y sellado por el juez electoral del distrito respectivo.

Art. 14. — Los partidos políticos reconocidos deberán efectuar balances anuales al 31 de diciembre de cada año, para cada distrito en que estén inscritos, los que deberán ser aprobados por las autoridades partidarias del respectivo distrito.

Art. 15. — Los libros, ficheros y balances a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta ley estarán permanentemente a disposición de los afiliados, quienes podrán examinarlos y formular las impugnaciones o denuncias que estimen corresponder.

Art. 16. — Los órganos centrales de los partidos que actúen en dos o más distritos deberán llevar libros de actas rubricados y sellados por

el juez electoral de la Capital Federal, y cumplir con los demás requisitos de los artículos 12 y 13 de esta ley, si de acuerdo con la carta orgánica tuvieran a su cargo la administración de fondos o bienes partidarios.

Art. 17. — No podrán afiliarse a los partidos políticos:

- a) Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad, con excepción de los conscriptos;
- b) Las personas excluidas del registro de electores;
- c) Los afiliados a otro partido;
- d) Los magistrados del Poder Judicial.

Los ciudadanos que infrinjan estas prohibiciones incurrirán en inhabilitación para elegir y ser elegidos por el término de dos años a partir de la notificación de la sentencia firme que así lo resuelva.

Art. 18. — No pueden ser candidatos a cargos públicos de elección directa:

- a) Los ciudadanos excluidos del registro electoral;
- b) Los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad;
- c) Los magistrados del Poder Judicial.

Art. 19. — Todas las actuaciones judiciales vinculadas con la aplicación de la presente ley se tramitarán en forma sumaria, verbal y actuada. En las solicitudes de reconocimiento de nuevos partidos se citará a audiencia, dentro del quinto día, a todos los partidos reconocidos o en formación del distrito de que se trate, y el juez se expedirá dentro de los tres días de celebrada la audiencia. Su resolución será apelable por todos los partidos que hayan concurrido a la audiencia. En los demás casos de acciones o denuncias vinculadas con la aplicación de la presente ley, se citará a audiencia dentro del quinto día a todas las partes interesadas.

Art. 20. — Todas las resoluciones del juez electoral serán apelables dentro de las cuarenta y ocho horas ante la cámara federal respectiva, la que deberá expedirse dentro de los diez días de recibir los autos.

Art. 21. — Las resoluciones de las cámaras federales que denieguen o revoken el reconocimiento como partido político serán apelables dentro de las cuarenta y ocho horas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que deberá resolver dentro de los diez días de recibidos los autos.

Art. 22. — Todas las actuaciones que deban cumplirse en virtud de la presente ley estarán exentas de todo impuesto o tasa, y las publicaciones que los jueces dispongan se harán sin cargo en el Boletín Oficial.

Art. 23. — Derógase el decreto ley 7.163/63 y se restablece la competencia que tenían en materia electoral los jueces y las cámaras fe-

derales a la fecha de la sanción de dicho decreto ley.

Art. 24. — Los partidos se disuelven:

- a) En los casos y en las formas que se determinen en las respectivas cartas orgánicas;
- b) Por violación de los artículos 13, 14, 15 ó 16 de la presente ley, declarada por sentencia firme le la justicia electoral. En caso de disolución, los bienes patrimoniales del partido tendrán el destino que establezca la carta orgánica.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Héctor Gómez Machado. — Juan C. Achiary. — Jorge W. Ferreira.

INFORME

Honorable Cámara:

El dictamen sobre ley de los partidos políticos que se somete a la consideración de esta Honorable Cámara responde tanto a una concepción orgánica de la democracia, como a consideraciones referidas a nuestra actualidad política. Se fundamenta, pues, en razones de principio y en argumentos de oportunidad. La República Argentina pasa por un momento de difícil transición, de cuya feliz superación depende el futuro de sus instituciones. Como aquellas dificultades se fundan, en gran medida, en la discutida representatividad que se atribuye a la organización de los poderes del Estado, el régimen de los partidos políticos constituye una pieza clave en una sincera política de reencuentro nacional.

Toda la doctrina moderna está conteste en que el sistema de partidos es el resorte fundamental del régimen político moderno. Las especulaciones de la antigua doctrina sobre las formas de gobierno se encuentran superadas. Partiendo de la base de que la democracia constituye el único principio de legitimidad aceptable en el siglo XX, de lo que se trata es de determinar cuál será el régimen político de acuerdo con el cual se organizarán las autoridades de la democracia. La respuesta a la cuestión está determinada de manera primordial por el sistema de partidos vigentes. Dicho sistema y el régimen electoral son los criterios que permiten distinguir un régimen político de otro. Desde luego, la adecuación de las instituciones que regulan a los partidos políticos y que definen el sistema electoral, a la estructura social y económica de un país, es la condición de que los principios democráticos que se proclaman sean realmente respetados en los hechos.

El proyecto que se acompaña tiene las siguientes características:

1º—Es un instrumento simple, en el que quedan excluidas las disposiciones detallistas y reglamentaristas que dificultan la formación espontánea y natural de las fuerzas políticas.

2º—Reduce al mínimo las atribuciones de control que corresponden al Estado, porque se considera que la experiencia nacional no aconseja su innecesaria multiplicación. El proyecto se basa en la idea de que no incumbe al Estado la custodia de la democracia sino a las propias fuerzas sociales organizadas.

3º—Elimina cualquier tipo de discriminación ideológica que pueda servir como instrumento de proscripción eventual, en manos de un gobierno enfrentado con perspectivas electorales desfavorables. Se limita a recabar de los partidos el acatamiento a los principios constitucionales.

4º—Establece un sistema simple y expeditivo para la presentación y reconocimiento de los partidos y dispone que la jurisdicción competente en lo contencioso-electoral es la justicia nacional ordinaria.

5º—Deja la más amplia libertad en materia de elección de candidatos, tanto por expresas razones constitucionales como porque nada aconseja una limitación en el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.

El estatuto acompañado pretende ser un instrumento absolutamente neutral, cuya aplicación se coloca en manos de instituciones también neutrales. Se limita a establecer lo mínimo indispensable para que el sistema partidario pueda funcionar orgánicamente, para que no proliferen fuerzas carentes de toda representatividad y para que cada uno de los partidos admitidos cumpla con aquellos requisitos que hacen a la honestidad de su conducción y al carácter democrático de sus propias autoridades.

La filosofía en que se funda el proyecto es, pues, una filosofía no intervencionista. La legislación comparada suministra suficientes antecedentes en esta línea, como para asegurar que las grandes democracias occidentales siguen una orientación semejante a la propuesta. No hay ninguna razón para creer que un instrumento intervencionista sea utilizado por el gobierno en defensa del interés general y con prescindencia de su propia conveniencia. En consecuencia se considera que el bien jurídico a preservar no es otro que el derecho político de los ciudadanos de expresarse de la manera que crean conveniente, de elegir los candidatos que realmente representen sus ideas e intereses y de participar en los actos electorales sin discriminaciones ni exclusiones practicadas en interés de las fuerzas circunstancialmente gobernantes.

Estas son las razones de orden general que fundamentan el proyecto. Pero, como es lógico, esta legislación es pensada para un país concreto y en atención a circunstancias muy pre-

cisas de su actualidad. El estatuto que proponemos se opone en ese sentido, de manera polémica, a toda la legislación vigente sobre la materia que fue sancionada durante el anterior gobierno defacto y al proyecto sometido por el Poder Ejecutivo nacional a consideración del Honorable Congreso.

Consideramos que toda esa legislación y, en especial, el proyecto del Poder Ejecutivo, apunta a la consecuencia de tres objetivos fundamentales:

- a) La consolidación de los actuales partidos y, dentro de ellos, de sus autoridades;
- b) La exclusión eventual del electorado peronista;
- c) La proscripción de cualquier entendimiento entre fuerzas afines, susceptible de dar base a una mayoría orgánica que pueda promover, desde el poder, las transformaciones que el país necesita.

El estatuto presentado a la Cámara es un instrumento al servicio de la democracia limitada. Nosotros queremos que el actual Congreso sancione una legislación que promueva en el país a la democracia de plena participación, sin exclusiones ni proscripciones. El proyecto del Ejecutivo intenta cristalizar la situación actual del país, que es inestable y de expectativa revolucionaria porque deforma la verdadera imagen de la sociedad argentina y porque se funda en la exclusión de un sector sin cuya integración no puede haber paz en la República. Nosotros estamos persuadidos de que sólo con una política diametralmente opuesta pueden conseguirse los ideales de paz y conciliación que todas las fuerzas representadas en el actual Congreso dicen sustentar.

En ese sentido, entendemos:

1º—Que toda pretensión de someter a los partidos a un contralor ideológico se propone dar base legal a la proscripción del peronismo en el próximo comicio y en los que le sucedan.

2º—Que la exclusión de candidaturas independientes configura un monopolio inconstitucional a favor de los actuales partidos y de las estructuras que los controlan.

3º—Que la profusa reglamentación en materia de nombres, organización interna, libros, aportes, etcétera, tiende a dejar en manos de una justicia que puede estar políticamente inspirada, un abanico de pretextos para excluir, a último momento, a quien pueda presentarse como el opositor triunfante.

En el proyecto acompañado se autorizan de manera explícita las candidaturas independientes. Esta autorización no es en realidad necesaria, ya que las cláusulas de la Constitución son definitivas en esta materia. Los requisitos para ser elegido a las funciones de gobierno están establecidos en el texto constitucional y ninguna otra autoridad que no sea la autorizada

para reformarlo puede modificarlos en uno o en otro sentido. Así como el Congreso no tiene facultades para reducir la edad constitucional para ocupar una senaduría, tampoco tiene potestad para agregar a los requisitos establecidos algún otro no previsto.

Precisamente, como el proyecto del Poder Ejecutivo incurre en esa arbitraria limitación de los derechos políticos de la ciudadanía, con lo que excluye de una de las manifestaciones del sufragio (el derecho a ser elegido) a la inmensa mayoría de la República, el texto que presentamos hace explícita una autorización jurídicamente sobreabundante. Estamos persuadidos que, de prosperar el proyecto oficialista en esta materia, se introducirá en el país un factor de inestabilidad de peligrosidad imprevisible. La pretensión de convertir a los partidos políticos en un estamento privilegiado amenazará el futuro de todo el régimen vigente.

Las breves consideraciones expuestas dan fundamento al proyecto que se acompaña. El Congreso Nacional tiene que tener conciencia de su propia composición. No disminuye en nada su dignidad reconocer el hecho objetivo de que no refleja, en la actualidad, la real composición de las fuerzas políticas nacionales. El futuro del país depende de que este período sea una transición hacia la plena democracia o un intento reaccionario de consolidar una situación irreal e injusta y, por lo tanto, destinada a concluir de manera tal vez abrupta. El Estatuto de los Partidos Políticos debe ser un instrumento simple al servicio de la transición y no un cuerpo profuso que, con la retórica de la defensa de la democracia, oculte el propósito de preservar privilegios contrarios al principio de la soberanía popular.

Héctor Gómez Machado.

ANTECEDENTES

1

MENSAJE 1.994 DEL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires, 19 de marzo de 1964.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley orgánica de los partidos políticos, en desempeño de su función constitucional de órgano colegislador y en cumplimiento de uno de los altos propósitos enunciados antes de llegar al ejercicio del gobierno. Con este acto, encara la complementación y desarrollo, con carácter orgánico y estable, del proceso institucional iniciado en la República por la ley Sáenz Peña, cuya segunda y actual etapa fue prevista por su propio inspirador cuando expresaba que el régimen electoral adoptado pretendía la formación de partidos fuertes, orgánicos y de profunda raigambre democrática.

En el mensaje con que acompañara el proyecto de ley que lleva su nombre, el 11 de agosto de 1911, el

presidente Sáenz Peña afirmaba que el nuevo sistema electoral exigía «para su buen funcionamiento, una sólida organización y una perfecta disciplina de los partidos políticos, de las cuales estamos aún muy distantes, y para las que puede ser una preparación el ensayo leal del sistema que en el proyecto se propone».

Elección, sufragio y partidos políticos, son instrumentos básicos insustituibles en la dinámica del gobierno representativo contemporáneo. Si este tipo de democracia significa el gobierno del pueblo por medio de sus representantes, la elección sólo puede hacerse a través del sufragio que permita la selección entre los candidatos previamente nominados por los partidos, en los que se canalizan y ordenan los distintos sectores de la opinión pública.

La organización constitucional más perfecta fracasará en la práctica si el sistema electoral no asegura con exactitud la auténtica expresión de la voluntad popular. Bien pudo afirmar Hipólito Yrigoyen que «la legalidad del comicio es la fuente de todo poder y la base y esencia de nuestro sistema político».

Para lograr su efectiva vigencia, es necesario que el proceso democrático no solamente condicione la estructura y la organización del Estado y la realización de comicios limpios y correctos. Es indispensable, además, que se cumpla mediante la intervención de partidos políticos democráticos en su espíritu y en su acción, capaces de llevar a la práctica, en toda su plenitud, las complejas y delicadas funciones que les son inherentes en la dinámica republicana.

La existencia y pluralidad de los partidos políticos hace a la esencia de la forma de gobierno adoptada por la Constitución Nacional (artículos 1º, 22 y concordantes). El derecho de los habitantes a agruparse en organizaciones partidarias, así como el de éstas a su fundación, constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento, son igualmente reconocidos y garantizados conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 14) las cuales, al hacerlo, no pueden alterar el derecho reglado (artículo 28).

Los altos propósitos que inspiran el proyecto, y a cuya efectiva realización se dirigen todas y cada una de sus disposiciones, se concretan en las siguientes bases esenciales que hacen a lo fundamental de su estructura:

I. — Consolida un sistema de partidos políticos genuinamente democráticos, tanto en su doctrina como en su funcionamiento, fuertes y orgánicos, y en condiciones de cumplir su misión de verdaderos instrumentos de gobierno en forma permanente y no sólo en ocasión de cada proceso eleccionario.

II. — Asegura una auténtica expresión de la voluntad popular en todos los aspectos de la vida interna del partido. Se da así vigencia al concepto de Matienzo, cuando decía que «no hay gobierno republicano posible si la libertad de sufragio no empieza a ser ejercida por los ciudadanos dentro de las agrupaciones políticas; es menester, pues, empezar por el principio: organizar republicanamente los partidos para organizar republicanamente la Nación».

III. — Estimula la participación ciudadana en las actividades partidarias procurando a los partidos la mayor representatividad posible y evitando que los ciudadanos se desinteresen de los problemas políticos. Como enseñaba Leandro N. Alem, «la vida política es necesaria e indispensable para un pueblo libre; la vida política que se alienta, por así decirlo, y se desenvuelve eficazmente en los partidos...», precisamente porque «son los esfuerzos, los celos y las rivalidades de los partidos los que engendran las

buenas instituciones y modifican las existentes con reformas saludables, poniendo de manifiesto las riquezas latentes de un país.

IV. — Garantiza en forma amplia y efectiva los derechos y libertades partidario-electorales, tanto en lo individual del ciudadano y afiliado como en lo colectivo del partido. Inspirado en la doctrina republicana, el proyecto respeta el ámbito natural de la dinámica partidaria y se limita a establecer el mínimo de medidas consideradas necesarias para asegurar en su seno la efectiva vigencia de la democracia. Es así que en lugar de consagrar un régimen intervencionista, se inclina por la ordenación de un adecuado sistema de garantías que tutelen en el hecho y en todos sus aspectos el libre ejercicio del derecho individual y colectivo de asociación política. Para ello se prevén los medios y recursos idóneos a fin de asegurar la plenitud de sus derechos a afiliados, autoridades partidarias, candidatos y ciudadanos en general. Dentro de ese concepto, toda la economía del proyecto se dirige a garantizar la democracia y libertad externas e internas de los partidos.

V. — Impone el ajuste de las actividades y conducta del partido, autoridades, candidatos y afiliados con las reglas de su carta orgánica y la efectiva concordancia en la realidad con su doctrina política contenida en la declaración de principios, el programa y las bases de acción política.

VI. — Crea el Fondo Partidario Permanente con la finalidad de dotar a los partidos reconocidos de los medios económicos y financieros necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales. Al mismo propósito concurren las franquicias y exenciones fiscales que consagra. Correlativamente, se establece un adecuado control del origen, destino y manejo de los fondos partidarios.

VII. — Respetar la soberanía partidaria, llevando al mínimo —pero con la máxima eficacia jurídica— la actuación estatal. Esta se realiza a través del Poder Judicial, con un fuero especializado compuesto por magistrados que gozan de la independencia que la Constitución Nacional asegura a los miembros de ese poder, y con todas las seguridades del debido proceso legal.

Con estas disposiciones se procura encauzar y facilitar la formación y el libre desenvolvimiento de las distintas corrientes de opinión que corresponden a la actual realidad política, acentuando —mediante la integración social de los partidos— el ordenado progreso de nuestras prácticas democráticas.

Excluido todo sentido de oportunidad, se propone un instrumento jurídico elaborado para servir como elemento permanente de la vida institucional de la Nación, y no como un medio ocasional de lucha política.

Invierte, en definitiva, la fuerza de una decisión fundamental, por la que devuelve al pueblo el ejercicio de su soberanía, para que pueda realizar plenamente su voluntad emancipadora.

Para ello, se ha tenido en cuenta el abundante material que provee la doctrina, la legislación y la jurisprudencia del país y del extranjero. Pero por sobre todo, se ha atendido preferentemente a la realidad y a las posibilidades de nuestras instituciones. Se ha procurado, así, reunir en una estructura sistemática, disposiciones capaces de reglar en forma perdurable la organización y funcionamiento de los partidos políticos, evitando la formulación de normas de contenido meramente teórico o académico de difícil si no imposible aplicación.

El texto definitivo, por otra parte, ha sido redactado luego de un proceso de amplio debate con los representantes de las agrupaciones partidarias, en el que fueron consideradas las observaciones expuestas, muchas de las cuales han sido incorporadas al proyecto.

El Poder Ejecutivo ha considerado necesaria la ordenación jurídica de los partidos políticos en esta oportunidad, para que su discusión se realice con la serenidad de criterio que asegura la lejanía de toda contienda electoral, siguiendo la directiva ética de Hipólito Yrigoyen: «No se debe buscar el afianzamiento del derecho público como una exigencia partidaria, sino por su propio concepto y como condición absoluta para el constante desenvolvimiento de la Nación.»

El Poder Ejecutivo confía, por consiguiente, que el adjunto proyecto de ley orgánica, al ser sancionado por vuestra honorabilidad, constituirá el instrumento jurídico adecuado que asegure a los partidos políticos el libre y efectivo ejercicio de sus atributos, derechos, poderes y libertades, a la vez que el fiel cumplimiento de sus deberes. Para ello aspira a que el Honorable Congreso, sin perjuicio de lo que en función de su potestad constitucional pueda resolver en definitiva, mantenga su estructura orgánica ya que todos sus preceptos responden a un sistema y método armónicos, y están estrechamente correlacionados entre sí.

Con esta iniciativa inspirada en claras actitudes políticas que avalan una conducta y responden a una programática largamente sostenida, prescindiendo de parcialidades y con absoluta buena fe, el Poder Ejecutivo quiere contribuir al perfeccionamiento de nuestras instituciones, reafirmando el sagrado principio del acatamiento de la soberanía popular. Por eso, este proyecto tiende a asegurar que los partidos políticos puedan llenar los altos fines que les incumben como instrumentos del gobierno representativo instituido por la Constitución Nacional, en un régimen de auténtica democracia en el que participen todos los sectores de la opinión pública.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA.
Juan S. Palmero.

PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS

TITULO I

Principios generales

CAPÍTULO UNICO

Derecho individual y colectivo de asociación política.

Artículo 1º — 1. Se garantiza a los ciudadanos el derecho de asociación política, reconocido por la Constitución Nacional, para agruparse en partidos políticos democráticos.

2. Se garantiza a los partidos el derecho a su fundación, constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política, para actuar en uno o varios distritos electorales, o en todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las condiciones y los requisitos que establece la presente ley orgánica.

Formulación y realización de la política nacional y nominación de candidatos.

Art. 2º — Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y la realización de la política nacional, y les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos.

Condiciones para la existencia de los partidos.

Art. 3º — 1. La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:

- Grupo humano, integrado por un número representativo de ciudadanos, unidos por un vínculo permanente;
- Doctrina política que en la determinación de la política nacional promueva el bien público, a la vez que propugne expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo, republicano y federal, y el de los principios y los fines de la Constitución Nacional;
- Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de las autoridades y los organismos partidarios y de los candidatos, asegurando la representación de las minorías;
- Reconocimiento judicial de su personalidad jurídico-política como partido, a los efectos de su existencia legal, la que comporta su inscripción en el registro público correspondiente.

2. Violan las condiciones exigidas por los incisos b) y c), los partidos que, por su doctrina política, o por su actuación, auspicien en forma directa o indirecta, o lleven a la práctica, inclusive en su organización y vida internas, cualquiera de las condiciones o características inherentes a los regímenes autocráticos o totalitarios.

Personalidad jurídico-política y personalidad jurídica de derecho privado.

Art. 4º — Los partidos reconocidos, además de su personalidad jurídico-política, son personas jurídicas de derecho privado; en cuyo carácter pueden adquirir derechos y contraer obligaciones de acuerdo con el Código Civil y las disposiciones de la presente ley orgánica.

Ley de orden público. Ambito de aplicación.

Art. 5º — 1. La presente ley orgánica es de orden público.

2. Se aplica a los partidos que intervienen en la elección de las autoridades del gobierno nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

La justicia nacional electoral integra el Poder Judicial de la Nación (Constitución Nacional, art. 94).

Art. 6º — 1. La justicia nacional electoral integra el Poder Judicial de la Nación, como un fuero especializado en materia jurídico-política, partidaria y electoral, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Nacional, ley 13.998, y decreto ley 1.285/58 a cuyos artículos 1º, 32 inciso 2 y 49 está incorporada.

Jurisdicción y competencia.

2. Corresponde a la justicia nacional electoral, además de la jurisdicción y competencia que le atribuye la ley orgánica respectiva, el control de la vigencia efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros, que la presente ley orgánica y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

Normas legales derogadas y vigentes.

Art. 7º — 1. Quedan derogados el decreto ley 12.530/62 y las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley orgánica.

2. Quedan en vigencia los decretos leyes 4.034/57 (t.o.), 7.163/62, 8.163/62, 13.053/62 y 6.407/63.

TITULO II

De la fundación y constitución

CAPÍTULO PRIMERO

Requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídico-política

Requisitos.

1) Partidos de distrito.

Art. 8º — Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personalidad jurídico-política como partido debe solicitarla ante el juez nacional electoral del distrito, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Presentar acta de fundación y constitución, que acredite la adhesión de un número de electores no inferior al 0,4 % del total de los inscritos en el registro electoral del distrito correspondiente hasta un máximo de un millón y sin computar el excedente, o a quinientos si de aquel porcentaje resultare una cifra menor; este acuerdo de voluntades se complementa con un documento en el que conste nombre, domicilio, número de cédula de identidad y matrícula de los firmantes;
- Nombre; adoptado por la asamblea de fundación y constitución;
- Declaración de principios y programa y/o bases de acción política; sancionados por la asamblea de fundación y constitución;
- Carta orgánica; sancionada por la asamblea de fundación y constitución;
- Acta de designación de las autoridades promotoras, las que convocarán a elecciones para constituir las autoridades definitivas del partido, conforme con la carta orgánica y dentro del plazo de tres meses; el acta de la elección de las autoridades definitivas debe remitirse al juez nacional electoral;
- Denunciar domicilio partidario y presentar acta de designación de los apoderados;
- Presentar al juez nacional electoral los libros a que se refiere el artículo 44, dentro de los dos meses de obtenido el reconocimiento.

Requisitos.

2) Partidos nacionales.

Art. 9º — 1. Los partidos nacionales están integrados por varios partidos de distrito unidos por un vínculo permanente.

2. Los partidos de distrito reconocidos y aquellos que deseen actuar en dos o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa y/o bases de acción política y carta orgánica, como partidos nacionales, deben solicitar su reconocimiento como tales ante el juez nacional electoral del distrito de su fundación, cumpliendo con lo determinado por el artículo 8º.

3. Obtenido el reconocimiento, dichos partidos deben inscribirse en el registro correspondiente, ante los jueces nacionales electorales de los distritos donde deseen actuar, a cuyo efecto, además de lo preceptuado por el artículo 8º, en su caso, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Testimonio de la resolución que les reconoce personalidad jurídico-política, los autoriza a funcionar y en qué carácter;
- b) Declaración de principios, programa y/o bases de acción política y carta orgánica nacionales;
- c) Acta de designación y elección de las autoridades nacionales del partido y de las autoridades de distrito;
- d) Denunciar domicilio partidario central y presentar acta de designación de los apoderados.

Distrito de fundación.

Art. 10. — A los efectos del artículo anterior, se considera distrito de la fundación aquel donde se han practicado los actos originarios y de la constitución del partido.

2. En el caso de los partidos que hayan obtenido cualquier reconocimiento anterior en el ámbito nacional, el distrito de la fundación es el de esa sede judicial, mientras subsista la voluntad de mantenerlo y una sentencia definitiva no establezca otro distinto.

Requisitos.

3) Partidos confederados.

Art. 11. — 1. La presente ley orgánica se aplica a la constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de las confederaciones de partidos nacionales y/o de distintos distritos ya reconocidos.

2. El reconocimiento de las confederaciones debe ser solicitado al juez nacional electoral del lugar del domicilio, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Especificación de los partidos que se confederan y justificación de la voluntad de integrar la confederación con carácter permanente, expresada por medio de los órganos partidarios competentes;
- b) Testimonio de la resolución de la justicia nacional electoral que reconoce personalidad a cada uno de los partidos que se confederan;
- c) Nombre de la confederación; adoptado en el acto de voluntad que integra la unión;
- d) Declaración de principios, programa y/o bases de acción política y carta orgánica de cada partido;
- e) Nómina de las autoridades de cada partido;
- f) Declaración de principios, programa y/o bases de acción política y carta orgánica de la confederación;
- g) Acta de elección de las autoridades y designación de apoderados de la confederación;
- h) Domicilio central de la confederación.

Reconocimiento.

Art. 12. — 1. Los partidos de distrito, nacionales o confederados, deben solicitar su reconocimiento, hasta tres meses antes de la fecha de la elección, ante el

juez nacional electoral del distrito de la fundación o del domicilio principal, según el caso, sin perjuicio de solicitar el reconocimiento en los distritos en que actúen, dentro del mismo término.

2. Los partidos, para tener derecho a urgir ese reconocimiento y el pronunciamiento del juez nacional electoral sobre el acto del registro de las candidaturas, deben justificar su diligencia y el cumplimiento de todas las condiciones y requisitos legales, con anterioridad al día del vencimiento del referido plazo de la legislación electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del nombre

Derecho al nombre, su registro y uso, cambio o modificación.

Art. 13. — 1. Se garantiza a los partidos el derecho a un nombre, su registro y su uso.

2. El nombre debe ser adoptado en los actos de la fundación y la constitución del partido, sin perjuicio de su ulterior cambio o modificación.

3. La denominación «partido», únicamente puede ser utilizada por los partidos en constitución y reconocidos, así como también por los partidos a los cuales les haya sido cancelada su personalidad jurídico-política.

4. El nombre no debe contener designaciones personales, ni derivados de ellas, ni provocar confusión material o ideológica, y debe distinguirse razonablemente del nombre de cualquier otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza.

5. En el futuro, la denominación de los partidos no puede formarse mediante aditamento o supresión de vocablos correspondientes a los nombres de partidos reconocidos, ni usarse los vocablos argentino, nacional o internacional o sus derivados, o vocablos cuyo significado afecte o pueda afectar las relaciones internacionales de la Nación, o implicar antagonismo de razas o religiones, ni que contravengan otras disposiciones de la presente ley orgánica.

Exclusividad del nombre.

Art. 14. — 1. El nombre de un partido de distrito, nacional o confederado, legalmente constituido es un atributo exclusivo inherente, y no puede ser usado por ningún otro partido, asociación, agrupación o entidad de cualquier naturaleza en todo el territorio de la Nación.

2. Cuando una persona, un grupo de personas, un partido, una asociación o una entidad de cualquier naturaleza, use indebidamente el nombre registrado de un partido reconocido incurre en usurpación del mismo, y la justicia nacional electoral decide el cese inmediato del uso indebido del nombre, disponiendo el empleo de la fuerza pública para su cumplimiento.

3. Cuando un partido es declarado extinguido su nombre no puede ser usado por ningún otro partido, asociación o entidad de cualquier naturaleza, hasta transcurridos seis años de la sentencia firme que declara la extinción del partido.

Aprobación, cambio y modificación del nombre.

Art. 15. — 1. El nombre partidario, su cambio o su modificación deben ser aprobados por la justicia nacional electoral; la que verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y lleva un registro al efecto.

2. Solicitado el reconocimiento del derecho al nombre adoptado, el juez nacional electoral dispone la publicación por tres días en el Boletín Oficial de la Nación de los vocablos que integran la denominación, así como la fecha en que fue adoptada, al efecto de la oposición que pueda formular otro partido o el procurador fiscal.

Control y oposición a la concesión del derecho al nombre.

3. Los partidos reconocidos o en constitución de cada distrito y en el orden nacional, están habilitados para controlar y oponerse al reconocimiento del derecho al nombre, con anterioridad a que el juez nacional electoral resuelva en definitiva y en el acto de la audiencia establecida en la presente ley orgánica, con cuya comparecencia tienen el derecho de apelar; sin perjuicio del ejercicio ulterior de las acciones pertinentes.

CAPÍTULO TERCERO

Del domicilio

Domicilio partidario.

Art. 16.—1. Los partidos deben, a los efectos de la presente ley orgánica, constituir domicilio en la ciudad capital correspondiente al distrito en que soliciten el reconocimiento de su personalidad jurídico-política. Así mismo, deben denunciar los domicilios partidarios central y local.

2. Los partidos nacionales y los confederados deben constituir domicilio en la Capital Federal.

Domicilio electoral del ciudadano.

Art. 17.—1. El domicilio electoral del ciudadano es el último anotado en la libreta de enrolamiento o cívica.

2. Dicho domicilio es el único válido a los efectos militares y electorales para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes políticos, así como para determinar la residencia inmediata exigida por los artículos 40 y 47 de la Constitución Nacional.

TÍTULO III

De la doctrina y organización

CAPÍTULO PRIMERO

De la declaración de principios, programa y/o bases de acción política

Principios que deben propugnar.

Art. 18.—1. La declaración de principios, el programa y/o bases de acción política, deben propugnar expresamente el sostenimiento del régimen democrático, representativo, republicano y federal, basado en el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales del hombre, la división de los poderes gubernativos, la legalidad o imperio de la ley, la pluralidad de partidos, la indestructibilidad y la autonomía de las provincias y el mantenimiento del régimen municipal; así como también el sostenimiento de los principios y los fines de la Constitución Nacional, con exclusión de toda sujeción o dependencia de personas, autoridades u organizaciones extranjeras.

2. Los partidos acatan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas.

Regímenes y partidos autocráticos o totalitarios.

Art. 19.—1. No cumplen con las condiciones exigidas por el artículo anterior los partidos que, en su doctrina política o en cualquier aspecto de su funcionamiento, auspicien o realicen, en forma directa o indirecta, inclusive en su organización y vida interna, cualquiera de las características inherentes a los regímenes autocrático o totalitario.

2. A los efectos de la presente ley orgánica se considera régimen autocrático, por oposición al democrático, a aquel en el que el ejercicio de la autoridad se manifiesta en el desconocimiento de los derechos humanos y de sus garantías; la concentración del poder gubernativo; la fuerza, la ilegalidad, el partido único, las facultades extraordinarias o la suma del poder público en el sentido contemplado por el artículo 29 de la Constitución Nacional; el apoyo o el elogio de regímenes o partidos autocráticos y/o totalitarios presentes o pasados; el antagonismo de razas o religiones y, en general, en modalidades que no encuadren en los principios inherentes al régimen democrático, representativo y republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional.

3. A los mismos efectos, se considera régimen totalitario, por oposición al inherente al estado de derecho, a aquel que concentra el poder estatal y absorbe políticamente la vida de los individuos en la totalidad o mayor parte de sus aspectos.

Aprobación y modificación.

Art. 20.—La declaración de principios, el programa y/o bases de acción política, así como todo cambio o modificación de los mismos, son sancionados por los órganos deliberativos del partido y deben ser aprobados por la justicia nacional electoral; la que verifica su conformidad con la Constitución Nacional, la presente ley orgánica y demás disposiciones legales sobre la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la carta orgánica

Principios a que obedecen.

Art. 21.—La carta orgánica regula la organización y el funcionamiento del partido conforme con los siguientes principios:

- a) Gobierno y administración, distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios; las convenciones, congresos o asambleas generales son los órganos de jerarquía superior del partido;
- b) Sanción por los órganos deliberativos del partido de la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política;
- c) Libertad de afiliación, y apertura del registro de afiliados por lo menos una vez al año, durante el término mínimo de cuarenta días hábiles y anunciado con dos meses de anticipación; la carta orgánica debe asegurar el debido proceso partidario en toda cuestión vinculada con la libertad de afiliación;
- d) Participación y control de los afiliados en el gobierno y la administración del partido; y elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos por el voto obligatorio, secreto y directo de los afiliados con representación de las minorías; la carta

orgánica puede establecer en los distritos el voto directo por circunscripciones, secciones o departamentos;

- e) Determinación del régimen patrimonial y contable, asegurando su publicidad y control de acuerdo con las disposiciones de la presente ley orgánica;
- f) Determinación de las causas y la forma de extinción del partido.

Supremacía de la carta orgánica.

Art. 22. — 1. La carta orgánica constituye la ley fundamental y suprema del partido, en cuyo carácter rige los poderes, los derechos y las obligaciones partidarias, y a la cual sus autoridades y afiliados deben ajustar obligatoriamente su actuación.

2. Los organismos partidarios pueden regir la actividad interna del partido mediante la sanción de reglamentos, para su gobierno y administración; resoluciones que deben dictarse en consecuencia y de conformidad con la carta orgánica.

Aprobación y modificación.

Art. 23. — La carta orgánica y sus modificaciones tienen que ser sancionadas por los órganos deliberativos del partido y aprobadas por la justicia nacional electoral; la que verifica su conformidad con la Constitución Nacional, la presente ley orgánica y las demás disposiciones legales sobre la materia.

Justificación de la documentación.

Art. 24. — La justificación de la documentación exigida en los títulos II y III de la presente ley orgánica y sus modificaciones, se cumplimenta mediante testimonio o copia autenticada por escribano público, sin perjuicio de que pueda ser requerida la documentación original.

TITULO IV

Del funcionamiento o dinámica de los partidos

CAPÍTULO PRIMERO

De la conformidad con la carta orgánica y doctrina política

Ajuste de las actividades partidarias con la carta orgánica y su concordancia en la realidad con la doctrina política del partido.

Art. 25. — 1. La actividad del partido, sus autoridades, candidatos y afiliados deben ajustarse a las prescripciones de la carta orgánica y concordar en la realidad con su doctrina política, contenida en la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política.

2. Esta norma debe ser tenida especialmente en cuenta para verificar el cumplimiento de lo determinado por los artículos 3º, 18, 19, 65 y 66.

Conducta de los afiliados.

3. La concordancia requerida por el presente artículo no queda afectada por la sola y exclusiva actividad de uno o varios afiliados, siempre que las autoridades competentes del partido aclaren en forma fehaciente la posición doctrinaria y activa del mismo.

En dicho caso, para determinar la conducta partidaria, la justicia nacional electoral debe dar traslado del incidente al partido, antes de dictar resolución al respecto, a fin de que aquél expresamente ratifique o rectifique los actos o hechos de los afiliados que puedan comprometerlo, imprimiéndole el procedimiento reglado en el título VIII, capítulo tercero.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la afiliación

Libertad de afiliación.

Art. 26. — Se garantiza la libertad de afiliación a los partidos de acuerdo con las disposiciones legales y sus respectivas cartas orgánicas, mediante los recursos conducentes a dicha finalidad.

Requisitos para ser afiliados.

Art. 27. — Para ser afiliado a un partido, se requiere:

- a) Ser elector inscrito en el registro electoral del distrito en que quiere afiliarse;
- b) Comprobar la identidad con la libreta de enroalamiento o la libreta cívica;
- c) Presentar por cuadruplicado una ficha-solicitud que contenga: nombre y domicilio, estado civil, profesión u oficio y la firma auténtica o impresión digital, cuya autenticidad debe ser certificada en forma fehaciente por el funcionario público competente o por la autoridad partidaria que determina la carta orgánica, cuya nómina debe ser remitida a la justicia nacional electoral; la afiliación puede también ser solicitada por intermedio de la oficina de correos de la localidad del domicilio, en cuyo caso el jefe de la misma certifica la autenticidad de la firma o impresión digital;
- d) Abonar la cuota partidaria.

Quiénes no pueden ser afiliados

Art. 28. — No pueden ser afiliados:

- a) Los excluidos del registro electoral por virtud de las disposiciones legales vigentes;
- b) Los afiliados a otro partido;
- c) El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad y situación de retiro cuando hayan sido llamados a prestar servicio;
- d) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias y sus equivalentes en actividad, o jubilados llamados a prestar servicio;
- e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Los ciudadanos que infrinjan estas prohibiciones, incurrir en inhabilitación para poder elegir y ser elegidos, inclusive en las elecciones partidarias internas, y para desempeñar cargos públicos por el término de seis años.

Adquisición de la afiliación.

Art. 29. — 1. La calidad de afiliados se adquiere a partir de la resolución de los organismos partidarios competentes que aprueben la solicitud respectiva. Una ficha de afiliación se entrega al interesado, otra es conservada por el partido y las dos restantes se remiten a la justicia nacional electoral.

Extinción de la afiliación.

2. La afiliación se extingue por renuncia presentada al partido o a la justicia nacional electoral, por expulsión, por fallecimiento y por la violación de lo dispuesto en los artículos 27 y 28.

3. El partido comunica al juez nacional electoral la resolución que declara extinguida la afiliación, y este último comunica a aquél la renuncia que se haya presentado, en ambos casos dentro del término de un mes.

Registro de afiliados.

Art. 30. — 1. El registro de afiliados está constituido por la ordenación actualizada de las fichas de afiliación a que se refieren los artículos anteriores, el cual es llevado y fiscalizado por la justicia nacional electoral.

2. Además, cada partido lleva un registro de afiliados sobre la base de la ficha de afiliación que conserva.

Padrón partidario.

Art. 31. — 1. El padrón partidario es público. Actualizado y autenticado, debe ser remitido al juez nacional electoral hasta el primero de diciembre de cada año, antes de cada elección interna y cuando el juez lo requiera.

Control de la justicia nacional electoral.

2. La justicia nacional electoral fiscaliza y aprueba el registro y padrón de afiliados.

CAPÍTULO TERCERO

Elecciones partidarias internas

Régimen electoral partidario.

Art. 32. — Los partidos cumplen con el método democrático en su vida interna, a través de elecciones periódicas para la nominación de autoridades y candidatos, mediante el voto obligatorio, secreto y directo de los afiliados con representación de las minorías. Pueden establecer en los distritos el voto directo por circunscripciones o secciones.

Normas que rigen las elecciones internas.

Art. 33. — Las elecciones partidarias internas se rigen por la presente ley orgánica, la carta orgánica y subsidiariamente, en lo que sea aplicable, por la legislación electoral.

Veedores de la justicia nacional electoral.

Art. 34. — La justicia nacional electoral puede nombrar veedores de los actos electorales partidarios de oficio, y debe hacerlo a pedido de parte interesada.

Publicidad del padrón de afiliados.

Art. 35. — El padrón de afiliados se debe remitir al juez nacional electoral, quince días antes de la fecha del comicio interno, y ser exhibido el día de la elección, en los locales partidarios donde se emita el voto.

Publicidad de las elecciones partidarias.

Art. 36. — El resultado de las elecciones partidarias internas debe tener publicidad y ser comunicado al juez nacional electoral.

Los candidatos deben ser afiliados.

Art. 37. — Los candidatos a cargos públicos electivos, deben ser afiliados del partido con la antigüedad mínima de un año, salvo el partido que tenga una existencia menor.

Quiénes no pueden ser candidatos.

Art. 38. — No pueden ser candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

- a) Los excluidos del registro electoral por virtud de las disposiciones legales vigentes;
- b) El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad y situación de retiro cuando hayan sido llamados a prestar servicios;
- c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias y sus equivalentes en actividad o jubilados llamados a prestar servicios;
- d) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial;
- e) Quiénes desempeñen cargos directivos o sean apoderados en empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar o fuentes de energía.

Plataforma electoral.

Art. 39. — 1. Con anterioridad a la elección de los candidatos a diputados nacionales y concejales, los organismos partidarios competentes deben aprobar una plataforma electoral o ratificar la plataforma vigente, de acuerdo con la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política, la que comporta mandato del partido para los electos.

2. Copia de esta plataforma electoral, así como la aceptación de las candidaturas por los candidatos, deben ser presentados al juez nacional electoral en oportunidad de la oficialización de las listas de candidatos contempladas por la legislación electoral.

3. La plataforma electoral debe tener la debida publicidad.

Art. 40. — El ciudadano que en una elección partidaria interna suplante a otro sufragante, o vote más de una vez en la misma elección, o sufrague fuera de su domicilio electoral, o de cualquiera otra manera emita su voto sin derecho, incurre en inhabilitación para elegir y ser elegido, inclusive en las elecciones partidarias internas y para el desempeño de cargos públicos por seis años.

CAPÍTULO CUARTO

De la titularidad de los derechos y poderes partidarios

Garantía a las autoridades vigentes.

Art. 41. — Se garantiza a las autoridades vigentes el uso del nombre partidario, el ejercicio de las funciones de gobierno y administración del partido, y en general el desempeño de todas las actividades inherentes al mismo, de conformidad con la presente ley orgánica, demás disposiciones legales sobre la materia y la carta orgánica del partido.

Bienes, símbolos, emblemas, libros y documentación partidarios.

Art. 42.—La titularidad de los derechos y poderes partidarios, reglada en el artículo anterior, determina como consecuencia el destino legal de los bienes, símbolos, emblemas, libros y documentación del partido.

Derechos de secesión y de intervención.

Art. 43.—1. Los partidos confederados tienen el derecho de secesión, y pueden denunciar el acuerdo que los confedera. En cambio, sus organismos centrales carecen del derecho de intervención.

2. En los partidos nacionales, los partidos de distrito carecen del derecho de secesión. En cambio, los organismos centrales competentes tienen el derecho de intervención a los distritos.

CAPÍTULO QUINTO

De los libros y documentos partidarios

Art. 44.—Sin perjuicio de los libros y documentos que prescriba la carta orgánica, los partidos, por intermedio de cada comité nacional y comité central de distrito, deben llevar en forma regular los siguientes libros y documentos, rubricados y sellados por el juez nacional electoral correspondiente, con indicación de la filial o comité a que pertenecen:

- a) Libro de registro de afiliados, donde conste el nombre de los ciudadanos inscritos, firma, domicilio, número de matrícula individual, clase y ocupación; las firmas pueden constar en fichas de afiliación, inclusive a los efectos del artículo 8º, inciso a);
- b) Libro de inventario;
- c) Libro de caja, debiendo conservarse la documentación complementaria correspondiente;
- d) Libro de actas y resoluciones.

CAPÍTULO SEXTO

De la propaganda y proselitismo partidarios

Libertad de propaganda y proselitismo.

Art. 45.—1. Se garantiza la libertad de propaganda y proselitismo partidarios, dentro de la letra y el espíritu de la presente ley orgánica y demás disposiciones legales aplicables.

2. La propaganda y el proselitismo, en cuanto táctica y estrategia partidaria, están determinados por la doctrina política contenida en la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política.

Límites.

Art. 46.—A los fines de la propaganda y proselitismo partidarios, no pueden utilizarse expresiones verbales o escritas contrarias al orden o a la moral públicas, ni a religión alguna, ni que auspicien, directa o indirectamente, el establecimiento de cualquier régimen autocrático o totalitario, o antagonismos de razas o religiones, ni que sean ofensivas contra la Nación, sus símbolos e instituciones.

Utilización de bienes particulares.

Art. 47.—1. No pueden ser utilizados para la propaganda y el proselitismo partidarios los lugares,

edificios y en general bienes del dominio privado de los particulares, en la Capital Federal y en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva de la Nación, sin el consentimiento escrito del propietario.

Lugares públicos.

2. A los fines antes indicados, tampoco pueden ser utilizadas las calzadas de las calles públicas, sus veredas y cordones, así como los monumentos y las obras de arte, en la Capital Federal y en los lugares sujetos a la jurisdicción exclusiva de la Nación; como ni los pavimentos, cordones, veredas y obras de arte en los caminos de jurisdicción nacional.

Destrucción o alteración de medios de propaganda.

Art. 48.—Los carteles, avisos y, en general, todo medio de propaganda y proselitismo partidarios, fijados en lugares, edificios y bienes de acuerdo con la presente ley orgánica y demás disposiciones legales aplicables, no pueden ser destruidos, alterados o superpuestos por otros.

Destrucción de la propaganda ilegal.

Art. 49.—La justicia nacional electoral, por el conocimiento directo o por denuncia, puede ordenar la destrucción de los medios de propaganda y proselitismo utilizados en contravención con las disposiciones legales.

CAPÍTULO SÉPTIMO

De los símbolos y emblemas partidarios

Art. 50.—Se garantiza a los partidos reconocidos el derecho al registro y al uso exclusivo de sus símbolos y emblemas, los cuales no pueden ser usados por ningún otro partido, asociación o entidades de cualquier naturaleza.

Art. 51.—El ejercicio del derecho al registro y al uso exclusivo de los símbolos y emblemas partidarios se rige por las disposiciones contenidas en el título II, capítulo segundo, de la presente ley orgánica, en lo que sean aplicables.

CAPÍTULO OCTAVO

Del registro de los actos que hacen a la existencia partidaria

Art. 52.—1. La Cámara Nacional Electoral y los juzgados de distrito llevan un registro público a cargo de sus respectivos secretarios, donde deben inscribirse:

- a) Los partidos reconocidos y la ratificación de los partidos preexistentes;
- b) El nombre partidario, sus cambios y modificaciones;
- c) Los símbolos y emblemas partidarios que se registren;
- d) La cancelación de la personalidad jurídico-política partidaria;
- e) La extinción y la disolución partidarias.

2. Todo movimiento en las inscripciones, cambios o modificaciones son comunicados inmediatamente por los juzgados de distrito a la Cámara Nacional Electoral para la actualización del registro a su cargo.

TITULO V

Del patrimonio del partido

CAPÍTULO PRIMERO

De los bienes y recursos

Elementos que integran el patrimonio partidario.

Art. 53. — El patrimonio del partido se integra con los bienes y recursos que autoriza la carta orgánica y que no prohíbe la presente ley orgánica u otras disposiciones legales.

Recursos prohibidos.

Art. 54. — Los partidos no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente:

- a) Contribuciones o donaciones anónimas. Los donantes pueden imponer cargo de que su nombre no se divulgue; pero los partidos deben conservar la documentación que acredite fehacientemente el origen de la donación;
- b) Contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales o provinciales; o de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas; o de empresas que exploten juegos de azar o fuentes de energía; o de procedencia extranjera; o de proveedores de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas y descentralizadas;
- c) Contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales;
- d) Contribuciones o donaciones de personas que se encuentran en situación de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando hayan sido impuestas obligatoriamente por sus superiores jerárquicos o empleadores.

Sanciones por contribuciones prohibidas.

Art. 55. — 1. Los partidos que contravengan las prohibiciones establecidas en el artículo anterior incurrir en multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución ilícitamente aceptada.

2. La persona de existencia ideal que efectúe las contribuciones o donaciones prohibidas en el artículo anterior incurre en multa equivalente al décuplo del monto de la donación o contribución ilegítimamente realizada, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a sus directores, gerentes, representantes o agentes.

3. Las personas físicas que se enumeran a continuación incurrir en inhabilitación para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones públicas y las elecciones partidarias internas, a la vez que inhabilitación para el desempeño de cargos públicos de dos a seis años, y multa de cincuenta mil a un millón de pesos o, en defecto de esta última, prisión de seis meses a dos años:

- a) Los propietarios, directores, gerentes, agentes o representantes de las empresas, grupos, asociaciones, autoridades u organizaciones contempladas en el artículo 55 y, en general, todas las personas que contravengan lo allí dispuesto;
- b) Los afiliados que, por sí o por interpósita persona, acepten o reciban a sabiendas donaciones o aportes para el partido, de las personas men-

cionadas en el inciso precedente, así como los afiliados que, por sí o por interpósita persona, soliciten a sabiendas, de aquéllos, donaciones o aportes para el partido o acepten o reciban donaciones anónimas, en contra de lo prescrito por el artículo 54;

- c) Los empleados públicos o privados y los empleadores que intervengan directa o indirectamente en la obtención de aportes o donaciones de sus inferiores jerárquicos o empleados para un partido, así como los afiliados que, a sabiendas, acepten o reciban para el partido contribuciones o donaciones así obtenidos;
- d) Los que utilicen, directa o indirectamente, fondos de un partido para influir en la nominación de cualquier persona en una elección partidaria interna.

Destino de multas.

Art. 56. — Todas las multas que se apliquen en virtud de las disposiciones anteriores, ingresan al fondo partidario permanente.

Depósito de los fondos partidarios.

Art. 57. — Los fondos del partido deben depositarse en una cuenta especial, en el Banco de la Nación Argentina u otros bancos oficiales, a nombre del partido y a la orden de las autoridades que determine la carta orgánica.

Adquisiciones o locación de inmuebles.

Art. 58. — Los bienes inmuebles adquiridos o locales con fondos partidarios, o que provengan de donaciones efectuadas con tal objeto, deben serlo a nombre del partido.

Exención de contribuciones.

Art. 59. — 1. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los partidos reconocidos, están exentos de todo impuesto, tasa o contribución de mejoras.

2. Esta exención alcanza a los bienes inmuebles que no estén a nombre del partido, siempre que se encuentren afectados, en forma fehaciente, exclusiva y habitual, a las actividades específicas del mismo.

3. La exención alcanza a los bienes de renta del partido, siempre que ésta sea invertida exclusivamente en la actividad partidaria y no acreciente, directa o indirectamente, el patrimonio de persona alguna; así como también a las donaciones en favor del partido y el papel destinado a uso exclusivo del mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del fondo partidario permanente y de los subsidios y franquicias

Carácter y finalidad del fondo partidario permanente.

Art. 60. — 1. Créase el fondo partidario permanente, con la finalidad de proveer a los partidos reconocidos, en cuanto instrumentos necesarios para la determinación de la política nacional, según lo establece el artículo 2º de la presente ley orgánica, de los medios económico-financieros que contribuyan a facilitarles el cumplimiento de sus funciones institucionales.

2. La ley general de presupuesto determinará, con carácter permanente, la afectación de los recursos necesarios al fin antes indicado, bajo el rubro de fondo partidario permanente.

3. El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, dispone de dicho fondo, a los efectos que determina la presente ley orgánica y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Aportes y franquicias
a los partidos.

Art. 61. — Incorporáranse a la presente ley orgánica las disposiciones de la ley 15.793, con las modificaciones introducidas por los decretos leyes 2.390/63 y 3.284/63, sobre subsidios y franquicias a los partidos, a los que se atribuye carácter permanente.

CAPÍTULO TERCERO

Del control patrimonial

Cuentas y documentos.

Art. 62. — Los partidos deben, por el órgano que determine la carta orgánica:

- a) Llevar contabilidad detallada de todo ingreso o egreso de fondos o especie, con indicación de la fecha de los mismos y de los nombres y domicilios de las respectivas personas que los hubiesen ingresado o recibido; esta contabilidad debe conservarse durante diez ejercicios con todos sus comprobantes;
- b) Dentro de los sesenta días de finalizado cada ejercicio, deben presentar al juez nacional electoral correspondiente un estado anual de su patrimonio y una cuenta de ingresos y egresos del ejercicio, certificando ambos estados contables un contador público nacional o los órganos de control del partido;
- c) Dentro de los sesenta días de celebrado el acto electoral nacional en que haya participado el partido, éste debe presentar al juez nacional electoral correspondiente una cuenta detallada de los ingresos y egresos relacionados con la campaña electoral y los que individualmente hayan realizado sus candidatos y autoridades.

Publicidad de cuentas
y documentos.

Art. 63. — 1. Las cuentas y documentos a que se refiere el artículo anterior deben estar en la secretaría del juez nacional electoral competente, para reconocimiento de los interesados, durante treinta días hábiles.

2. Si dentro de los cinco días hábiles de vencido dicho término no se hacen observaciones, el juez ordena el archivo de las cuentas. Si se formulan observaciones por violación de las disposiciones legales o de la carta orgánica, el juez resuelve y en su caso aplica las sanciones correspondientes; lo que puede hacer también de oficio.

3. Los estados anuales de las organizaciones partidarias en el distrito y en el orden nacional, deben publicarse, por un día, en el Boletín Oficial.

TÍTULO VI

De la caducidad y la extinción de los partidos

Efectos de la cadu-
dad y extinción.

Art. 64. — 1. La caducidad da lugar a la cancelación de la inscripción del partido en el registro y la pérdida de la personalidad jurídico-política a los

efectos de participar en el proceso electoral, subsistiendo aquél como persona de derecho privado.

2. La extinción pone fin a la existencia legal del partido y da lugar a su disolución.

Causas de la cadu-
dad.

Art. 65. — Son causas de la caducidad de la personalidad jurídico-política de los partidos:

- a) La no realización de elecciones partidarias internas en el término de tres años;
- b) La no presentación en distrito alguno en tres elecciones consecutivas sin causa debidamente justificada;
- c) No obtener el 3 por ciento de los votos totales válidos en distrito alguno en la elección anterior;
- d) Que la actividad del partido y sus autoridades no se ajusten a las prescripciones de la carta orgánica;
- e) La violación de lo determinado en los artículos 8º, incisos e) y g) y 44 de la presente ley orgánica.

Art. 66. — Los partidos se extinguen:

- a) Por las causas que determine la carta orgánica;
- b) Por la voluntad de los afiliados, expresada de acuerdo con la carta orgánica;
- c) Cuando la actividad del partido, sus autoridades, candidatos y afiliados no concuerden en la realidad con la doctrina política de aquél, contenida en la declaración de principios, el programa y/o las bases de acción política, auspicando o realizando en forma directa o indirecta, inclusive en su organización y vida internas, cualquiera de las condiciones o características inherentes a los regímenes autoritario o totalitario, de conformidad con lo establecido en los artículos 3º, parágrafo 2, 18 y 19;
- d) Por impartir instrucción militar a los afiliados u organizarlos militarmente, o, con el mismo fin, adoptar el uso de saludos o divisas especiales o uniformes —indumentaria total o parcial—, símbolos o emblemas que exterioricen esa forma de adhesión partidaria.

Declaración de cadu-
dad y la extinción.

Art. 67. — La cancelación de la personalidad jurídico-política y la extinción de los partidos, son declaradas por sentencia de la justicia nacional electoral, con todas las garantías del debido procedimiento legal, en el que el partido es parte.

Solicitud de nueva
personalidad en caso
de caducidad.

Art. 68. — 1. En caso de declararse la caducidad de la personalidad de un partido reconocido, en virtud de las causas establecidas en la presente ley orgánica, previa intervención del interesado y del procurador fiscal electoral, puede ser solicitada nuevamente después de celebrada la primera elección, cumpliendo con lo dispuesto en el título II.

El partido disuelto no puede ser reconocido nuevamente.

2. El partido disuelto por sentencia firme no puede ser reconocido nuevamente, con el mismo nombre, la misma carta orgánica, declaración de principios, programa y/o bases de acción política.

Destino de los bienes del partido extinguido.

Art. 69. — 1. Los bienes del partido extinguido deben tener el destino establecido en la carta orgánica, y en caso de que ésta no lo determine, se transmiten a favor del fondo partidario permanente.

2. Los libros, archivos, ficheros y emblemas del partido disuelto pasan a la disposición de la justicia nacional electoral para su custodia, la que, pasados seis años y previa publicación en el Boletín Oficial, por tres días, puede ordenar su destrucción.

TITULO VII

De los partidos preexistentes

CAPÍTULO UNICO

Art. 70. — 1. Los partidos de distrito, nacionales y confederados existentes y reconocidos a la fecha del comienzo de la vigencia de la presente ley orgánica conservan su personalidad jurídico-política y todos los atributos, derechos y poderes inherentes a la misma, en los distritos en que hayan actuado en virtud de aquélla, siempre que soliciten la ratificación de su inscripción ante la justicia nacional electoral y justifiquen:

- Que en la elección nacional del 7 de julio de 1963 obtuvieron por lo menos el 3 % del total de los votos válidos emitidos; en un distrito, los partidos de distrito; y en cada uno de tres distritos, los partidos nacionales y los partidos confederados;
- Cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3º, parágrafo 1, incisos b) y c), y parágrafo 2; 18 y 19 de la presente ley orgánica;
- La adecuación de su organización y funcionamiento a las normas de la presente ley orgánica dentro del plazo de cuatro meses.

2. El incumplimiento de estas condiciones opera la caducidad de la personalidad jurídico-política del partido.

TITULO VIII

Del procedimiento partidario electoral

CAPÍTULO PRIMERO

De los principios generales

Caracteres.

Art. 71. — El procedimiento partidario electoral es sumario, verbal y actuado, en doble instancia.

Prueba.

Art. 72. — La prueba se ofrece en la primera presentación y se produce en la audiencia, excepto el caso de denuncia, en el que el procedimiento se impone de oficio.

Quiénes pueden actuar en el procedimiento partidario electoral.
Acción popular.

Art. 73. — 1. Los partidos reconocidos o en constitución, sus afiliados, cualquier ciudadano por derecho propio o por acción popular y, en su caso, los procuradores fiscales electorales, pueden actuar ante la justicia nacional electoral, según sea su carácter, ya por intermedio de sus autoridades o apoderados, ya en representación del interés u orden público.

2. Si del ejercicio de la acción popular surge que el ciudadano ha actuado con dolo imputable o propósito manifiesto de obstaculizar indebidamente la dinámica partidaria y no en protección del interés público, el juez nacional electoral rechaza la acción sin más trámite.

3. En dicho caso, el juez nacional electoral, cumpliendo con el debido procedimiento legal, puede decidir la inhabilitación del derecho de elegir y ser elegido en las elecciones generales y partidarias internas, así como la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, hasta por cuatro años.

Art. 74. — La justificación de la personería, a todos los efectos de la presente ley orgánica, se hará mediante copia autenticada del acta o de la resolución de designación o elección, según el caso, de las autoridades o de los apoderados, los últimos de los cuales deben estar inscritos en el padrón electoral de su distrito; o bien poder general o especial otorgado ante escribano público, o acta-poder extendida por ante la secretaría electoral.

Art. 75. — 1. En las actuaciones ante la justicia nacional electoral puede utilizarse patrocinio letrado.

2. Los tribunales de primera y segunda instancia están facultados para exigir el patrocinio letrado cuando lo consideren necesario para la buena marcha del proceso.

Art. 76. — Cuando el tribunal impone costas causídicas, los honorarios únicamente pueden ser percibidos por letrados y procuradores matriculados.

Gratuidad de las actuaciones.

Art. 77. — Todas las actuaciones ante la justicia nacional electoral en cumplimiento de la presente ley orgánica se hacen en papel simple, y las publicaciones dispuestas por ella en el Boletín Oficial sin cargo alguno.

CAPÍTULO SEGUNDO

Procedimiento para el reconocimiento de la personalidad

Verificación de la autenticidad de las firmas y datos.

Art. 78. — El juez nacional electoral competente ante quien se solicite el reconocimiento de la personalidad por un partido en constitución, verifica la autenticidad de las firmas y los datos de hecho invocados en la presentación y la documentación adjunta, arbitrando los medios procesales idóneos.

Observaciones sobre incumplimiento de la ley y derecho al nombre.

Art. 79. — 1. Realizada la comprobación a que se refiere el artículo anterior, y vencida la publicación dispuesta por el artículo 15, parágrafo 2, el juez na-

cional electoral convoca a una audiencia, en el plazo de los diez días hábiles siguientes, al procurador fiscal electoral y a los apoderados de los partidos reconocidos o en formación en cada distrito.

2. Aquéllos están habilitados, en ese comparendo verbal, para formular observaciones exclusivamente con respecto a la falta de cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la presente ley orgánica, o referentes al derecho, registro o uso del nombre partidario propuesto; debiendo concurrir con las pruebas en que se fundamente; esto sin perjuicio del ejercicio del ministerio público por vía de dictamen.

3. Los comparecientes a la audiencia antes indicada tienen el derecho de apelar.

Concesión o denegación de la personalidad.

Art. 80.—1. Cumplidos los trámites necesarios, o en su caso intimación, el juez nacional electoral, mediante auto fundado, procede a conceder o denegar la personalidad solicitada, dentro de los diez días hábiles de cumplidos dichos trámites.

2. Si se concede el reconocimiento, ordena publicar en el Boletín Oficial, por un día, el auto respectivo y la carta orgánica del partido.

Recurso de apelación.

Art. 81.—1. De toda resolución definitiva o que decida artículo, del juez nacional electoral, las partes interesadas en el proceso, en defensa de sus derechos, y el procurador fiscal electoral, pueden apelar dentro del término de cinco días hábiles para ante la Cámara Nacional Electoral.

2. Este recurso se concede en relación y a los efectos regulados en los artículos subsiguientes.

CAPÍTULO TERCERO

Del procedimiento partidario electoral contencioso

Primera instancia

Art. 82.—1. Iniciada la causa en defensa de derecho público subjetivo, interés u orden público, por vía de acción, denuncia o de oficio, se corre traslado a los interesados por tres días hábiles. Producida la contestación o ante el silencio, el juez nacional electoral convoca audiencia dentro de los cinco días hábiles, bajo apercibimiento de celebrarse con la parte que concurra, debiendo expedirse en el plazo de diez días hábiles de realizada aquélla. La incompetencia o la falta de personería del representante pueden resolverse previamente.

2.—El procurador fiscal electoral, o en su caso el procurador fiscal federal del juzgado a cargo del registro cívico, o quien lo sustituye, dictamina en la audiencia o dentro de los tres días hábiles de celebrada aquélla.

3.—Los términos establecidos por la presente ley orgánica son perentorios. No obstante, durante el proceso comicial, la justicia nacional electoral puede aplicar los plazos determinados por la legislación electoral, cuando sea justificada la urgencia.

Segunda instancia

Recurso de apelación.

Art. 83.—1. De toda sentencia o resolución definitiva que decida artículo, del juez nacional electoral, puede apelarse dentro del plazo de cinco días hábiles,

por ante la Cámara Nacional Electoral, excepto en el caso previsto por el artículo 61 de la ley electoral.

2.—La apelación se concede en relación y al sólo efecto devolutivo. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral, a solicitud del procurador general electoral o de parte interesada, puede establecer que el recurso tenga también efecto suspensivo.

Constitución de domicilio.

Art. 81.—1. Al interponer el recurso ante el juez nacional electoral, las partes interesadas constituyen domicilio en jurisdicción de la Capital Federal.

2.—Caso contrario, al concederse el recurso, son intimadas a hacerlo dentro de los cinco días hábiles de la fecha de la providencia de recibidos los autos en la Cámara Nacional Electoral, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en sus estrados por dicho tribunal.

Presentación de memorial.

Art. 85.—1. Recibidos los autos en la alzada, el secretario actuante da cuenta al tribunal y, cumplidas las medidas previas, se dispone sin más trámite, por la presidencia, que se pongan aquéllos en secretaría o se fija audiencia, a fin de que las partes, en el término de cinco días hábiles, puedan presentar un memorial sosteniendo o mejorando su recurso. Dicho tribunal puede disponer mediante probatorias y para mejor proveer, así como comparendos verbales.

2.—Agregados los memoriales y previo dictamen del procurador general electoral, pasa el expediente al acuerdo para resolver o dictar sentencia.

3.—Si el apelante no presenta memorial la cámara puede declarar desierto el recurso o abocarse a su conocimiento si estima que la cuestión requiere por su naturaleza una decisión.

Recursos de queja por retardo o denegación de justicia y de aclaratoria.

Art. 86.—1. En el recurso de queja por retardo o denegación de justicia, vencidos los términos legales, el interesado formaliza el pedido de pronto despacho, y luego de tres días queda habilitado para ocurrir ante el superior.

2.—En igual término se interpone la queja por denegarse una apelación.

3.—La aclaratoria de las sentencias definitivas es interpuesta, en ambas instancias, dentro de las veinticuatro horas de la notificación.

Art. 87.—Declarada la nulidad de una sentencia o resolución definitiva que decida artículo, la cámara dispone que los autos pasen al juez que siga en orden de turno o al subrogante legal, para que dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Juan S. Palmero.

2

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º—Constituir una comisión especial integrada por once miembros de la Honorable Cámara de Diputados para que, en reemplazo de los decretos leyes

12.530/1962, 7.163/1962 y 13.053/1962, los que serán derogados, prepare dos proyectos de ley; uno sobre Estatuto de los Partidos Políticos, y el segundo creando la Justicia Nacional Electoral como integrante del Poder Judicial de la Nación.

2º — La comisión especial que se crea por el artículo anterior se expedirá antes del 12 de octubre del presente año.

Ramón A. Muñiz.

3

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º — Crear una comisión especial integrada por quince diputados, que en el lapso de tiempo más breve posible producirá un proyecto de ley o de leyes que determine el régimen de funcionamiento de los partidos políticos y las medidas necesarias para una efectiva defensa de la democracia.

2º — Los gastos que demande el desempeño de la antedicha comisión correrán por cuenta de esta Honorable Cámara de Diputados.

José M. Fernández. — Luis L. Boffi. —
José Frega. — Angel R. Caggiano. —
Israel Iglesias. — Alberto Garibaldi. —
Domingo A. Condoluci.

4

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase vigente el decreto ley 19.044 sobre Régimen de las Organizaciones Políticas, hasta el artículo 17 inclusive.

Art. 2º — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a las normas de dicho decreto ley 19.044.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Eduardo A. Massolo.

(Suplemento al orden del día número 417)

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1964.

Señor presidente:

En uso de la facultad establecida por el artículo 95 del reglamento, en tiempo y forma, vengo a proponer modificaciones al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda (orden del día 417) sobre la ley orgánica de los partidos políticos.

Propongo desde ya, lisa y llanamente, la supresión del inciso b) del artículo 3º y de los artículos 21 y 22 del dictamen en cuestión.

Al decir del eminente constitucionalista José Manuel Estrada, «Toda la ciencia política está contenida en la idea de la libertad», en la que toda tesis finalista tiende a preservarla en el hombre y en el ejercicio de sus derechos sus-

tanciales. No es del caso de respetar la libertad psicológica restringida sólo en el ámbito del fuero interno, sino que también —y por sobre todas las cosas— es el caso de garantizar y respetar la libertad política.

La ley orgánica sometida a consideración de esta Honorable Cámara tendrá que preservar en última instancia, de modo claro, cierto y serio, esa proposición, y si así no fuere, no cumpliría los altos propósitos que la determinan.

No obstante las intenciones del informe de mayoría, que admito y respeto —«...este proyecto no contiene trampas ni segundas intenciones ocultas»—, los artículos que impugno introducen expresiones de tipo subjetivo y se envuelven en el marasmo de una casuística que torna harto peligrosa la finalidad del respeto por la libertad del hombre que esta ley persigue.

Va de suyo, de acuerdo al principio constitucional —artículo 18 de la Carta Magna—, que en modo alguno podrán evaluarse ni en el ciudadano ni en los partidos políticos, las ideas profesadas y la actividad política desarrollada hasta el presente.

Incumbe a este Parlamento de la proporcionalidad dar al país la ley que no admita discrepancias ni esconda subterfugios en el respeto por la libertad del hombre, y faltaba precisamente en esta Argentina contemporánea, la decisión parlamentaria que recogiera en plenitud esta opinión con plena vigencia social.

No puede existir factor de poder, grupo de presión o de interés que altere o contravenga tan clara decisión de un pueblo que desde todos los ámbitos reclama ya esta decisión inexorable, a punto de haberla convertido en terminante dilema de opción: respeto por la voluntad popular o caos institucional.

Tres décadas fallidas, en marchas y contramarchas, concretan esta resultante incierta de la que debemos salir: triste experiencia de un pasado inmediato que deteriora nuestro acervo moral.

Oscar Alende en su *Tesis de la revolución nacional* ha puntualizado con seriedad este proceso: «Desde 1930 mentimos la democracia. Cuatro de cinco presidentes han llegado a las más altas magistraturas merced al fraude y las proscriptciones.»

En nuestra posición y con sentido radical, no podemos admitir otra alternativa que no sea el más amplio respeto por la voluntad de la criatura humana, en cuanto a su decisión de elegir sus gobernantes como quiera hacerlo. Esta es la esencia moral de la Unión Cívica Radical Intransigente en la historia política argentina: «el hombre es un ser sagrado en cuya frente —decía Yrigoyen— lleva un rayo de la divinidad»; «el respeto de ese hombre en la comunidad del pueblo —apunta Gabriel del Mazo—, el res-

peto de ese pueblo en la comunidad de las naciones, convierte la política en un fuero inmune y hace de ella una profesión, la más noble y entrañable que haya existido en el ideal y en la vida humana». «Hay que combatir —decía Alem— contra la insólita pretensión de no dejar a los pueblos gobernarse por creerlos incapaces de regir sus destinos.»

Debemos jugar con autenticidad, pues este Parlamento de la proporcionalidad concreta por primera vez la representatividad más auténtica del concierto social argentino, y en modo alguno podremos admitir ya que el fraude o la proscripción legalizada reemplace la suprema voluntad del pueblo.

Oscura fue aquella etapa del fraude, desgraciadamente varias veces repetida en nuestro historial, y desgraciada también ha sido la etapa de las proscripciones que no han dado hasta el presente solución valedera al destino político argentino.

Nuestro presente y futuro aún inciertos, responden con elocuencia, y algún día se hablará con imparcialidad de esta aberrante experiencia de esta época de curiosos ideólogos, políticos frustrados y militares excedidos, que, incluso, llegaron a invocar como solución la necesidad del voto calificado o la «dictadura democrática».

Debemos volver con seriedad y retomar el camino, pensando que no hay más verdad que aquella que se proclamó en el Jardín Florida en 1889 por la Unión Cívica de la Juventud: «Levantar como bandera el libre ejercicio del derecho al sufragio sin intimidación y sin fraude y condenar toda intervención oficial en los trabajos electorales.»

Nada que no sea auténtico podrá ostentar derechos inobjectables, pues nada ni nadie puede transmitirlos mejores ni más perfectos que los que poseen.

Esta es la única forma en que se podrá obrar con autenticidad e, incluso, de dar solución idónea a esta reclamación contemporánea sobre la necesidad de cambios de estructura, ya que no existe más autenticidad que la del pueblo mismo.

Si el pueblo quiere votar, dejémosle hacer su voluntad, como quiera y por quien quiera hacerlo, que, para eso, es el soberano. Pero con una ley clara, limpia y sin subterfugios de ninguna especie.

Después, él construirá y transformará si así lo cree nuestras estructuras: su voluntad será la ley, porque, como decía Martí, «donde el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio».

Por ello pido la supresión de los artículos que arriba menciono, porque en su síntesis entrañan la posibilidad de que esta voluntad sea desvirtuada, y eso, no puede ser.

Palmiro B. Bogliano.

(Suplemento (2) al orden del día número 417)

OBSERVACIONES Y DISIDENCIAS PARCIALES FORMULADAS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS SERU GARCIA, CASAS, RUIZ (J. O.), SOLANA Y GODOY AL ORDEN DEL DIA 417

Artículo 3º, inciso b). — Suprimirlo.

Artículo 6º — Reemplazar: «Justicia Nacional Electoral» por «Justicia Federal, que a los fines de esta ley se denominará indistintamente Justicia Nacional Electoral».

Artículo 15. — Agregar un apartado: «3º. En ningún caso se negará el reconocimiento por hechos anteriores a la vigencia de esta ley.»

Artículo 21. — Reemplazarlo por lo siguiente: «La declaración de principios, el programa o bases de acción política deberán acatar la Constitución Nacional, los tratados con potencias extranjeras, las leyes de la Nación y sólo podrán propugnar su modificación en la forma y modo que las mismas establecen.»

Artículo 22. — Suprimirlo.

Artículo 67. — Agregar: «... sin perjuicio del recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, procedente dentro de las 48 horas en que se haya notificado la denegatoria de la personería o la revocatoria de la sentencia que la acordara.»

Artículo 84. — Incluir después de las palabras «decretos leyes» lo siguiente: «7.163/62».

Artículo 85. — Reemplazarlo por el siguiente: «Por esta única vez todos los trámites, plazos y requisitos fijados por esta y otras disposiciones legales, y a los efectos del reconocimiento de partidos políticos, oficialización de listas de candidatos y demás requisitos que deberán satisfacerse ante las autoridades administrativas o judiciales para poder concurrir a las elecciones a realizarse el día 14 de marzo de 1965, podrán cumplimentarse hasta las 24 del día 14 de enero de 1965 si no se gozare de mayor plazo.»

Alberto Serú García. — David Jorge Casas. — José Oscar Ruiz. — Jorge D. Solana. — Ruperto Honorio Godoy.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración en general.

Sr. Ghioldi. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ghioldi.

Sr. Ghioldi. — Es para hacer una precisión en nombre del grupo parlamentario socialista democrático.

Consideramos que a esta altura del trabajo de la Cámara corresponde aplicar estrictamente el reglamento en cuanto al tiempo de que dispone cada orador para hacer uso de la palabra.

No votará nuestro grupo prórroga alguna en ese sentido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde a la Cámara en cada caso acordar o denegar la prórroga solicitada para algún orador.

Sr. Ghioldi. — En ese caso, anuncio que pediremos votación, aunque tenga que levantarse la sesión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Muy bien, señor diputado.

Tiene la palabra el señor miembro informante del dictamen de la mayoría, diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Señor presidente: me toca informar el orden del día 417, que contiene los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de estatuto reglamentario de los partidos políticos.

Larga ha sido, señor presidente, la labor cumplida por la Comisión de Asuntos Constitucionales en el estudio de este importante tema, y aunque ella es conocida, no está de más reseñar brevemente qué mecánica se utilizó y por qué se lo hizo.

El proyecto del Poder Ejecutivo llegó al Congreso en el mes de marzo de este año, luego de ser redactado por una comisión especial, previa consulta a todos los partidos políticos. A pesar de ese estudio previo, la comisión entendió necesario hacer nuevamente la consulta, y así lo hizo, citando a su sala de sesiones a todos los partidos políticos con personería y recibiendo también a muchas fuerzas políticas que no tienen personalidad reconocida, a personas y a instituciones que quisieron interesarse en el tema. Esta labor previa, que llevó algunos meses y cuyas conclusiones fueron impresas para información de los señores diputados, permitió a la comisión no sólo manejarse con el criterio de sus miembros, que son políticos por definición todos ellos y que por tanto conocen el tema a fondo, sino también recoger todos los datos que estimamos eran necesarios para el caso. Y trabajamos para lograr el despacho único; propósito elevado que no se ha logrado en su totalidad, pero sí en gran medida. Tenemos un solo despacho en disidencia presentado por el señor diputado Gómez Machado, del MID; todos los demás miembros de las tres comisiones suscriben el despacho de la mayoría.

Alguna prensa y algunos señores diputados se preguntan qué clase de despacho por unanimidad es éste que presenta a renglón seguido disidencias parciales firmadas prácticamente por todos sus miembros; despacho que empieza por ser firmado con disidencias parciales por todos sus miembros.

Señalo que este dictamen ha logrado en lo esencial el entendimiento de todos los grupos. Desde luego que ha habido coincidencia en la forma, pero también en la esencia, y que las disidencias, si bien se analizan, con excepción de la presentada por un señor diputado a título

personal y que modifica prácticamente todo el despacho de la mayoría, las demás que suscriben los representantes de los bloques traduciendo sus opiniones, constituyen enmiendas o divergencias con algunos artículos o con algunas normas.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Belgrano Rawson. — De los 88 artículos que componen el despacho, hay acuerdo en la inmensa mayoría de ellos y, lo que es más importante, hay acuerdo general en la esencia del estatuto y de los distintos institutos que regula.

Creemos honradamente que con este dictamen los partidos representados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ha llevado el peso de este estudio, contribuimos en una manera importante a la paz política de la República. No hay ninguna duda de que el estatuto que comienza a considerar esta tarde la Cámara va a tener especial incidencia en los comicios de marzo próximo. Algunos señores diputados, en conversaciones al margen de las reuniones de comisión, han dado en señalar que esto, más que una ley reglamentaria de partidos políticos, era una especie de nueva ley de juego, la ley de juego de marzo. El Poder Ejecutivo no la ha proyectado con ese alcance, sino con un criterio mucho más amplio, con la idea de hacer un reglamento permanente de partidos. Creo que ésa es la realidad. El instrumento que se sancione será de vigencia permanente, seguramente lleno de errores y de desaciertos y, por ello, perfectible. Y al cabo del tiempo, a medida que los partidos se vayan adecuando a sus normas, y sus normas vayan siendo juzgadas en el quehacer político diario, se irán corrigiendo defectos y perfeccionando el instrumento.

De todos modos, es más que una ley de juego para marzo. Yo diría, interpretando el pensamiento de los señores miembros de la comisión, que en nadie ha habido en momento alguno la idea de que lo que se estaba redactando era un cuerpo legal para ser aplicado en un comicio, y nada más que en uno.

El Poder Ejecutivo —lo dice en su mensaje— ha elaborado su proyecto sobre la base de una copiosa doctrina y de la legislación y jurisprudencia tanto nacionales como extranjeras. Es decir, que ha ido a las fuentes teóricas, y sin duda ninguna, pienso yo, también habrá tenido presente la experiencia de la aplicación de normas legales similares de años anteriores y la muy breve, pero experiencia al fin, que pueda haber recogido la Cámara Nacional Electoral.

Hemos realizado el estudio con un criterio eminentemente práctico, analizando las cláusulas y tratando de compararlas con lo que conocemos de la vida política de nuestros respectivos partidos, que son distintos en su composición, en muchos aspectos, pero que tienen

—diría yo todos los partidos representados en esta Cámara— un denominador común: son fuerzas políticas construidas en la democracia y para servir a la democracia.

Como en el quehacer diario de la política se van presentando los problemas y se van resolviendo sobre la marcha, esa experiencia, de muchos años en algunos, de menos en otros, pero larga experiencia en todos los casos, es la que hemos tratado de volcar al confeccionar el orden del día que hoy se comienza a tratar en la Cámara.

Durante la discusión de las cláusulas de este despacho muchos señores diputados han expresado su pudor acerca de si se podría, constitucionalmente, reglar determinados aspectos vinculados con la vida de los partidos políticos; si un estatuto de este tipo podía determinar las condiciones para ser candidato de un partido, más allá de lo que fija la Constitución; si era factible, en una palabra, encerrar un derecho tan primordial en la democracia como el de elegir y ser elegido, en una norma legal.

Supongo que sobre el particular no podía haber ninguna duda. Hay dos artículos de la Constitución que dan origen a la posibilidad de que se regle en un cuerpo orgánico la vida de los partidos en la República Argentina. Se trata del artículo 14, en cuanto señala como un derecho esencial el de asociarse con fines útiles, y del artículo 22, que textualmente dice: «El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución.»

Si lo que existe en la República es la democracia representativa y no la directa, es fundamental la existencia de los partidos políticos. A nuestro juicio, no se concibe una República democráticamente organizada en la que no haya partidos políticos que, como tales, representan la parcialidad de las opiniones sociales, económicas y políticas del pueblo. No se concibe una democracia sin partidos políticos fuertes y organizados.

Podríamos efectuar comparaciones. Ver lo que ocurre, por ejemplo, en la turbulenta democracia del Brasil, donde los partidos políticos no tienen la organicidad ni la vigencia de los nuestros. Y también comparar con lo que ocurre en los Estados Unidos de América, donde los partidos políticos, si bien no reglados por normas estatales que los encuadren en alguna serie de requisitos mínimos, son partidos orgánicos, y como tales constituyen la base esencial de aquella democracia del Norte.

Y si comparamos lo que ocurre en esos países con lo que sucede en el nuestro, podremos advertir —yo no voy a entrar al análisis de la vida de los partidos políticos argentinos— cómo en la medida en que los partidos son más orgánicos, más despersonalizados, permiten más la introducción del pensamiento de sus afiliados, tienen mejor organizados sus órganos delibe-

rativos y directivos, y sirven mejor a la democracia.

Al contrario, cuando los partidos son despersonalizados, cuando el pensamiento de los afiliados no tiene valor alguno en la vida de ellos, cuando no están constituidos sobre bases auténticamente democráticas, esos partidos, lejos de servir a la democracia argentina, han servido para deteriorarla.

Y cuando gobiernan partidos organizados, el país se encauza por los carriles de la Constitución; cuando gobiernan partidos que no tienen el mismo grado de organización y madurez, el país se aparta de esos carriles.

Esto, dicho así muy rápidamente, marca a mi juicio la necesidad de que exista reglamentación en los partidos políticos, de que se perfeccione la democracia interna. No habría posibilidad de hacer democracia en sentido general, si esa democracia no existe, primitiva y fundamentalmente, en la vida de los partidos. Por eso el estatuto que vamos a analizar rápidamente en seguida, tiende a que fundamentalmente exista, como primera condición, la democracia dentro de los partidos.

Nosotros deseáramos —y digo nosotros, los políticos argentinos, que deseamos perfeccionar nuestra democracia y salir de este estado de convulsión y de confusión en que vive la República desde hace tantos años— reivindicar ante la opinión pública a los partidos políticos. Es común que todas las culpas de lo que ocurre en la Argentina se cargue sobre los políticos y los partidos que representan. Es común también ver cómo muchos políticos, casi de buena fe, en muchas ocasiones tratan de sacar la cosa política de la competencia, digamos así, de los partidos, para llevarla a otro tipo de organizaciones, a los llamados factores de poder.

No dudo de que la democracia se construye y perfecciona no sólo a través de los partidos políticos; que la Iglesia juega un papel importante en esa tarea, que lo juegan también los gremios, las instituciones culturales. Pero la esencia del quehacer político tiene que estar reservada en la democracia a los partidos políticos.

Cuando los partidos dejan de ejercer el control de lo político, y lo político se traslada a otro tipo de entidades públicas, viene la desfiguración de la democracia, y ésta corre riesgos severos. Me refiero, concretamente, a cuando se ha intentado sacar del campo de los partidos políticos y llevar todos estos problemas al campo gremial, por ejemplo, con grave daño para las instituciones y los partidos y también con grave daño para los gremios, cuya finalidad es por cierto muy otra que la de los partidos políticos. Es necesario que las normas legales den a cada una de estas instituciones su campo específico de acción y que las protejan de tal manera que la interferencia de unas y otras no tienda a destruirlos para que la reali-

zación de su quehacer, siempre cada una dentro de su campo específico, sirva auténticamente al país.

Otra de las ideas que hemos tenido presente para aceptar normas que venían en el proyecto del Poder Ejecutivo es de que el país necesita partidos importantes, no partidos de sello y almohadilla, diría, sino partidos grandes, vigorosos, que canalicen auténticamente a una gran masa de la opinión, y para ello creemos que pueden servir algunas normas de este estatuto.

Se ha dicho en el país, cuando se ha discutido la aplicación del sistema proporcional en el régimen electoral argentino, que por esta vía se tendía a la atomización de los partidos.

Creo que el problema de la atomización de los partidos nada tiene que ver con el sistema electoral aplicable. Advirtamos que la mayor división y subdivisión de los partidos políticos argentinos ocurre durante la aplicación del sistema de lista incompleta, que teóricamente debía llegar al establecimiento del sistema bipartidista. Sin embargo, por otros factores en los cuales no ha jugado la ley electoral, lejos de llegar al bipartidismo, se ha llegado a la multiplicidad de partidos, muchos de los cuales no constituyen nada más que un nombre y un muy breve, muy menudo conjunto de opiniones.

Creo que la aplicación del sistema proporcional, por paradoja, va a traer en el país el aglutinamiento de las fuerzas políticas, no sé si en dos, tres o en cuatro núcleos importantes, pero sí será un conjunto reducido de partidos, porque probablemente sea el medio que servirá para hacer un poco de cernidor de las ideas, lo que irá provocando en el andar del tiempo la desaparición de partidos sin vigencia. De todos modos, este estatuto tiende a facilitar la formación de partidos fuertes, de partidos grandes.

La comisión cree en la utilidad de multipartidismo, aunque fuera una aspiración de todos la existencia de un partido fuerte que gobierne y de una fuerza política, fuerte también, que lo controle. Por creer en la necesidad de la multiplicidad de partidos, se condena enérgicamente la tendencia al partido único, que es la forma de destruir la democracia y que constituye la nota característica de la autocracia, la nota característica de los totalitarismos.

Estima la comisión que los partidos políticos deben tener medios económicos adecuados para realizar su alta función en la democracia, y ha encarado este asunto sin temor a la crítica que sin duda se exteriorizará en algún momento.

La comisión ha encarado este problema con realismo. Nuestros partidos políticos han sido la obra, a lo largo de toda la vida institucional de la República, del amor a las instituciones de hombres que generalmente han abandonado todo por dedicarse apasionadamente a la política. La historia de los grandes políticos del país nos acerca generalmente una nota común. Ningún

hombre público que se haya dedicado con intensidad a la tarea política muere rico, y sí, generalmente, los hombres que entran en el quehacer político poseyendo medios de fortuna la van perdiendo en las campañas políticas o en el quehacer de la política. Claro está; la política es una obra de fe; la política es una obra al servicio de ideales; el político que se lanza a la tarea de tal nunca medita —y si lo medita, por lo común se queda muy rápido en el camino— acerca de qué rédito puede producirle su accionar. En el político está como Norte su país, su país visto a través de su verdad, que puede ser una verdad equivocada, pero que es su verdad, y se lanza a ella con toda intensidad. Esa es la realidad de todos los dirigentes políticos, grandes y chicos, y aun de muchos que no son dirigentes.

Ahora bien, ¿cómo accionan los partidos políticos? Recogen los fondos necesarios para hacer sus campañas políticas de la buena voluntad de quienes comparten sus ideales, que es el procedimiento normal, o tienen que ceder a veces a las presiones de grupos económicos que, entregando los medios financieros para promover campañas, desfiguran las ideas, tuercen la finalidad de los partidos y dañan a la democracia.

En nuestro país, hasta 1957, no hay normas que acuerden a los partidos políticos medios económicos. El partido político es la aventura de un conjunto de irrealistas que se las deben arreglar solos, que deben buscar los medios donde puedan, porque están al servicio del país y, porque como son idealistas, no deben medir lo material. En 1957, cuando se realiza la primera elección bajo el gobierno de la Revolución Libertadora, se da un paso tímido. El Estado imprime en sus imprentas o a su costa las boletas de los partidos políticos, y les da alguna franquicia, durante breves días, para trasladar a sus dirigentes de un lugar a otro.

Más adelante se ensaya el sistema de dar alguna suma de dinero, y al respecto existe una ley nacional, que tuvo su origen en una inquietud de nuestro sector, por la que se asigna a los partidos una suma de dinero por voto obtenido. Nosotros mantenemos el principio en el proyecto. Elevamos un poco la suma, porque entendemos que la primitiva de diez pesos por voto obtenido es una cantidad alejada de la realidad económica del país. Agregamos, además, algunas otras cosas que son muy importantes para la vida de un partido; por ejemplo, gozar gratuitamente de comunicaciones permanentes —telefónicas y postales— y de algunas franquicias para trasladar a los dirigentes. Muchos partidos políticos no realizan con intensidad las campañas que deben cumplir para conformar la opinión pública, para mamar en ella y para ir la plasmando con miras a determinados asuntos o a una campaña política por la imposibilidad material que tienen sus dirigentes de costearse los traslados. Creemos de esta

manera que hemos avanzado algo en ese terreno, aunque no lo suficiente.

Los partidos políticos pueden y deben institucionalizarse. Vale decir que pensamos que los partidos políticos, que son elemento importante —vital, diría yo— de la democracia, deben estar reglados por una ley, y esa ley, al par que les señale obligaciones, debe darles algunos derechos fundamentales, y así lo establecemos en una de las normas del estatuto. Los partidos políticos son factor fundamental para formular la política nacional, para realizarla en función de gobierno y para nominar a los candidatos. Sé que esto se va a discutir, como se discute cada vez que se reglamenta por ley algún derecho. Lo que quieren extremar el sentido liberal de la Constitución van a decir que si la Carta Magna no exige para ser candidato a diputado nacional, presidente, vicepresidente o senador, nada más que un reducido conjunto de principios, todo lo que signifique avanzar un poco más puede representar una cláusula inconstitucional.

La comisión entiende que otorgar a los partidos políticos la facultad de ser los únicos que nominen candidatos no significa avanzar más allá de lo que la Constitución permite, y que es una norma constitucional porque nuestra Carta Magna, en su artículo 22, quiere que el pueblo no delibere ni gobierne si no lo es por medio de sus representantes. Para que se pueda organizar en una democracia un sistema donde los representantes sean auténticos, es necesario que ellos sean nominados por partidos políticos.

Se podría decir que en esta forma se coarta la posibilidad de que ciudadanos que no pertenecen a un partido político se puedan nominar o autocandidatar. Si hay ciudadanos que puedan recoger tal número de opiniones como para animarse a presentar su candidatura, la solución está en que constituyan partidos políticos, pues para ello los requisitos son mínimos en la ley reglamentaria que debatimos. En síntesis, no se le coarta la posibilidad de actuar y sólo se establece un cierto orden en la vida política del país.

He dicho que los requisitos para constituir un partido político son mínimos. En ese sentido el estatuto en debate señala que para que pueda existir un partido político es necesario, en primer término, que esa fuerza reúna a un grupo representativo, un grupo de voluntades unidas por una idea común, pero que tengan representación. El mínimo que exige el estatuto es el 0,4 por ciento, o el 4 por mil, con relación al número de ciudadanos inscritos en cada padrón electoral. Concretamente, con el 4 por mil de los electores de los distritos en general se puede constituir un partido político.

Algunos partidos políticos oportunamente consultados atacaron a ese mínimo con el argu-

mento manido de que de esta forma lo que se hace es perturbar la posibilidad del accionar democrático.

La experiencia del país nos dice que si a los partidos políticos no se les pone una valla mínima, un mínimo en el número básico de sus afiliados para formarlo, se abre la puerta a la creación de fuerzas políticas que sólo existen en el marbete, pero que en la realidad de los hechos o perturban el acto electoral, o confunden a la ciudadanía, o sirven para negociar. Y esto es muy importante. Desearíamos que ningún partido político se constituyera para mañana servir de base a negociaciones electorales. Haciendo una comparación grosera, diré que desearíamos que ningún partido político se constituyera al igual que aquellas sociedades anónimas que, constituidas y obtenida la personería necesaria, se venden después al mejor postor. Lamentablemente, en el país existen antecedentes de partidos políticos vendidos al mejor postor.

El otro requisito fundamental que establece el estatuto es el de que los partidos tengan una doctrina democrática y al servicio de la Constitución. En la mentalidad de mucha gente que cree que la libertad de una democracia es un abrir las puertas a cualquier tipo de acción aunque esa acción pueda destruir la democracia misma, esto puede constituir una norma de tipo inconstitucional.

A nuestro juicio, y con la experiencia vivida por el mundo entero, es fundamental que existan en una ley de esta clase normas que obliguen a que los partidos políticos tengan una doctrina claramente democrática y que estén claramente al servicio de la Constitución y del sistema político establecido por la Constitución. Esto no significa, desde luego, que un partido político no pueda proponer la modificación de la Constitución si se somete a las normas que la misma Constitución señala. Pero no concebimos en la vida política argentina la existencia de partidos que obtengan medios económicos del Estado, que estén garantizados en su organización por el Estado y que sirvan fundamentalmente para destruir las bases mismas del Estado. De ahí que la doctrina democrática y el sostenimiento de los principios básicos de la Constitución Nacional sean a juicio del proyecto del Poder Ejecutivo y del despacho de la comisión que informo, un requisito fundamental para la existencia de los partidos.

Sr. Muñiz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Con todo gusto.

Sr. Muñiz. — Si no lo he entendido mal al señor diputado, queda perfectamente claro que los partidos pueden propiciar, por el medio que establece la Constitución Nacional, la reforma del estatuto básico del país.

Sr. Belgrano Rawson. — Así es, señor presidente.

La inquietud del señor diputado Muñiz, que ya la había expresado en la comisión cuando se discutieron las cláusulas relacionadas con este tema, ha quedado aclarada; pero la aclaro más todavía. El proyecto del Poder Ejecutivo traía una norma que la comisión ha creído necesario modificar, porque señalaba que los partidos políticos debían tener una doctrina en la que se sostuviera expresamente el régimen democrático, republicano, representativo y federal, que es el sistema que adopta la Constitución. La comisión ha suprimido la palabra «federal» porque creemos que ello no hace a la esencia del régimen republicano, que una república puede ser tanto federal como unitaria; pero sí hemos mantenido los otros principios del régimen democrático: el republicano y el representativo, que esos sí hacen a la esencia de las instituciones argentinas. De modo tal que cuando un partido propugna en su plataforma la modificación de la Constitución Nacional, inclusive en lo relativo al régimen federal, estaría perfectamente encuadrado en las normas de la ley reglamentaria que comentamos.

Entendemos como un requisito básico de la existencia de los partidos políticos la inscripción y el reconocimiento judicial. Parecería que esto no tiene mayor importancia; sin embargo, el despacho se la atribuye. Si la mentalidad con que está conformado este dictamen, si la finalidad que se persigue es que los partidos políticos se institucionalicen, es entonces admisible que se exija como requisito necesario que los partidos estén inscritos y reconocidos por el órgano jurisdiccional al cual se atribuye la definición en esta materia, que es la justicia. Cuando la justicia, no ya el poder administrador, analice la conformación de un partido político, su doctrina, su organización interna, etcétera, y lo reconozca e inscriba, le habrá dado la calidad de fuerza política institucionalizada.

Principio fundamental es que los partidos políticos tengan una organización estable y practiquen la democracia interna. En el despacho de la mayoría hemos modificado a este respecto algunos principios del proyecto del Poder Ejecutivo, porque entendimos que iban más allá de lo que es admisible exigir a los partidos políticos; pero recogimos la mayor parte de esas normas.

De acuerdo a nuestro despacho, los partidos políticos tendrán que tener una organización interna ajustada a los principios generales de la democracia. Para ello se exige a los partidos políticos que su carta orgánica —que la dictan de acuerdo a su propio criterio y por sus órganos deliberativos— contenga algunos requisitos mínimos. Uno es la división de las funciones ejecutivas, de las que yo llamaría legislativas internas. Así tendremos órganos deliberativos, que conforman la doctrina, que dictan las plataformas, que señalan el quehacer partidario, y órganos ejecutivos que llevan todo esto a la

práctica. Otro requisito es la existencia de órganos de control patrimonial y de órganos disciplinarios.

Es también fundamental a este respecto que los partidos elijan sus autoridades y sus candidatos mediante un sistema democrático auténtico, de acuerdo con lo que establezca su propia organización. El proyecto del Poder Ejecutivo y algunos dictámenes en disidencia proponen que los candidatos y autoridades de los partidos sean elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de sus afiliados. Personalmente no tendría ningún inconveniente en aceptar esta norma, y tampoco la tendrían muchos de los partidos que integran la Federación Nacional de Partidos de Centro, porque figura en nuestras cartas orgánicas y porque la practicamos. Sin embargo, hay partidos que de una u otra manera realizan la democracia interna y que no tienen establecido el sistema del voto directo, secreto y obligatorio para todas las elecciones internas.

Por estos motivos los firmantes del despacho de la mayoría creemos que es necesario que los partidos políticos establezcan el sistema que más se ajusta a su modalidad y al lugar donde van a actuar. No es lo mismo exigir a un partido que realice elecciones por el voto directo, secreto y obligatorio de la totalidad de sus autoridades y candidatos en la Capital Federal que en algunas provincias argentinas, cuya conformación geográfica y cuya composición humana no hacen factible, no hacen viable, el sistema de elección directa en forma permanente y continuada. Por eso creemos que dejarlo librado a las cartas orgánicas es suficiente para preservar a los partidos en su democracia interna y, personalmente, creo que bastaría con las exigencias de que la elección se practique en forma directa por los afiliados, por voto secreto y obligatorio, en la elección primaria, dejando al manejo de las cartas orgánicas las elecciones secundarias o de tercer grado, incluso, que muchos partidos tienen establecidas.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Con todo placer, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Muy brevemente, con la finalidad de esclarecer el alcance del artículo al que se está refiriendo el señor diputado, relativo a la organización y administración de los partidos políticos.

Se establece en el despacho de la mayoría que el gobierno y administración de los partidos estará distribuido en órganos deliberativos —se dice—, ejecutivos, de control y disciplinarios. Sería bueno que desde ya se aclararan los alcances de esta última parte de la disposición que estamos comentando. En una palabra, si el des-

pacho exige el establecimiento de un órgano disciplinario autónomo y separado, por así decir, de los órganos deliberativo y ejecutivo o si, por el contrario, sería permitido que las funciones disciplinarias fuesen ejercidas, por ejemplo, por las convenciones partidarias. Esto es importante, a efectos de evitar inconvenientes en la interpretación que posteriormente hagan los jueces al revisar las cartas orgánicas partidarias.

Sr. Belgrano Rawson. — He señalado que el pensamiento de la comisión es dejar librado a las cartas orgánicas reglar la vida interna de los partidos, exigiéndoles un mínimo de condiciones.

La aclaración que solicita el señor diputado Serú García —que hace la pregunta, presumo, en el afán de que quede claro el alcance de la norma, ya que ha participado activa e intensamente en la redacción de este despacho—...

Sr. Serú García. — Así es.

Sr. Belgrano Rawson. — ...se contesta, prácticamente, con el texto del inciso a) del artículo 23 del despacho. Lo que se quiere es que la carta orgánica de un partido se conforme a los siguientes principios, y dice: «a) Gobierno y administración, distribuidos en órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios.» Esa es la norma básica. Cada partido, en su carta orgánica, establecerá cómo, con qué alcance y en qué forma se constituirán los distintos órganos deliberativos, ejecutivos, de control y disciplinarios. Es un proceso —me apunta un colega— de carácter casi reglamentario interno.

Sr. Torreiro. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor diputado.

Sr. García. — Yo también le solicito una interrupción al señor diputado.

Sr. Belgrano Rawson. — Con todo gusto.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Torreiro.

Sr. Torreiro. — Respecto de la pregunta que acaba de efectuar el señor diputado Serú García, y ampliándola, deseo solicitar al señor diputado Belgrano Rawson aclare si en materia disciplinaria el despacho de la mayoría alude al órgano que en segunda instancia revisaría las sanciones del organismo autónomo disciplinario de primera instancia. Es decir, si se mantiene el principio de la apelación. De otro modo, parecería que se unifica en un organismo la medida disciplinaria. Si no, habría que constituir diversos organismos disciplinarios autónomos para que dictaminaran en primera y en segunda instancia, para que revisaran los fallos, o algún otro órgano partidario obraría como tribunal de alzada.

Me agradecería que el señor diputado ampliara o explicara este concepto, o si se ha tenido en cuenta para la discusión en particular, en el

caso de que no se hubiera considerado en el dictamen de la mayoría.

Sr. Belgrano Rawson. — Señor presidente: he señalado —o creo haber señalado— que este despacho trata de dar las normas básicas de organización de un partido político, sin entrar en detalles de tipo reglamentario. Todos los sistemas que señala como interrogantes el señor diputado Torreiro caben en el régimen de esta ley; quienes deben establecerlo son los partidos.

Por otra parte, señalo que en nuestro país existen los partidos políticos —los ya reconocidos son ciento treinta y nueve—, y todos ellos tienen, en mayor o menor grado, un sistema disciplinario interno; algunos atribuyen la jerarquía disciplinaria a la junta de gobierno o comité central; otros lo hacen mediante un organismo autónomo, como señala el señor diputado, un tribunal de disciplina; algunos establecen el recurso de apelación y otros no. Por lo general, todos establecen que el organismo de máxima jerarquía es el congreso, la asamblea general o la convención del partido, según la calificación de cada uno.

Con esto presumo haber contestado a la pregunta del señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Señor diputado Belgrano Rawson: la Presidencia le ruega se sirva no aceptar interrupciones, para así atenderse a los términos reglamentarios.

Sr. Belgrano Rawson. — Estoy tratando de comprimir al máximo la exposición, con el reloj a la vista, pero no puedo evitar conceder interrupciones que cumplen la alta finalidad de aclarar, como ha ocurrido con las tres interrupciones que he concedido y con la que voy a acordar ahora al señor diputado García. De todas maneras, para ajustarme a la indicación del señor presidente, pediría a los colegas se sirvan no solicitar más interrupciones.

Sr. García. — Es evidente que las interrupciones que se han formulado al señor diputado Belgrano Rawson, significan anticipar el debate en particular de esta ley, y en ese sentido es mal método, incluso porque interrumpe la exposición del orador. De modo que exhorto a los señores diputados para que este tipo de interrupciones aclaratorias sobre aspectos formales, no se formulen durante la discusión en general.

Sin embargo, no puedo evitar entrar al problema que se ha traído a través del interrogante del señor diputado Serú García, para decir que no coincido con la interpretación que da el señor diputado Belgrano Rawson con respecto a la posibilidad de que los organismos disciplinarios pueden ser también organismos deliberativos máximos. Creo que de la letra clara del artículo, y más aún referida al espíritu del mismo —por lo menos es lo que hemos entendido algunos diputados integrantes de la comisión—, es que el poder disciplinario debe estar absolutamente separado de los otros poderes internos del partido; es decir, no hay posibilidad alguna de que este poder disciplinario esté subsumido

por otro organismo partidario interno. Esa es la interpretación que algunos diputados de la comisión hacemos del inciso a) del artículo 23, por lo que, naturalmente, después habrá que acordar cuál es la interpretación auténtica que de esta norma puede darse en el transcurso del debate.

Sr. Presidente (Del Pero).— Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson — El colega García no me ha entendido bien cuando contesté a los interrogantes de los señores diputados Serú García y Torreiro. Yo no he dado la interpretación de la comisión; señale, simplemente, que el sistema disciplinario no dispondrá cada carta orgánica, y que podrá ser aplicado por los órganos deliberativos, por los órganos ejecutivos o por órganos autónomos, con o sin apelación. Ello dependerá del sistema que cada uno de los partidos establezca.

De todas maneras, lo fundamental es que quede en claro que lo que se exige por este estatuto a los partidos políticos —y trato de volver al cauce de mi exposición— es que haya una democracia interna efectiva, real, donde los afiliados jueguen un papel real, donde no sean meros convidados de piedra o constituyan simples números.

Queremos partidos en donde la voluntad de quienes lo forman, que son los afiliados, conforme la mentalidad del partido, su mecánica y su accionar en política. Es decir, que concretamente deseáramos que en lo futuro no actúen en el país partidos políticos manejados por la voluntad de un hombre o de un conjunto de hombres erigidos en una dictadura interna en el partido; que desaparezcan de la vida política de los partidos los organismos permanentemente intervenidos a los efectos de manejarse desde una central, desde un organismo máximo. Esa es la finalidad concreta de las normas que trae el despacho que estoy informando.

A título personal e interpretando una posición del bloque, manifiesto que nosotros, la Federación de Partidos de Centro, incluimos otro requisito más, que en la oportunidad del tratamiento en particular lo vamos a señalar con amplitud, y que ahora lo enuncio simplemente: la no dependencia de partidos o de personas extranjeras o que vivan en el extranjero.

Este estatuto, al otorgar el reconocimiento y la inscripción a un partido político, le da personalidad jurídico-política, junto con la personalidad de derecho privado, es decir que el expediente que se ha discutido ininidad de veces y que ha provocado que muchos partidos hayan tenido que desplazar sus bienes colocándolos a nombre de partidarios o a nombre de sociedades anónimas, no vuelva a ser utilizado en lo futuro. Los partidos políticos tienen, junto con la calidad de persona jurídico-política de de-

recho público, la condición de personas jurídicas de derecho privado, y como tales podrán adquirir bienes que deberán —así lo dice otra de las normas del estatuto— estar a nombre de los partidos.

Se subordinan los partidos políticos a la justicia; es decir, todo lo relacionado con la vida del partido se saca de la esfera del poder administrador y se entrega a la justicia, que está organizada por otras normas legales, que nosotros no consideramos ahora, pero que constituyen un ente judicial integrante del Poder Judicial de la Nación, con plena autonomía del poder administrador, con lo cual creemos que los partidos políticos gozarán de una auténtica norma de protección en lo futuro.

También se establecen distintas categorías de partidos. Así, estarán los partidos de distrito, que se organizan para actuar en el ámbito de un distrito electoral —de una provincia o de la Capital—; los partidos nacionales, que son aquellos que manifiestan la voluntad de actuar y se inscriben en dos o más distritos, de acuerdo con lo dispuesto por el dictamen, con autoridades comunes, con nombre común, con carta orgánica común, con principios doctrinarios y finalidades comunes, y se establece, finalmente, la confederación de partidos. Con todo lo cual el proyecto no hace sino recoger la realidad del país, ya que en este momento, sin necesidad de estas normas, existen los partidos de distrito, los nacionales y los confederados.

Se establecen, así mismo, diferencias entre los partidos nacionales y confederados. Rápidamente señalo una, el derecho de secesión, que se otorga expresamente a los partidos confederados y es negada expresamente a los partidos nacionales. Y no podría ser de otra manera, porque los partidos nacionales son, por su conformación, fundamentalmente unitarios, y los partidos confederados son fundamentalmente federales.

Se introduce el partido fusionado que resulta de la mezcla o, mejor dicho, de la fusión de partidos preexistentes, dentro de un distrito o en más de un distrito, y se dan las normas a las que no puedo referirme porque el mecanismo de la luz roja está indicando que ha llegado el final de mi exposición. Se establece, así mismo, la posibilidad de la alianza transitoria de partidos a los fines de una elección.

Con respecto a la alianza transitoria de partidos con fines electorales, el proyecto que informo establece una serie de requisitos mínimos de publicidad, a los efectos de que estas alianzas no se realicen en la clandestinidad y para que los ciudadanos tengan conocimiento pleno, con la anticipación debida, de qué finalidades persiguen y con qué propósitos dos o más partidos se entienden para una elección determinada. Esto es muy importante en nuestro país. Nosotros, que tenemos el voto universal obligatorio, atribuido tanto a alfabetos como a

analfabetos, debemos propender a que los partidos políticos se vuelquen a la opinión pública con la mayor claridad posible. Esa es la única forma de lograr que cuando el votante emite su sufragio a favor de un partido, lo haga con la máxima posibilidad de convicción propia y que no sea llevado a esa expresión de voto positivo por las instrucciones o por las normas que le den sus dirigentes.

De ahí entonces que entendemos que si se acepta en nuestra legislación la posibilidad de la alianza transitoria con fines electorales, el procedimiento sea realizado a la luz del día, con la debida antelación y la suficiente publicidad.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Belgrano Rawson. — Se establece el derecho de los partidos a un nombre, y a utilizarlo con exclusividad. El nombre debe ser claro en su especificación; debe ser despersonalizado y llevar en su mismo enunciado algo del contenido doctrinario del partido, de manera que evite confusiones materiales o ideológicas que puedan torcer la voluntad de los votantes; se busca, a la vez, que traduzca ideas y fines. Bajo de estos requisitos, el estatuto concede protección al nombre en su artículo 17.

También se establece en qué debe consistir la doctrina y la organización de los partidos políticos, y ésta posiblemente será la norma que dará lugar a mayores discusiones y que más encenderá las pasiones en la discusión en particular.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia lamenta informar al señor diputado que ha expirado el término reglamentario para su exposición.

Sr. Muñiz. — Pido la palabra.

Sr. Belgrano Rawson. — Comprendo el alcance de la sugestión que hizo el señor diputado Ghioldi al principio de esta sesión, y comparto su punto de vista. Por eso he estado tratando de comprimir mi exposición, de modo que si con alguna benevolencia de la Honorable Cámara se me concedieran diez o quince minutos más, podría concluir con esta visión panorámica de todos los institutos que conforman este despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Nuestro bloque, que comparte el criterio enunciado por el señor diputado Ghioldi, considera también que tratándose del miembro informante del despacho de la mayoría, la Honorable Cámara puede acceder a prorrogar el término por el plazo de quince minutos.

Sr. Domingorena. — Adherimos a la indicación, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con el asentimiento de la Honorable Cámara, se prorrogará en quince minutos el término para su exposición al señor miembro informante del despacho de mayoría.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿El señor diputado Belgrano Rawson concede la interrupción que le solicitara el señor diputado Muñiz?

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Yo no estoy de acuerdo.

Perdóneme, señor presidente, pero se olvidó de concederme la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia entendió que el señor diputad^o la había solicitado para una interrupción al señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Muñiz. — Eso viene después, señor presidente.

Estoy conforme para que a todos los oradores se les aplique estrictamente el reglamento en cuanto al tiempo de que disponen para sus exposiciones, situación en la que estoy yo; pero sugiero que a los miembros informantes de la mayoría, como igualmente a los de los despachos minoritarios, se les conceda, con generosidad, ampliación del plazo, sin constreñirlo a quince minutos, porque el tema es importante y son informes que debemos escuchar en toda su extensión, es decir, sin limitar a los oradores la posibilidad de que digan todo lo que tienen que decir.

Propongo, entonces, que se aplique estrictamente el reglamento a todos los señores diputados, con excepción de los miembros informantes de los despachos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia le señala al señor diputado que el reglamento ya contempla esa situación y les acuerda a los señores miembros informantes el doble de tiempo que a los demás señores diputados. Además, el señor diputado Belgrano Rawson solicitaba una ampliación de quince minutos en su plazo, que es la que la Cámara ha acordado.

Tiene la palabra el señor diputado Muñiz para hacer uso de la interrupción que le ha sido concedida.

Sr. Muñiz. — No entiendo bien la prohibición que se establece en el inciso 5º del artículo 16. ¿Es para el pasado o comprende también el presente y el futuro?

Sr. Belgrano Rawson. — Sin perjuicio de las manifestaciones que se harán al tratarse en particular la norma a que se refiere el señor diputado, le aclaro que ella rige para el futuro y no para el pasado. Yo se adónde va el señor diputado. Se prohíbe el uso de vocablos como «argentino», «nacional», «internacional», en el nombre de los partidos políticos, para el futuro, ya que a los partidos políticos Unión del Pueblo

Argentino, Partido Socialista Argentino, Federación Nacional de Partidos de Centro, etcétera, se les reconoce el derecho a su nombre.

En los artículos 21 y 22 del dictamen se establece la necesidad de que los partidos políticos adecuen, en la forma y en su accionar, su doctrina y su organización a las normas del artículo 3º, inciso b), que es el requisito básico que en su momento señalé: que la doctrina que propugnen sea el sostenimiento del régimen democráticos representativo y republicano y que se adecue a los principios básicos de la Constitución.

Se señala también que ésa debe ser la obligación no sólo de los partidos, sino también de sus candidatos, enumerando el artículo 22 aquellos principios que a juicio del dictamen que contiene este despacho constituyen la violación de aquella norma.

Brevemente —sin perjuicio del análisis en particular— señalo que la libertad no es suicida y que en la democracia se establece como principio esencial de vida. También deben haber normas que impidan que en el abuso de esa libertad tienda a destruir el sistema mismo. Alemania, después de la última guerra, e Italia, luego del mismo episodio bélico, decretaron la proscripción total, absoluta y definitiva de los que habían constituido como partido político la negación de la democracia y de los principios elementales de la convivencia humana. Nuestra norma no va tan lejos, porque los precedentes no son similares, y el artículo 22 enumera algunos principios básicos que adecuan la norma a la realidad política actual de nuestro país. Hay libertad para que los ciudadanos se constituyan en partidos, pero para que sostengan y no para destruyan la democracia. Esto es fundamental, y en este aspecto todos los partidos políticos que suscriben a través de sus representantes en la comisión el despacho en mayoría, han coincidido, aunque hay diferencias de matices.

Dejo de lado algunas otras cosas para referirme a la plataforma electoral. La plataforma electoral no es la doctrina del partido. El partido tiene una doctrina, un conjunto de principios que hacen a su esencia, a su razón de ser como entidad al servicio de la democracia. La plataforma política, en cambio, es el conjunto de principios a sostener en determinada elección, y el estatuto establece como requisito fundamental que los partidos dicten con la debida publicidad, para que no actúen en la clandestinidad, una plataforma política previa a cada acto electoral.

Con relación a la afiliación, se establece la necesidad de su existencia, pero no el principio de que los partidos políticos tienen la obligación de aceptar cualquier afiliado. Sobre el particular, la comisión ha discutido con amplitud el tema. Dejar libertad de afiliación, es decir, la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda afiliarse a cualquier partido político sin que en

ese acto de voluntad intervengan los organismos directivos del partido, es establecer un factor de perturbación en la vida interna de los partidos, bajo el principio de una supuesta norma democrática.

Es factible —y en la historia de muchos partidos políticos ha ocurrido algunas veces— que una actividad ideológica o un partido político en su afán de perturbar o destruir a otra fuerza política, le introduzca afiliados en número tal que pueda modificar su conducta y su forma de acción en lo futuro. De tal manera que debe quedar en claro en estas normas que los partidos serán los únicos que dispondrán sobre los requisitos internos de afiliación. El Estado se limita a decir que la afiliación tiene que tener publicidad, que se realiza mediante el sistema de fichas. Se establece un doble juego de ficheros: uno en el partido político, del cual es éste el único dueño y sólo tiene publicidad para sus afiliados, y otro fichero centralizado en la justicia, que tiene un alcance muy elevado y una finalidad muy levantada, salvo las disposiciones a las que me voy a referir seguidamente.

Los que somos partidarios de la existencia de un fichero centralizado por la justicia electoral, creemos que este sistema, lejos de constituir una forma de inmiscuirse en la vida política de los partidos, es una manera de moralizarlos. Se ha hecho la objeción de que un partido político con vocación dictatorial tendría en función de gobierno, en esta norma sobre la publicidad del fichero y el fichero centralizado de todos los partidos en la justicia electoral, un medio de persecución facilitado por la democracia. Señalo que esto es un exceso de celo, quizá por reminiscencias de sucesos ocurridos en el país, pero que en la realidad de los hechos tiene poca relevancia, porque cuando un partido político en función de gobierno y con vocación dictatorial tiene los medios para ejercer la fuerza desde el gobierno, no va a poder ser, desde luego, atado por la ley que sancionaremos, que es para gobiernos que respetan las instituciones democráticas. Por otra parte, como bien me apunta un colega, la dictadura no se puede prohibir por ley ni por decreto, pues éste es un hecho que se ampara en la fuerza, y cuando estamos ante él, lo único que podemos hacer es combatirlo, como en este país lo hemos combatido muchos.

Establecemos en el despacho la publicidad del fichero, aunque por un artículo se fija que los partidos que no desearan que el fichero centralizado sea llevado por la justicia, podrán llevarlo ellos mismos, pero dando acceso al fichero al juez electoral. El fichero centralizado tiene mucha importancia para la vida interna de los partidos.

Uno de estos aspectos es el relacionado con la doble afiliación, vieja corruptela de la política argentina, en la que incurren muchos dirigentes, que hasta llegan a negociar con las afiliaciones, a las que trasladan de un partido a

otro, al servicio de grupos que actúan en elecciones internas. Corruptela a la que se prestan muchos ciudadanos, que estando afiliados a dos o más partidos, creen quedar simultáneamente bien con Dios y con el diablo.

¿Cómo se puede establecer en las normas de un estatuto la prohibición de la doble afiliación? El mejor control para ello estará en la publicidad del fichero. En el proyecto del Poder Ejecutivo se incluyen sanciones muy severas para el ciudadano que, estando afiliado a un partido político, se afilia a otro. Nosotros, en el despacho, hemos eliminado estas sanciones con el fin de establecer una norma de orden práctico, basada en la experiencia de la vida de los partidos. Se prohíbe en el proyecto la doble afiliación y se determina que la afiliación a un partido deja automáticamente sin efecto las afiliaciones anteriores. Esta norma tiene un sentido práctico y se funda en un hecho vivido por los partidos políticos.

Sra. Valente de Pérez Tort. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Con mucho gusto, señora diputada.

Sra. Valente de Pérez Tort. — Yo tengo entendido que las afiliaciones se realizan por medio de cuatro fichas.

Sr. Belgrano Rawson. — Exactamente.

Sra. Valente de Pérez Tort. — Pero creo que no se ha establecido concretamente cómo deben ser distribuidas esas fichas. En mi concepto, estas fichas tienen que distribuirse en la siguiente forma: una para el juzgado electoral, una para la autoridad central del partido, otra para la autoridad parroquial y otra para el afiliado.

Sr. García. — Eso lo establece el estatuto.

Sr. Belgrano Rawson. — La inquietud de la señora diputada está aclarada en el propio despacho. El fichaje se hace en forma cuádruple. Una ficha constituye la credencial del propio afiliado; la segunda ficha va a integrar el fichero partidario; las otras dos se remiten a la justicia electoral a los efectos de que ella organice un fichero doble, uno por partido y otro general de ciudadanos afiliados a partidos.

Sra. Valente de Pérez Tort. — No veo por qué van dos fichas al juzgado electoral.

Sr. Belgrano Rawson. — Porque el juzgado electoral debe llevar un doble fichero. Lleva uno por partido y otro de ciudadanos afiliados a partidos. Este segundo fichero general, donde van las fichas de todas las personas que están afiliadas a partidos, sirve, precisamente, entre otras cosas, para controlar la existencia de la doble afiliación, de modo tal que cuando un ciudadano se afilia al partido A, estando afiliado al partido B, desaparece la ficha correspondiente a esta última afiliación y queda sólo la primera. El fichero de afiliados por partidos lo lleva a los efectos de la aplicación de otras normas, a las que me voy a referir, que de otra manera no tendrían viabilidad.

Establecemos algo que es novedoso: el padrón partidario. Este, que es la sistematización por orden alfabético de las fichas de los afiliados, debe ser confeccionado por los partidos y remitido al juzgado electoral con una anticipación adecuada a los procesos electorales internos. Pero establecemos una norma que es novedosa y que se da a los partidos políticos, de pedir a la justicia electoral que ese padrón sea confeccionado por la justicia y entregado por ella a los partidos. La finalidad de esta norma es muy clara. No hay proceso político interno en ningún partido político argentino, que yo conozca, al menos a través de la información periodística o de la experiencia de mi fuerza política, donde, enfrentados dos o más grupos de afiliados en un proceso interno, los perdedores no acusen de fraude en la confección de los padrones al grupo ganador. Prácticamente no hay proceso electoral donde esto no ocurra. Y la única forma de evitar en lo futuro este tipo de imputaciones, o bien la realización del fraude, si es que se hace, es que ese padrón sea confeccionado por la justicia, lo que le da entonces suficiente garantía de autenticidad.

Sr. Muñiz. — ¿Me permite una breve interrupción, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Que sea muy breve, porque me queda muy poco tiempo de la prórroga.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Sólo para decir al señor diputado que ese padrón va a ser de confección totalmente imposible porque los partidos tienen establecidos distintos recaudos para cada tipo de votación.

Por ejemplo, refiriéndome a mi partido que es, desde luego, el que conozco mejor, su carta orgánica establece ciertas antigüedades en la afiliación y, además, exigencias tan importantes como la de estar al día en el pago de las cotizaciones, aspectos ambos fundamentales en la vida interna de las agrupaciones políticas.

No sé cómo se las van a arreglar los jueces electorales para confeccionar padrones que deberán tener esos y otros datos de detalle, pero muy significativos en el orden democrático de los partidos.

El argumento del señor diputado impresiona, produce —como se dice ahora— un impacto, pero la realidad es que va a servir para confeccionar padrones de cualquier manera o, por lo menos, sin respetar las condiciones internas que exigen los distintos partidos políticos para que sus afiliados puedan votar.

Sr. Belgrano Rawson. — No voy a poder responder a esta inquietud del señor diputado Muñiz, porque no estamos en la discusión en particular, y deseo, antes de que se agote el tiempo, referirme a tres o cuatro normas más. De cualquier manera, en el tratamiento en

particular creo que podré demostrarle al señor diputado que está en un error y que aun ese tipo de previsiones se pueden tomar cuando los padrones sean confeccionados por la justicia, y no por los propios partidos.

En materia de elecciones internas, señalé ya que se dejaba librado a las cartas orgánicas el establecimiento del sistema, y se dispone que, a pedido de los partidos, la justicia podrá designar veedores en los actos electorales internos.

En el artículo 38 se establece qué personas no podrán ser candidatos en los partidos políticos. En realidad, se trata de una enumeración mínima de casos, la mayoría de las cuales ya no pueden ser candidatos en virtud de normas expresas de leyes reglamentarias de sus respectivas profesiones. Se establecen en el estatuto sanciones al fraude electoral interno. En otro capítulo se fija la documentación mínima a que deben ajustarse los partidos, la protección de la propaganda, la forma cómo debe llevarse el registro de los partidos.

Otro capítulo establece previsiones sobre el patrimonio partidario. Se determinan prohibiciones, es decir, se establece que según los orígenes no pueden ingresar a los partidos políticos ciertos dineros. Son todas normas, lo confieso, de muy difícil aplicación, pero de todas maneras con fines moralizadores. Se establece como un requisito fundamental que hace al sistema republicano de vida, la publicidad del manejo de los fondos.

Me he referido ya al sistema de franquicias y subsidios a los partidos políticos; lamentablemente, no puedo entrar en mayores detalles.

Se determinan las causas y los alcances de la caducidad y extinción de los partidos políticos como dos cosas distintas. En el primero de los casos, los partidos caducan pero mantienen su personalidad, digamos, en potencia; no la pierden totalmente; no pueden actuar como partidos en los procesos electorales mientras no se ajusten a ciertas normas del estatuto, pero mantienen su personalidad, tanto de derecho público como de derecho privado.

En el segundo caso, en cuanto a la extinción, el partido desaparece definitivamente, y por ahí se establece una norma en el sentido de que el nombre, la carta orgánica, y los emblemas, es decir, todo aquello que constituye el patrimonio espiritual, doctrinario y material de los partidos, no puede revivirse en otra fuerza política sino después que haya transcurrido un período de tiempo fijado en seis años.

En un largo capítulo se determina el procedimiento judicial, tanto en todo lo relacionado con la personería jurídica como con la vida de los partidos y su vinculación con la justicia. Se trata de normas básicas generales; los principios procesales están dados en un mínimo suficiente como para que la justicia electoral se pueda desenvolver en esta materia, y hacemos una remisión, en todo aquello que no está previsto, a las normas generales de derecho procesal.

Finalmente, hay un capítulo expreso relacionado con los partidos preexistentes, es decir, con los partidos que al momento de sancionarse este cuerpo legal tienen personería reconocida. Esos partidos, cumplidos algunos requisitos mínimos de adecuación a esta ley en discusión, mantienen subsistente su personería.

Sr. Catalán. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Belgrano Rawson. — Sí, señor diputado.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Catalán. — Desearía que el señor miembro informante diera la interpretación, en lo que respecta a los partidos preexistentes, sobre si aquellos partidos que no participaron en el último acto electoral, por causas vinculadas con las leyes represivas o algunas otras razones de fuerza mayor, pero que han llenado todos los requisitos legales prescritos por el estatuto de los partidos políticos del año 1962, y que actualmente tienen su personería en trámite —y específicamente me refiero al Partido Justicialista, cuyo pedido de personería está pendiente de dictamen del juez nacional electoral— esos partidos sólo deberán cumplimentar algún requisito exigido por este nuevo estatuto, o deberán iniciar una nueva tramitación como partido nuevo.

Entiendo que en el caso que he citado se trata de un partido preexistente que ya ha llenado todos los requisitos legales ante la justicia electoral nacional, y que, en todo caso, si le faltara algún requisito, podrá cumplimentarlo; pero debe ser considerado partido preexistente porque de otra manera sería un principio de desigualdad.

Sr. García. — Esa pregunta debiera reservarse para la discusión en particular.

Sr. Catalán. — He pedido una información porque la creo constructiva para la salud política del país.

Sr. García. — Desde luego, señor diputado.

Sr. Catalán. — Si el señor miembro informante cree conveniente dejar la respuesta para la consideración en particular, no tengo ningún reparo.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Sin perjuicio de ampliar la respuesta y discutir el tema en particular, le señalo al señor diputado Catalán que el artículo 86 es muy claro en su redacción: «Los partidos de distrito y nacionales y las confederaciones existentes y reconocidos a la fecha del comienzo de la vigencia de esta ley, conservarán su personalidad jurídico política...» La cláusula habla muy claramente de partidos de distrito y nacionales y de confederaciones que existan reconocidas a la fecha del comienzo de

la vigencia de la ley que habremos de sancionar.

Sr. Catalán. — Me reservo para hacer la aclaración pertinente en oportunidad del debate en particular.

Sr. Belgrano Rawson. — Así tiene que ser, señor diputado.

Sr. Muñiz. — Quiero aclarar al señor diputado Belgrano Rawson...

Sr. Presidente (Del Pero). — Señor diputado Belgrano Rawson: está a punto de expirar la próroga que le fue concedida.

Sr. Muñiz. — Ese es un estado de coma que va a durar largo rato. *(Risas.)*

El señor diputado Belgrano Rawson habló de los partidos que cumplan determinados requisitos. La expresión es un poco oscura, pero se aclara señalando que los partidos preexistentes a la fecha de la vigencia de esta ley deberán cumplir lo dispuesto en los títulos I, III, IV y V. Vale decir que a esos partidos, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86, no se les exige ni se les podrá exigir por nadie el cumplimiento de ninguno de los requisitos establecidos en el título II ni tampoco en los títulos VI a IX.

Yo no he hecho más que transcribir, para aclarar conceptos y satisfacer la inquietud del señor diputado Catalán, lo que dice la última parte del artículo 86, que es muy claro y preciso.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Evidentemente, este asunto deberá ser tratado en la discusión en particular, pero señalo otra vez, para que quede bien en claro, lo siguiente: se reconoce la preexistencia de aquellos partidos que al momento de entrar en vigor esta ley existían y están reconocidos, los que deberán cumplir determinados requisitos.

Además, aquí se establece una norma con relación a los partidos fusionados, existentes al momento de sancionarse esta ley. Es una norma de orden práctico que tiene su origen en planteamientos de algunos diputados respecto de casos concretos. En la discusión en particular nos referiremos a este asunto, pero quiero aclarar que al final del artículo 87, segunda parte, se dice que el partido fusionado gozará de todos los derechos, franquicias y beneficios legales y patrimoniales que le hubiese correspondido a cada uno de los partidos originarios. Pero esto no significa acumulación de derechos, franquicias y beneficios, sino que el conjunto de privilegios de cada uno de los partidos se reconoce al partido fusionado. Me voy a referir a un caso concreto. Si la ley otorga el uso de dos teléfonos gratuitos en la sede central de un partido, no quiere decir que el partido fusionado acumulará dos aparatos por cada uno de los partidos que lo conformen.

Razones de tiempo me han hecho hacer un informe muy deshilvando y quizás excesivamente objetivo. He querido reservar todo lo que fuera el pensamiento de mi partido político y del bloque de diputados que integro, e incluso el propio, para la discusión en particular, a fin de introducir el tema en la Cámara en un nivel de debate que nos permita apartarnos un poco de la pasión e ir a la discusión concreta de la ley que en este momento entramos a considerar.

Yo creo —repetiendo algunas palabras dichas al comienzo de mi exposición— que este despacho, que es de mayoría en su esencia y en el gran número de sus artículos, aunque tenga algunas disidencias parciales de los distintos sectores, va a contribuir a la paz política y social de la República.

Como lo hemos dicho en el informe escrito, este estatuto, tal cual está proyectado, no encierra trampa política alguna ni contiene segundas intenciones ocultas. La finalidad clara en su redacción ha sido dar a los partidos políticos de la República un instrumento adecuado para su institucionalización. Quede bien entendido también que aquellos partidos políticos que no quieran ajustarse a los requisitos mínimos de la convivencia democrática, no podrán entrar en las normas de este estatuto, ni hacer limpiamente el juego político con el resto de los partidos políticos argentinos.

Concluyo, señor presidente, haciendo una invocación. Anhelamos que cuando este proyecto de ley sea sancionado después de una elevada y meticulosa discusión, y cuando él se aplique por primera vez en los comicios de marzo, de ahí para adelante y por muchos años sirva para fortalecer a la democracia argentina (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Grau.

Sr. Grau. — En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo adhiero al dictamen de la mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia, dictamen que acaba de informar el señor diputado Belgrano Rawson.

Tendría que repetir algunos de los conceptos del señor miembro informante para destacar cuál es la importancia de la tramitación de este estatuto, a través de las consultas formuladas en el Ministerio del Interior y en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para poder afirmar que este estatuto, por encima de los defectos de su redacción o por encima de aquello que no hace al fondo del problema, tiene para nosotros un valor histórico, porque representa un estado de opinión que recoge las inquietudes y las aspiraciones de los sectores pertenecientes a los partidos políticos representados en esta Honorable Cámara.

Debo también manifestar que sería una tarea ilusoria si confiáramos exclusivamente en la bondad de este estatuto como instrumento político para cumplir un fin determinado. Entendemos que las instituciones son buenas en la medida en que los hombres no dejan de serlo. Pero yo debo señalar que este estatuto surge en momentos propicios para la vida política de la República, después de muchos años de desencuentro, como un factor de conciliación y de pacificación nacional.

También advierto que así como el estatuto por sí mismo no ha de cumplir esa finalidad, tampoco lo ha de lograr la buena fe o la buena voluntad de sus intérpretes. Es menester requerir que en un país, para que un estatuto político sea bueno, tampoco deje de serlo el régimen democrático en el que los partidos políticos deben actuar; de tal manera que en la vigencia del régimen democrático está insita la virtud de los partidos, y a través también de los partidos conseguiremos forjar al hombre político tal como nosotros lo pretendemos y anhelamos. Esto último sólo puede darse con la existencia de partidos políticos orgánicos, para que en esa forma y en un medio democrático aquél pueda cumplir con la elevada misión de defender nuestras instituciones y afianzar los ideales de libertad por los que brega.

No concebimos la existencia de un partido político en un régimen autocrático o totalitario, de manera tal que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que para que existan partidos políticos, debe haber un régimen democrático, con libertad absoluta para opinar, con ejercicio pleno de los derechos de reunión, de asociación y de todos los que atañen a la actividad cívica del hombre.

Nuestra democracia es una democracia de partidos políticos, principio reconocido prácticamente en todos los países en que los partidos políticos son considerados como las bases fundamentales en que aquel régimen se sustenta.

Es un fenómeno que surge en el siglo XIX, propio del estado constitucional. Es indudable que han existido antes tendencias, comunidad de opiniones, pero que más tenían el carácter de facciones que de partidos políticos; enfrentamientos no siempre con el carácter cívico que hoy tienen, sino más bien con los caracteres propios de una guerra civil, como se ha expresado por ahí.

Sin perjuicio de que los partidos políticos no hayan abandonado totalmente ese espíritu combativo, podemos decir, en homenaje a las prácticas de nuestra vida democrática, que si bien se reconoce en la mayoría a un vencedor, también se reconocen siempre los derechos de quienes, sin ser vencidos, ejercen el legítimo derecho que se acuerda a las minorías.

En la evolución de los partidos políticos tenemos que partir de épocas en que se les juzgaba con alguna hostilidad. Eran épocas de

prevención y de repudio, donde se citan también frases de hombres célebres que abominaban de los partidos políticos, a los que consideraban perjudiciales para la democracia y que creían que era la causa de todos sus males. También se les llegó a suprimir por algún gobernante en aras de la tranquilidad y de la paz de su respectivo territorio.

Pero hoy los partidos políticos han ganado la voluntad de la opinión pública, y se debe destacar a este respecto la función que ellos mismos han ejercido por propia gravitación. No es menos cierta también la influencia que han tenido no sólo los políticos, sino también nuestros tratadistas, nuestros estudiosos de la ciencia política y todos aquellos que, aunque más no fuera en una forma teórica o doctrinaria, han conseguido despejar el campo de la incompreensión y de la ignorancia para que los partidos puedan cumplir con su elevada misión dentro de una democracia.

Llegamos así a una etapa en que podemos afirmar que los partidos políticos no sólo son instrumentos, sino verdaderos órganos de gobierno en el Estado moderno.

Repito que para que subsistan los partidos políticos es necesario que tengan el ambiente y el clima adecuado. Como decía un autor, «los partidos políticos se muestran en todas partes en donde la vida política está desarrollada libremente. Desaparecen solamente en los pueblos perezosamente indiferentes por los asuntos públicos u oprimidos por un poder violento. Su ausencia es entonces un signo de incapacidad o de opresión.» (J. G. Bluntschli —*La Politique*— citado por Linares Quintana.)

Agrega ese autor que «Es el esfuerzo y la rivalidad de los partidos lo que engendra las mejores instituciones políticas y que estimula la riqueza de las fuerzas latentes de la Nación. No debe creerse, entonces, como ciertos espíritus tímidos, que los partidos son una debilidad o una enfermedad del Estado moderno. Son, por el contrario, la condición y el signo de una vida política fuerte. No pertenecer a ningún partido político no es de ninguna manera una virtud del ciudadano».

En esta evolución destaco la importancia que adquiere en nuestra vida democrática el carácter de las multitudes que han pasado de espectadoras a ser actrices del proceso electoral. Estamos muy lejos de aquellas sencillas sociedades primitivas, y hoy nos encontramos frente a una sociedad de masas en que la democracia minoritaria del liberalismo ha dado paso a esta democracia masiva que nos da también este espécimen de la nueva sociedad: el hombre masa.

Es indudable que ha contribuido a esta evolución la aceptación por casi todos los países democráticos del sufragio universal, como también el auge del propio parlamentarismo; pero no es menos cierto que la acción que deben desarrollar los partidos políticos en un medio

tan complejo como éste se hace mucho más difícil aún.

En una sociedad moderna actúan múltiples factores. En nuestro propio país vemos el desplazamiento del hombre de campo hacia la ciudad, la gran concentración, el reemplazo de nuestra economía artesanal por una economía industrial, el desarraigo del hombre alejado de su familia, de su provincia, del lugar en que naciera o donde conserva sus afectos, que lo ha convertido en un ser errante en nuestras grandes ciudades, en el «hombre-masa», concepto que no tiene solamente un carácter económico, porque no pertenece solamente al sector del proletariado sino a todos los sectores de la sociedad, en la que el hombre no actúa con discernimiento y voluntad frente a las grandes decisiones de la política nacional. Es por ello entonces que la tarea de los partidos políticos se complica. Es necesario, si cabe el término, «desmasificar» a ese hombre para que actúe por propia decisión y para que se libere de la presión de todos los factores económicos, sociales y tecnológicos que obran sobre su conciencia y sobre su espíritu, atrapándolo y quitándole libertad para realizar su destino dentro de esa sociedad.

No creemos que los partidos vayan a surgir de un estatuto. A veces pensamos que el estatuto tiene una importancia relativa. Bien se ha dicho que los partidos políticos no se crean por decreto; surgen por múltiples razones históricas y sociológicas y son el producto de una larga y lenta elaboración. Pero han adquirido tal importancia que fácil es advertir que lo que llamamos a veces la soberanía del pueblo, bien podríamos definirla como la soberanía de los partidos políticos. Por eso un conocido autor, Duverger, en su difundida obra *Los partidos políticos* —página 449— afirma con gran razón que hay que sustituir la fórmula «gobierno del pueblo por el pueblo» por la de «gobierno del pueblo por una élite salida del pueblo».

No deja de ser cierta, tampoco, la afirmación de quienes ven en este tipo de representación algo así como una ficción, por cuanto los legisladores no representan al pueblo, sino a los partidos políticos, que los designan a través de actos eleccionarios. Pero si ello puede significar apenas una ficción, no puede constituir jamás una farsa: los partidos políticos desarrollan sus actividades dentro de la sociedad, recogen las inquietudes y las aspiraciones del pueblo y las transforman en los ideales que vuelcan en sus plataformas, en sus bases de acción política o en sus programas; de tal manera que los representantes del pueblo, al hacerse intérpretes de los principios que sustentan sus partidos políticos, indirectamente están interpretando también a ese mismo pueblo. Y tal es la necesidad de encauzar a la opinión pública a través de los partidos políticos, que aun los gobiernos totalitarios que no los tienen los crean, y se valen,

aunque más no sea del partido único, para encauzar a su favor la opinión pública de sus respectivos países.

Mucho se ha criticado a los partidos políticos diciendo que dividen a la sociedad; que llevan a la función de gobierno todos los defectos de su propia vida interna; que crean pasiones y antagonismos dentro de la sociedad; que parcializan la opinión pública, y que responden a un estado de evolución que mañana puede ser superado. Pero también muchas son las virtudes y los méritos que se les conceden. Debemos pensar que los partidos políticos son los reductos en los que se refugia el hombre en salvaguardia de su libertad, contra el autoritarismo, contra el cesarismo de sus gobernantes.

Debemos también decir que son la expresión de todas las ideas y tendencias de una sociedad; en una palabra: que sin los partidos políticos no podrían jamás canalizarse en una acción de gobierno ninguna de las inquietudes o de las ambiciones de ningún sector del pueblo en ningún país del mundo.

Pero es claro también que a veces los partidos políticos fracasan, que sus organizaciones internas, severas y rígidas, no responden sino a conceptos totalitarios de sus dirigentes, y debemos pensar, para que los partidos políticos no se malogren, en que hay que empezar por reclamar una conducta moral a esos dirigentes y, a su vez, una organización democrática a las agrupaciones, para que sean escuelas de civismo y para que sus tribunas, en la función de esclarecer la conciencia ciudadana, tengan algo de la dignidad de la cátedra.

¿Qué pasaría, señor presidente, si no existieran partidos políticos? ¿Cómo concurrirían los ciudadanos a los comicios? ¿Cómo haría un ciudadano para ponerse en contacto con otros ciudadanos que piensan igual que él con el fin de encauzar su acción cívica? Bastaría por un instante pensar en la importancia que este estatuto confiere a los partidos políticos como entes encargados de formular y realizar la política nacional, y de tener el privilegio exclusivo de designar a los candidatos para los cargos públicos electivos, para meditar y reflexionar un poco sobre la importancia que ellos están adquiriendo en el Estado moderno.

Esa responsabilidad, que nosotros la vemos a través de todas las etapas del proceso electoral, obliga no sólo a los partidos políticos que llegan al gobierno, sino también alcanza a los partidos políticos que actúan en la oposición. Bien ha dicho Bielsa, para el caso, que la «ética partidaria, con el advenimiento al poder se convierte en ética de gobierno». Y todos los partidos políticos, mayoritarios y minoritarios, tienen la inexcusable misión de llevar a la práctica y de concretar en obras de gobierno aquellos actos o puntos de sus planes sobre los que han sido coincidentes, sin perjuicio del derecho de crítica

que se le acuerda a los últimos, como opositores de la fuerza que está en el gobierno.

Recién se ha referido el señor miembro informante a los sistemas de partidos políticos de acuerdo a las agrupaciones que éstos admiten, de modo que no me voy a detener en ello. Si voy a decir que los problemas que surgen del pluripartidismo, del bipartidismo y del unipartidismo responden a factores propios de cada país y también a otros que adquieren un carácter general. Influyen en la adopción de un sistema político las costumbres de un país, los problemas étnicos o religiosos, las cuestiones económicas o sociales, etcétera. Podríamos decir, en términos generales, que un sistema de simple pluralidad daría, teóricamente, lugar a la adopción de un régimen dualista, y un sistema proporcional a un régimen de partidos múltiples.

La experiencia nos demuestra que a veces el sistema de pluralidad nos lleva a la multiplicidad de partidos, aunque también debemos reconocer que factores ajenos al sistema actúan sobre él, y que el de la proporcionalidad desemboca en corrientes de opinión en las cuales se aglutinan distintas fuerzas, aparentemente, diríamos, como una paradoja, y se obtiene así por medio del sistema proporcional lo que no se puede conseguir por el de la pluralidad.

El partido único no ofrece materia para nuestra exposición, porque no es propio del régimen democrático, no actúa donde hay libertad de palabra o de pensamiento y está protegido simplemente por la acción del gobierno, que se vale de él para sus designios.

Estos partidos prosperan en los lugares en que se sustituye el diálogo por el monólogo y responden a las características propias de cada país. Los hemos visto en Italia y Alemania, los vemos en Portugal y España, y podría advertir también que los alcanzamos a percibir en algunos países recientemente independizados, como es el caso de Argelia.

Son partidos en los que se identifica su propia doctrina con la doctrina nacional y los regímenes que los auspician no aceptan la menor discrepancia o disidencia. Se debe sostener y sustentar esa doctrina en todo tiempo y lugar a través del partido único.

El partido único estuvo en su apogeo en el lapso que transcurrió entre las dos guerras, época en que la democracia cedió ante el totalitarismo. Un autor, Mario Justo López, profesor de derecho político, en un artículo publicado en «Jurisprudencia Argentina» el 3 de abril de 1963, nos habla al respecto del fenómeno denominado el «fin de las ideologías», como una reacción contra toda doctrina de base racional. Es la posición adoptada después de la primera guerra por los discípulos de George Sorel y Charles Maurras, apologistas de la violencia: habían recogido sus mitos y pretendieron con ello conquistar a sus pueblos, despertando la pasión

militante, la fe y la confianza a través de esos mitos que los gobiernos de esos pueblos consideraban valores irremplazables o insustituibles: el Estado para el fascismo, la raza para el nacional-socialismo. En ese ámbito, no podemos nosotros hablar de partidos políticos.

En nuestro propio país, un autor y periodista, José P. Barreiro, en su libro *El espíritu de Mayo y el revisionismo histórico*, nos habla de la repercusión que tuvieron en estas tierras aquellas ideas, y cita el caso, muy singular por cierto, del insigne poeta nuestro, gloria de las letras argentinas, Leopoldo Lugones, en quien él advierte una de las primeras expresiones de esta actividad, que denomina heterodoxa, al adoptar una postura beligerante contra nuestras instituciones democráticas, en conocidas conferencias que pronunciara en el Coliseo de Buenos Aires en el año 1923.

Nos dice el mismo Barreiro que Francisco Nitti, varias veces ministro de Italia, también había advertido este mismo fenómeno en otras latitudes del mundo. Según Barreiro, Nitti afirmaba: «Las acusaciones suelen ser las mismas. La democracia es el electoralismo y el parlamentarismo, es decir, el individualismo disgregante que determina el prevalecimiento de los mediocres, el triunfo de la incompetencia, el derroche en los gastos públicos, la demagogia que rebaja el carácter, el predominio de la riqueza como medio de superación.»

Se alentaba así, señor presidente, en esa etapa de la vida del mundo, a la violencia en todas sus formas. La democracia declinaba y se debilitaban los partidos políticos. Pero frente a este fenómeno surge un problema importante. Y es el siguiente: ¿Con la desaparición de los partidos políticos desaparecería la política? Desde que «el hombre es un animal político», nos dice un autor, sólo modificando su naturaleza y la de la sociedad podría ocurrir este hecho. Es el mismo profesor Mario Justo López, quien agrega: «Lo normal es la política, es decir, la actividad que crea, que planea, que integra, que conduce. Lo anormal es la falta de actividad. Lo anormal no es el poder, sino la falta de poder. Lo anormal se convierte en crisis cuando esa falta y ese vacío se hacen totales, y corre peligro la existencia misma de la comunidad, pues si es cierto que no hay política sin comunidad, también lo es de que no hay comunidad sin política.»

Y dice más adelante: «Esa actividad creadora, planeadora, integradora, directora y conductora que es la política necesita ser organizada por alguien. En todo tiempo y bajo todo régimen los políticos han sido los protagonistas de la política, y como esta actividad es colectiva, se ha operado a través de la creación y de la actuación de los partidos políticos.»

Por eso en la actividad de los partidos políticos debemos distinguir dos elementos: uno

ideológico, que hace a la comunidad de ideales; el otro práctico, que hace al propósito de alcanzar el poder, que es propio de todo partido político. O dicho en otros términos y con otros autores: una faz arquitectónica —creadora y constructora— y otra faz agonal —de polémica, de lucha—.

Este tema de los partidos políticos nos lleva al problema de la representación política, porque los partidos políticos surgen con el constitucionalismo conforme al sistema representativo que lo fundamenta. El sistema de la representación política es propio de nuestra democracia representativa. Como doctrina, podemos recordar, al pasar, que su primer enunciador fue el abate Sieyès, que la desarrolló en su obra *¿Qué es el tercer Estado?*

Ya se dijo recién que nuestra democracia es representativa, indirecta, y lo establece así el artículo 19 de la Constitución Nacional. La democracia directa de la antigüedad griega y de otros Estados no sería posible aplicarla hoy por múltiples razones a las que no me voy a referir. De tal manera que dentro de esta democracia representativa tenemos que pensar en la figura del mandato representativo que se origina en ella, frente al mandato imperativo, propio de la Edad Media y de alguna época posterior. El vínculo entre representantes y representados dentro de este esquema, es precisamente el sufragio. Todos estos son factores que actúan de consuno en un régimen democrático.

Al hablar de democracia tenemos que hablar de partidos políticos, de régimen electoral, de sufragio, de parlamento, etcétera. ¿Qué importancia tiene el sufragio? El profesor Carlos S. Fayt, en su obra *Sufragio y representación política*, al hablarnos del tema reconoce que con el sufragio universal se amplió, es decir, se afianzó el sentido democrático de esta representación, que tenía el carácter de un privilegio con el sufragio censitario que hacía gravitar el factor patrimonial. Y así nos dice que al suprimirse el censo y universalizarse el sufragio «la representación recobraba su esencia democrática y que no obstante la diversidad de opiniones y de intereses, la asamblea legislativa, al decidir en instancia suprema sobre la formulación de la ley, expresa la unidad de la comunidad política».

Este es un hecho que tampoco podemos pasar por alto, porque en el debate sobre todos estos problemas, dentro de nuestro régimen representativo, las diferencias se reducen y la acción de los partidos políticos y las discusiones en este Parlamento, así como los actos electorales, van, con sus fricciones y antagonismos, disminuyendo todas estas discrepancias para poder lograr, de alguna u otra manera, el objetivo, que es, al fin y al cabo, el ideal de la comunidad.

Es cierto y lo repito que, como han dicho muchos, como Kelsen, este sistema de la represen-

tación en parte es una ficción, aunque el propio Kelsen reconoce que la nuestra es una democracia de partidos políticos, y dice que «sólo por ofuscación o dolo puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos políticos». Pero no deja de tener razón en este aspecto, como lo advertimos a través de la evolución que vengo señalando, en que del mandato imperativo pasamos al mandato representativo o libre.

Pero ¿qué es lo que ocurre? De aquella época en que el representante tenía que atenerse a las instrucciones que su mandante le daba, en sus cuadernos o *cahiers*, a la época actual, ha pasado mucho tiempo. La propia Revolución Francesa se había encargado de modificar el sentido de esta representación para que los representantes no representaran a un sector a través de un mandato imperativo, sino a toda la comunidad a través de ese mandato representativo. Y ahora se produce el fenómeno inverso: los representantes ajustan su cometido a lo que constituye el programa o plataforma de su partido y actúan, dentro de este recinto, a través de los bloques. Nosotros llegamos a un instante en que los bloques son reconocidos, institucionalizados y tienen vigencia dentro del régimen parlamentario actual.

Italo A. Luder, en un trabajo publicado en «La Ley» del 14 de octubre de 1958, que titula «Sociología del Parlamento», con respecto a los bloques emite conceptos que no necesitan comentario alguno: «Se entiende por bloque legislativo al conjunto de parlamentarios que pertenecen a un mismo partido político o a partidos políticos afines que forman una coalición; se da su propio reglamento, elige sus autoridades, tiene facultades disciplinarias sobre sus miembros y maneja recursos económicos propios. El proceso de formación y consolidación, a través del tiempo, de los bloques legislativos o grupos políticos en el Parlamento, es paralelo al de los partidos políticos en el proceso electoral y en sus relaciones con el Estado.»

Y al historiar la institución, agrega: «En los comienzos de la tercera república francesa, recuerda Arrighi —se refiere a Pascual Arrighi en su libro *Le statut des partis politiques*—, los grupos políticos en el Parlamento eran desconocidos oficialmente, hasta el punto que les estaba prohibido reunirse en el palacio del Parlamento. Tampoco intervenían en el debate parlamentario. Brisson, que fue varias veces presidente de la asamblea hacia fines del siglo XIX, prohibía a los diputados hablar en nombre de un grupo político y sólo podían hacerlo a título personal. En la actualidad estos grupos políticos han terminado por imponerse y constituyen la forma de organización de los partidos en el Parlamento, cuyo control está en manos de las comisiones directivas de los bloques legislativos que imprimen el ritmo al trabajo reglamentario».

Paso por alto un capítulo de mi exposición con el fin de abreviar. Se refiere a la acción que ejercen los grupos de presión y su incidencia sobre los partidos.

Todos sabemos en qué consisten, cómo actúan, tanto en los países americanos como europeos, al margen y a través de los distintos partidos políticos. Y podríamos decir, en síntesis, que mientras ellos defienden intereses particulares, los partidos políticos se sobreponen a todas las parcialidades para estar al servicio de uno solo que es el de la comunidad.

En esta evolución de los partidos políticos reconocemos la actividad que ellos desarrollaron al margen de la Constitución y de la ley. Eran entes extraconstitucionales, podríamos afirmar, incorporados a la Constitución real, pero no a la Constitución formal o escrita. Pero uno de los países que lo incorpora con mayor amplitud a su texto constitucional es la República Oriental del Uruguay, que llega a institucionalizar hasta las luchas internas de los partidos políticos, contemplando el régimen de lemas.

Ya ha dicho el señor diputado Belgrano Rawson que en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional encontramos la fuente, diríamos, creadora de este derecho a asociarnos que conforma a nuestros partidos políticos. A partir de la primera guerra mundial comienza a imponerse en el mundo la tendencia llamada de «racionalización del poder», que, como dice un autor, consiste en someter al derecho todo el conjunto de la vida colectiva. Y no podía escapar a este proceso el de introducir a los partidos políticos en el derecho público de los países.

Es notable advertir cómo aquellos países que más sufrieron las influencias de los partidos únicos, consecuencia de los gobiernos autocráticos o totalitarios, como Alemania Occidental, Francia, Italia y otros por reflejo o directamente, han incorporado a sus constituciones disposiciones claras y precisas para el reconocimiento de los partidos políticos. No menciono el caso de la Unión Soviética, cuya constitución, por tratarse de un país que responde a una concepción filosófica ajena a nuestro pensamiento democrático, y en este caso responde al régimen adoptado, impone el partido único.

Repito, señor presidente, que si bien las Constituciones anteriores a esta etapa no legislaban sobre los partidos políticos, ellos actuaban y cumplían su misión en la misma medida en que lo hacen actualmente. La propia Constitución Argentina y la norteamericana no tienen al respecto nada más que los términos imprecisos del derecho de asociación. Pero en la actualidad la institución de los partidos políticos la tenemos en nuestro país incorporada en el derecho público provincial, puesto que las nuevas constituciones últimamente sancionadas incorporaron cláusulas sobre los partidos políticos; tales la Constitución del Chaco, en su artículo 85; la del Neuquén, en su artículo 82; la de Santa Cruz,

en su artículo 79; la de Chubut, en el artículo 242, y la de Corrientes, en el artículo 180.

Sin embargo, aclaro que los partidos políticos no son una creación de la ley, sino que derivan de un derecho inalienable del pueblo, de manera tal que la ley no hace otra cosa que reconocer de derecho lo que de hecho ya estaba ejerciendo el pueblo.

En nuestro país se da una vinculación que ya me anticipó a formular, entre la existencia de los partidos políticos y el régimen electoral, cuya importancia deriva de ser un factor de estabilidad política. Bien se puede afirmar que desde los años primeros de nuestra Independencia se han ensayado todos los regímenes electorales conocidos. Desde la primera elección, que tuvo lugar en el país en abril de 1812, para elegir en elección de segundo grado diputados a la Asamblea Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por el sistema de simple mayoría, todos los sistemas se han conocido y practicado. Como ilustrativo antecedente, y a título simplemente informativo, citó la ley que sancionó la Junta de Representantes de Buenos Aires en 1821, instaurando el sufragio universal, por inspiración de Rivadavia, por primera vez en América del Sur.

Sancionada la Constitución de 1853, se planteó el problema de la simple pluralidad de que habla el artículo 37, problema superado ya, y a través de sucesivas leyes se fueron formulando las bases para la representación numérica de los diputados en los períodos de renovación. En síntesis, el sistema de mayoría relativa, de lista completa, de voto público y no obligatorio, rigió hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, salvo el paréntesis de 1902, en que se aplicó el sistema uninominal o por circunscripciones, en que cada elector votaba por un candidato a diputado.

Quiero detenerme por unos instantes para señalar un hecho importante en esta evolución. Es la sanción de la ley Sáenz Peña, el 13 de febrero de 1912, que incorpora al mecanismo institucional el voto universal, secreto y obligatorio, sobre la base del padrón militar, y que aplica el sistema de la lista incompleta. Me detengo aquí para hacer la misma apreciación que hizo el señor miembro informante de la mayoría, porque es indudable que si a través del espíritu de los inspiradores de esta ley y de quienes la defendieron en el Parlamento de aquel entonces, se tendía con ella a formar dos o mas partidos, muy pocos, por cierto, homogéneos y orgánicos, la práctica nos ha demostrado lo contrario, pero por razones que escapan a los méritos de la ley y por factores adversos que han gravitado sobre ella, por lo que podemos decir, a cincuenta años de la aprobación de esa ley, que existen más partidos políticos que los que había a la época de su sanción.

Es así como, después de haberse ensayado posteriormente, en 1951, por ley 14.032, el sistema de la elección por circunscripciones o uninominal, prácticamente aplicamos por primera vez

en el orden nacional el régimen proporcional D'Hont por decreto 3.838, en la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes para la convención que se reunió en Santa Fe en 1957. Y es el mismo sistema por el cual se realizaron las elecciones del 7 de julio de 1963, de acuerdo al decreto de convocatorias 3.284, del 2 de mayo de 1963, que aplicó las normas generales del decreto 260 del mismo año, que a su vez se remite al régimen proporcional establecido por decreto 7.164/62. El sistema aplicado entonces da la actual composición de este Parlamento. De una planilla que tengo sobre mi banca, sólo concretaré como síntesis que su número llega a 192 señores diputados pertenecientes a 24 partidos, que se han agrupado a su vez en bloques dentro de este recinto.

En rápida síntesis puede afirmarse que en nuestro país, como en otros, la trayectoria de la Nación es la de los partidos políticos. Desde el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 encontramos la imagen real del país a través de la imagen de los partidos políticos. La lucha entre morenistas y saavedristas, entre federales y unitarios; la lucha contra Rosas que nos da la Constitución del 53; las de Mitre y Sarmiento a la cabeza de los liberales contra los federales de Urquiza; los matices de la lucha entre los propios liberales, son etapas de la historia del país, que no podemos ignorar.

Tampoco puedo dejar de referirme a la existencia de ese conglomerado que rodeaba a los caudillos al margen de los partidos políticos y que también algo representaron en la vida del país. ¿Qué representan los caudillos en nuestro país? ¿Qué vinculación tienen con los partidos políticos? ¿Es que hay una desconexión total y los partidos políticos son una creación legal contemporánea? La opinión de Roque Sáenz Peña es ilustrativa al respecto. Señala Sáenz Peña que: «Los caudillos de la Independencia y hasta los de la anarquía eran hombres programas, porque cada uno encarnaba una aspiración general y son por eso sus partidos concentraciones tan orgánicas como lo permitían los días confusos y la cultura incipiente», y agregaba estos hermosos conceptos: «En la misma tienda errante de algún montonero se descubriría la crisis de un espíritu insomne de trascendentes ideales políticos.»

Para que no se aprecie con parcialidad este concepto me voy a permitir leer un párrafo perteneciente a José Luis Romero extraído de su libro *Las ideas políticas en la Argentina*, que dice: «Sin duda, los caudillos perpetuaron a su manera, el sentimiento republicano. Pero, en casi todos los casos, representaron una reacción antiliberal, manifestada, sobre todo, en el desprecio por las formas racionales de la delegación del poder. El caudillo se sentía ¡hombre representativo!, y así lo sentían también, en muchos casos, las masas que lo apoyaban. Pero nada, sino la intuición inmediata,

podía justificar la delegación de la soberanía popular en tales mandatarios, porque se subestimaron los mecanismos institucionales que hubieran podido servir para tal fin. Por eso, aunque en algunos casos estuviera efectivamente respaldada por la adhesión popular, la autoridad de los caudillos fue siempre de hecho, y su política siempre autoritaria y de corte prealista! en el sentido técnico del vocablo. Es innegable que había en el fondo de esta actitud de las masas y de sus jefes un profundo amor a la libertad primitiva y cierto radical sentimiento democrático; pero no es menos cierto que el ejercicio de esa democracia inorgánica y el goce de esa libertad sin freno no ofrecía garantía alguna como régimen permanente. Los caudillos que fueron bandera de legítimas reivindicaciones populares se tornaron bien pronto en usufructuarios ilegítimos del poder y defendieron sus privilegios con bárbara energía. Tenía razón Estrada cuando decía: «Las muchedumbres argentinas han exaltado la barbarie por exaltar la democracia y por amor a la libertad han soportado las tiranías.»

Después de 1890 podría citar la acción de radicales y conservadores y también referirme a la formación de nuevos partidos políticos, como el socialismo de Juan B. Justo y la democracia progresista de Lisandro de la Torre, y algunos núcleos del conservadorismo en distintas provincias, que hoy constituyen la Federación de Partidos de Centro. Después de 1955 habría que hablar de los sectores peronistas y de la democracia cristiana para tener, como dije al principio, una imagen real de la historia del país.

Pero dejaré de lado estos aspectos históricos para constreñirme al máximo al tema, dentro del tiempo establecido. Debo afirmar con respecto a este problema del ordenamiento de los partidos políticos que ya nadie discute su necesidad por la importancia que ellos han adquirido, y que el Estado no puede permanecer indiferente frente a sus actividades. Podríamos decir con José Nicolás Matienzo en sus *Lecciones de derecho constitucional* que «es menester comenzar por el principio, organizar republicánamente los partidos para organizar republicánamente la Nación». Pero las reglamentaciones no deben interferir en la vida interna de los partidos, no deben ir más allá de lo necesario, aunque debemos confesar que establecer sus límites es una tarea difícil. Lo es por una parte por el afán de respetar esa libertad y lo es también por una natural resistencia de los partidos políticos, tal vez por el culto a una tradicional indisciplina, como también —por qué negarlo— porque muchas veces sus afiliados han sido víctimas de la persecución y el temor sigue campeando en sus espíritus.

Por eso nuestra decisión al sancionar esta reglamentación tenderá nada más que a dar las

normas esenciales que garanticen a la sociedad contra la acción nefasta de los partidos políticos y que también preserven a los partidos políticos contra la que puedan ejercer sobre ellos, factores gravitantes dentro de la misma sociedad. Ya antes de ahora la Corte Suprema de Justicia, en un conocido fallo recaído en el caso planteado por el partido obrero de la Capital Federal el 27 de junio de 1962, reconoció al Estado el derecho a reglamentar la actividad de los partidos políticos, afirmando que el ejercicio de un derecho no es ilimitado, porque sería una concepción antisocial, que los derechos no son absolutos y que son necesarias limitaciones y restricciones, y nos dice con gran razón, refiriéndose a los partidos políticos, que han llegado a convertirse en órganos de la democracia representativa y menciona el artículo 2º del decreto ley 19.049/56, entonces en vigencia.

«De lo que los partidos son —dice el fallo— depende en gran medida lo que ha de ser la democracia en el país en que actúan. Al reglamentarlos, pues, el Estado democrático cuida una de las piezas principales y más sensibles de su complejo mecanismo vital.» La Corte reconoce entonces la intervención que le corresponde al Estado en la reglamentación de los partidos, pero aplica lo que llama reglas de razonabilidad.

«Establecido que ellos —los partidos subversivos— ponen en peligro la subsistencia del estado democrático, una solución que no fuera la prohibitiva equivaldría a resolver que para no impedir a algunos una actividad particular es lícito crear el riesgo grave de que desaparezca la genérica libertad de todos.»

De modo tal que el Estado, al reglamentar el ejercicio de la actividad de los partidos políticos, no hace nada más que ejercer una actividad referida a su poder de policía, que podríamos definir con Joaquín V. González como la «potestad de restringir la libertad de los individuos con el fin de conservar la armonía de todos y establecer reglas de buena conducta calculadas para evitar conflictos entre ellos». Pero esto con las limitaciones establecidas en el artículo 28 de la Constitución Nacional. No se nos escapa tampoco que en este caso el ejercicio de este poder de policía ofrece muchas dificultades, por una parte por el deseo de que esa intervención no signifique intromisión y, por otra parte, por la naturaleza e importancia de las instituciones que estas reglamentaciones deben regir.

La legislación sobre partidos políticos es en nuestro país prácticamente nueva. Los antecedentes, que he estudiado, en la práctica no han tenido aplicación. No la tuvo el decreto del 4 de agosto de 1931, ni el proyecto, muy valioso por cierto, de una comisión redactora integrada por los doctores Benjamín Villegas Basavilbaso, Rodolfo Medina y José Manuel Astigueta, que actuó con la secretaría del doctor Segundo Li-

nares Quintana, que sufrió modificaciones inmediatas y luego fue derogado. La ley 13.645, dictada en 1949, sin entrar a hacer su comentario, debo decir que no llenó la función que un reglamento debe cumplir dentro de nuestro derecho de establecer normas objetivas e imparciales con respecto al funcionamiento de los partidos políticos. Si tuvo en cambio alguna vigencia el decreto ley 19.044, del año 1956, dictado por el gobierno de la Revolución Libertadora, que dio lugar, con el reconocimiento de las fracciones o de las corrientes de opinión de los partidos políticos, a muchas divisiones mediante su aceptación con el requisito de un adiutamiento al nombre originario. Por último puedo citar, para hacer una enumeración completa, el decreto 7.162, del 24 de julio de 1962, que lleva la firma del doctor Guido, y que fue refrendado por el ministro del Interior doctor Adrogue, y el decreto 12.530, del 19 de noviembre de 1962, que es el que está en vigencia, que lleva la firma del mismo presidente de facto, y que está refrendado por los doctores Rodolfo Martínez y José M. Astigueta.

Después de esta rápida enumeración de antecedentes no voy a entrar a hablar del proyecto. Suprimo este capítulo de mi exposición para poder colocarme dentro de lo resuelto en cuanto al término de los discursos, para el mejor ordenamiento de este debate. A esto se ha referido con amplitud el señor miembro informante de la mayoría.

Destacaré solamente que una de las finalidades de este proyecto, como lo ha expresado el Poder Ejecutivo en su mensaje, es lograr la formación de partidos fuertes, orgánicos y de profunda raigambre democrática. Es también consolidar un sistema de partidos políticos que cumplan su misión de instrumentos de la democracia en forma permanente y no sólo en ocasión de cada proceso electoral.

Volveré, si es necesario, sobre algunos aspectos de este proyecto en la discusión en particular. Para terminar, sólo voy a decir que es nuestra aspiración, que ha reunido la voluntad mayoritaria generosamente expresada de los bloques que componen este Parlamento, que esta ley sea un instrumento de concordia, de armonía y de pacificación nacional. Libre de todas prevenciones y de todo prejuicio, ha sido elaborada con un alto sentido democrático y afirmo con énfasis que no contiene proscripciones para ningún partido político en particular, pero que las contiene para todos mientras no se ajusten a las normas de este estatuto. Son estos los mínimos requisitos que puede exigir para su defensa un régimen democrático.

Estoy persuadido, señor presidente, que este estatuto ha de ser un factor preponderante e insustituible para lograr la estabilidad política, anhelo de todos los miembros y de todos los sectores de esta Cámara, como una etapa previa para conquistar definitivamente la paz so-

cial. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Señor presidente: deseo, en primer lugar, reconocer la seriedad del trabajo que ha realizado la Comisión de Asuntos Constitucionales, que durante casi un año ha estado recibiendo las informaciones y estudios de todos los partidos políticos argentinos, reconocidos y no reconocidos.

Se ha hecho un estudio muy serio sobre este proyecto de estatuto de los partidos políticos y tengo la seguridad de que es el ensayo más responsable que se ha efectuado hasta el momento.

El señor diputado Belgrano Rawson habló como miembro informante de la mayoría. Yo quiero decir, rectificándolo en parte, y para ser exacto, que la mayoría de los diputados estábamos de acuerdo con la mayoría de los artículos pero que, evidentemente, todos han establecido disidencias de carácter parcial.

Deseo hacer una aclaración previa. Nosotros también hemos planteado disidencias que, desde el punto de vista formal, pueden ser parciales. Se trata de unos pocos artículos objetados, cuyo reemplazo hemos programado. Pero es importante destacar que esta disidencia parcial tiene en el fondo una sustancia totalmente distinta al proyecto que envió el Poder Ejecutivo y al que trae ahora la Comisión de Asuntos Constitucionales.

No estoy haciendo un juego de palabras. Nuestras disidencias están planteadas en función de conceptos dispares sobre la realidad política nacional y es por eso, señor presidente, que no voy a hacer un análisis del estatuto en particular. Lo dejaré para la oportunidad correspondiente.

Tengo, sí, fundamental interés, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical Intransigente, en establecer el porqué de nuestras discrepancias y en dar la fundamentación teórica de nuestro pensamiento. Aclaro que no tengo ánimo polémico, y digo esto porque al referirme a la historia nacional podría rozar la susceptibilidad de algún sector político. Lo haré con la mayor objetividad posible, porque de ese análisis surgen las consecuencias teóricas que avalan nuestro pensamiento.

Se ha dicho que en el estudio de nuestros antecedentes políticos hay factores internos y externos que han influido en la realización de la política nacional. Los factores externos son los grandes acontecimientos ideológicos que en su época llegaron al pensamiento de los patriotas argentinos influyendo en sus ideas y, consecuentemente, en el desarrollo de la doctrina predominante del país.

Por ejemplo, un factor externo fue en su momento la Revolución Francesa, que sin duda orientó el pensamiento de aquellos hombres volcando sus ansias de libertad como base para la

constitución de un Estado de tipo democrático. La constitución de los Estados Unidos fue otro factor externo de gran gravitación. En épocas más modernas, también constituyó un factor externo la revolución rusa, que fijó nuevos conceptos y que, nos guste o no, coincidamos o no, trascendió indudablemente en el pensamiento argentino.

Pero todo esto que destaco a título de ejemplo sirve también para saber que en este país, como en todos los países del mundo, no influyeron menos factores internos, que son los que juegan en la idiosincrasia nacional y que sirven para la formación de una conciencia propia. Y yo reclamo, en primer lugar, la necesidad de que el estudio del problema político argentino se haga sobre las dos bases y sobre las dos realidades.

En nuestro pasado histórico, por ejemplo, el Partido Unitario era receptor del pensamiento de una doctrina política que vino del exterior; y tenemos otra realidad, a la que hizo referencia recién un señor diputado: los caudillos, que responden a un fenómeno típicamente nacional. Dos realidades que necesitaban complementarse para construir un país, y sin embargo, a lo largo de ese período histórico hemos visto a próceres que, por su formación o su pasión en ese instante, no tuvieron la visión del complemento indispensable y necesario de esos factores para construir una verdadera doctrina nacional.

Así, por ejemplo, liberado el país en 1810, se produce de inmediato la invasión doctrinaria y económica del Imperio Británico, imperio que a través de sus medios económicos, de sus bancos, de sus ferrocarriles o de sus múltiples empresas sirvió para incorporar en definitiva factores no nacionales pero que ingresaron en el país. Pero ese pensamiento o ese imperialismo, por llamarlo así, contó entre nosotros con la alianza de una oligarquía nativa, constituida por los beneficiarios de un proceso económico, es decir, la alianza de sectores económicos que se transformaron, posteriormente, en sectores políticos y que durante muchos años sirvieron para mantener una conducción nacional al servicio de esos intereses.

Pienso que ese tipo de política, o que ese tipo de imperialismo que a su turno practicó Gran Bretaña, ha servido para la formación de una conciencia política antinacional.

A los efectos de poder hacer entender mi pensamiento, quisiera destacar que de ahí hacia adelante, por ejemplo cuando se sanciona la Constitución de 1853, hubo pensadores argentinos que comprendieron esta realidad, como Alberdi y Echeverría, que supieron y entendieron que por sobre la base doctrinaria que el país había asimilado del exterior, hacía falta escuchar la voz de los caudillos, que por intermedio de los «pactos preexistentes» estaban

reclamando su incorporación al proceso institucional.

Creo que ésa es una realidad y que nosotros tenemos que estudiar la política basados en realidades y no en utopías; tenemos que plantearnos el país tal cual es, porque de lo contrario no nos vamos a entender.

Si la Constitución de 1853 tuvo y tiene vigencia hasta este momento, es porque fue una feliz síntesis de lo interno y externo, o sea, de las ideas liberales de las revoluciones francesa y norteamericana, pero también del pensamiento de los hombres que nacieron pensando en este país, que se apegaron a la tierra y que reclamaban la incorporación de las provincias al proceso constitucional.

De ahí en adelante el país retoma una senda de distorsión en el pensamiento político, acuciado por influjos económicos crecientes.

Este análisis que estoy haciendo tiende a determinar en definitiva que los gobiernos que han de resultar estarán condicionados a los factores ideológicos que los rodeen, marcando así sus reales posibilidades.

Desde 1810 hasta la asunción del gobierno de Hipólito Yrigoyen todo el proceso político está influenciado por grandes presiones de intereses. La asunción de Yrigoyen al gobierno es, en síntesis, la primera aspiración seria de poder hacer un proceso de autodesarrollo en el país, como de tratar con el apoyo del pueblo, de tomar las resoluciones que entonces se creían las más convenientes para la salida institucional y para la soberanía real de la Argentina.

No voy a hacer un análisis detallado de esa etapa, por que no viene al caso; pero quiero dejar aclarado que, de acuerdo con nuestro pensamiento, la presencia de Yrigoyen en la Presidencia significó por primera vez la asunción de las masas al gobierno y un ideal de realización política concreta.

Desde la caída de Yrigoyen hasta 1943 se produce una nueva deformación en la política argentina. En nombre de «la democracia y la libertad» —pa'abras insertas en el estatuto— se burló la voluntad popular y en definitiva se agudizó el natural descreimiento de la opinión pública sobre el valor de las instituciones democráticas.

Quiero empezar por decir, como hombre que viene del viejo radicalismo, que uno de los principales responsables de esa situación fue la conducción radical antipersonalista que no supo prever ni mantener la conciencia y el vigor revolucionario que Yrigoyen puso en su partido. Por eso, porque se perdieron las banderas y porque en definitiva existía un descreimiento popular tremendo, es que Perón asume el poder levantando las mismas banderas que el radicalismo había perdido y que no había sabido mantener enhiestas. Al llegar a ese momento de la política que entro a destacar y que hemos vivido, quiero decir con claridad nuestro pensa-

miento para que no se nos confunda y no se interpreten actitudes demagógicas que no están en nuestro espíritu.

Con otros hombres del radicalismo he militado en la intransigencia y cuando Perón llegó al poder me transformé en opositor en la medida en que las actitudes políticas del gobierno de Perón significaban la negación de derechos fundamentales en los que yo creía. Pero debo decir que contra Perón hubo dos tipos de oposición. Una posición de los que tenían temor por la asunción del pueblo al gobierno y la pérdida de sus privilegios y otra oposición, en la que otros hombres estábamos por la negación de las ideas democráticas y liberales en lo político, pero que no teníamos prevención alguna contra la asunción de la masa popular al poder, porque esa masa fue la sustancia del pensamiento eterno del radicalismo.

El peronismo deja un saldo favorable y un saldo negativo. El saldo favorable es repito la asunción de las masas al poder y su politización, fenómeno que debemos reconocer con objetividad. De ahí para adelante están presentes siempre en el proceso argentino. Y el saldo negativo es el sistema político, el régimen político, que impuso mediante la negación de derechos fundamentales. Y así llegamos al gobierno de la UCRI, al cual he pertenecido. Y también digo objetivamente que ha dejado un saldo positivo y un saldo negativo.

El saldo positivo que el gobierno de la UCRI ha dejado ha sido la necesidad de establecer objetivos claros desde el gobierno, es decir, una clara programática económica de fines, para que sirvan de orientación definitiva en el proceso de liberación económica. Si los medios han sido o no, idóneos, lo dejamos al juicio de la opinión pública. A nosotros nos interesó la determinación de los fines y, para eso, reclamamos la participación de todos los partidos políticos.

El saldo negativo ha consistido en cerrarse y en no haber comprendido que si la opinión pública no entendía el proceso, que si aparecíamos, por subestimación de algunos intelectuales que colaboraron con el gobierno, enfrentando sectores populares, no sería posible realizar un desarrollo democrático y revolucionario, porque para ello se requiere la participación y la fe del hombre de la calle, que, en definitiva, es el activo militante de todo proceso revolucionario verdadero.

Con respecto a este gobierno, nosotros no lo atacamos por una razón de deportiva opositora, sino porque creemos que debe trazar con urgencia, no mirando hacia marzo, sino hacia el futuro, una clara programática de prelación de valores económicos, con objetivos claros a lograr, y que debe orientar los esfuerzos del país hacia las actividades denominadas básicas, como la siderurgia, las grandes industrias, la petroquímica, etcétera. Esto podrá realizarse con los medios que el oficialismo quiera, pero es me-

nester que se realice. De seguir esa política progresista, el gobierno encontrará, entonces sí, nuestra solidaridad y nuestro apoyo.

En realidad, lo tremendo de todo esto —y lo digo con todo respeto—, que surge de las palabras de los señores diputados, es que no se han despojado de la teoría liberal ya tan superada y que, en definitiva, dan más importancia a lo formal que a lo de fondo. Nosotros renegamos de los declamadores de la democracia; queremos una democracia con contenido, y para ello, como decía Yrigoyen, debemos atacar las causas de los males y no las consecuencias. Pongámonos de acuerdo en cuáles son las causas. Si en el fondo coincidimos, establezcamos los métodos y hagamos un plan serio para los próximos cinco años. Veremos entonces cómo, unidos sobre la base de una conciencia nacional —única teoría salvadora en esta Argentina—, podremos realizar lo que el país necesita.

Pero, señor presidente, yo no quiero, aunque sea someramente, dejar de decir algunas palabras sobre la realidad de lo que pasa en cada uno de los gobiernos.

Si he hecho anteriormente el análisis de la influencia del imperialismo británico en el gobierno o de su influencia económica, no quiero dejar de decir que, en definitiva, el gobierno —y la experiencia la estará haciendo el oficialismo— está sujeto a una serie de presiones de mayor o menor medida, que en ciertas y determinadas circunstancias desfiguran la intención final con respecto a lo que se quiere hacer.

Yo creo que aquí hay que hacerse algunas preguntas, siguiendo el pensamiento de Jiménez de Parga, en su libro *Los regímenes políticos contemporáneos*: ¿Quién realmente manda en un país? ¿Cómo manda y para qué manda?

Tenemos que entrar al análisis del problema de fondo para saber si son los poderes constitucionales los que llegan a la decisión, o si existen organismos paralelos que en definitiva determinan las decisiones en cada país. Y digo que para esta respuesta existen dos enfoques distintos: el enfoque constitucional y el enfoque de la moderna politología como ciencia. El enfoque constitucional es insuficiente para explicarse en este momento los graves problemas que se le plantean al gobierno y a las decisiones que debe tomar, porque la letra de la Constitución —tanto sea una Constitución escrita como no escrita, de acuerdo a la típica clasificación— no interpreta, y menos en América latina, los procesos de fondo que están viviendo los países. De lo contrario no nos explicaríamos las continuas interrupciones de los regímenes constitucionales, ni tampoco podríamos explicarnos el porqué de la violencia y de la inestabilidad en que viven estos pueblos, como otros que no pertenecen a este continente. Lo importante es que la letra de una constitución tenga

una redacción suficientemente clara como para interpretarla sin violentarla.

Se han ensayado varias teorías para explicar constitucionalmente el proceso de cada país y sobre todo la psicología del poder. Pero no ha sido suficiente. El enfoque de tipo constitucional estudia el problema desde un punto de vista estrictamente institucional o desde el punto de vista de la doctrina o desde el punto de vista de la jurisprudencia que se desarrolla en base a ese pensamiento. Se ha hecho un símil que voy a recordar, se ha dicho que es como estudiar a un sistema montañoso desde un solo ángulo. Y es obvio que para tener una visión completa de cualquier sistema montañoso hay que correrse y examinarlo desde distintos ángulos. Con la política pasa lo mismo. Hay que tener en cuenta esa otra parte que no comprende el derecho constitucional: la politología.

¿Queda en claro que el Estado moderno representa en su estructura el pensamiento y la política del país? Yo digo que no. El Estado está superado por un régimen político, por una realidad política nacional completamente distinta a la concepción de lo que es el Estado.

Es fundamental para entender el régimen democrático, representativo y republicano y la relación entre gobernantes y gobernados, conocer el pensamiento de León Duguit, sobre todo su tesis sobre, los que eligen y los elegidos, para saber hasta dónde y con qué pureza se puede dar el pensamiento democrático.

Duguit recurre a una pirámide en cuya base están los representados y en cuya cúspide ubica a los representantes. Dice que los representados emiten una corriente que llega a los representantes y entonces existe una conexión permanente, directa. Ese fue el ideal del liberalismo y en la teoría resultó bueno, pero como lo señala Duguit, entre los representantes y los representados, entre la base y la cúspide se produce la interferencia de lo que él llama los transformadores políticos, que cambian las intenciones originales y producen una desviación para que el gobernante no perciba con claridad y pureza el pensamiento original de los gobernados.

Esa intermediación son los grupos de presión que en este ciclo que vive el mundo actúan en los países cada vez con más fuerza.

Es importante que los gobernantes devuelvan a los gobernados en obras, en realizaciones, todas las inquietudes que los llevaron al poder, y también es importante que de por medio no se produzcan las interferencias que he citado.

Estas intermediaciones, son consecuencia de un fenómeno moderno de la política y de la economía: la aparición de los grandes sectores industriales, la toma de conciencia por la clase trabajadora, de su fuerza, y las asociaciones profesionales.

Es claro que este enorme proceso, que es consecuencia del mundo moderno, no pudo ser

previsto por los Constituyentes del 53, ya que cuando se redactó la Constitución o sus fuentes originarias no estaba dado el fenómeno con la intensidad con que se vive en la actualidad. Todos entonces reclamamos la necesidad de analizar este problema político de acuerdo con la situación de 1964, como está el mundo hoy, para no equivocarnos repitiendo textos y citas y llegando en definitiva a la reiteración de teorías que en este momento están en crisis.

El fenómeno que he mencionado es una de las causas fundamentales de la crisis del liberalismo. El liberalismo ya no se puede realizar, porque en todo este enfoque de intermediaciones, de situaciones de presión y de factores de poder, en definitiva, al gobernante le queda muy poca libertad para tomar las decisiones que cree oportunas. Es decir, el ciudadano en una sociedad moderna es hijo de las circunstancias en las cuales ha nacido, y está sometido a una educación, a un pensamiento que en definitiva es el pensamiento ambiental que lo rodea. Se va formando de acuerdo con las influencias de su hogar, de su escuela, etcétera, y así se transforma en un hombre, que puede ser luego un gobernante. Pero cuando el hombre político desarrolla en función de opositor una teoría, un esquema o un dogma prometiéndolo cumplir, luego —como ocurre en muchas circunstancias, en todos los países— en función de gobernante, en contacto con todas las presiones económicas y posibilidades nacionales, hace lo que mejor entiende en beneficio del país, dentro del juego de las posibilidades que tiene, y nada más que eso.

Digo todo esto porque tengo la necesidad espiritual de decirlo, porque entiendo que es la realidad que vive la Argentina. De otra manera, no entenderíamos la política ni las decisiones. Giménez de Parga dice que para juzgar la moralidad —palabra que ha estado muy en boga en este recinto— de un gobernante tenemos que preguntarnos si dentro de las posibilidades de un gobierno ha realizado lo que más le convenía a los intereses nacionales y populares. De ninguna manera se debe juzgar la moral desde un punto de vista exclusivamente formalista, porque si no se conocen las realidades que está viviendo un hombre de gobierno, evidentemente tampoco se pueden juzgar las decisiones que tiene que tomar.

El mundo está viviendo una revolución, una tremenda revolución. Por ejemplo, en el plano religioso las últimas decisiones papales, como las de Juan XXIII, constituyen una revolución para el pensamiento tradicional de la Iglesia. Las cosas que ha dicho la Iglesia en sus comunicados periodísticos, si fueran dichas por algún político argentino, sin aclarar que está fundando su pensamiento en las ideas del Papa, serían calificadas a lo mejor de comunistas o totalitarias.

Sr. Ghioldi. — No es de extrañar, porque la encíclica en definitiva quiere decir que el socialismo tiene razón.

Sr. Musacchio. — Lo felicito, señor diputado. Ha sacado dividendos.

Sr. Ghioldi. — Es una tesis; no es un dividiendo.

Sr. Musacchio. — El mundo está viviendo también una revolución en la técnica y no hace falta que detalle en este momento la transformación experimentada en pocos años con la energía atómica y con la investigación espacial, revolución en la filosofía, desde todo punto de vista. Resulta entonces que nosotros necesitamos estructurar nuestro pensamiento de hoy ajustándonos a esa revolución de las ideas.

No deseo pasar por alto la apreciación de que, aun desde el punto de vista filosófico, el enfrentamiento tradicional entre el mundo del capitalismo y el mundo del comunismo, de acuerdo a muy serias teorías actuales, está siendo superado. Veamos, si no, cuál es la realidad, siguiendo la tesis de Rostow. Rusia, país comunista, ha tenido, tiene y tendrá, no obstante las tratativas, enfrentamientos con los países comunistas no desarrollados, porque en definitiva el problema de fondo está radicado en el desarrollo que cada país tiene y en el desarrollo que desea alcanzar. Los Estados Unidos tienen serios y tremendos problemas con países de América y con otros que no son americanos que pertenecen al mundo occidental, que por hallarse en estado de subdesarrollo reclaman permanentemente ayuda económica para lograr bases de vida mínimas y decorosas. De esto resulta que el enfrentamiento típico de clases, tesis marxista, viene a ser sustituido, según nosotros decimos, en una división entre Estados que han llegado al desarrollo y Estados que aspiran llegar a un grado de desarrollo. Y este enfrentamiento lo tenemos tanto en el mundo comunista como en el mundo capitalista.

Por esto hemos visto las actitudes que tuvo el presidente Kennedy, cuando en sus discursos y manifiestos, apoyado por el pueblo norteamericano, sostuvo la necesidad de la elevación económica de los países de América latina y estructuró la Alianza para el Progreso. Por eso hemos visto que Rusia ha comprendido también, que no es suficiente sojuzgar por la fuerza a los países y que es necesario darles apoyo económico para sacarlos de su situación de subdesarrollo a fin de no encontrarse con permanentes enfrentamientos.

Todo lo que he venido diciendo sirve para fundamentar la razón de la disidencia que hemos planteado. No nos conformamos nosotros con que en el estatuto esté la palabra «democráticos» o «partidos democráticos», ni la expresión «republicanos». Nosotros queremos saber qué es un partido democrático, qué es un sistema republicano, no porque no tengamos nuestro concepto, sino porque delegar en la

función judicial la interpretación de estos principios para negar u otorgar la personería a un partido político, es muy peligroso. Así lo demuestra la historia de los antecedentes nacionales. En esta misma Cámara, si le pidiéramos a cada sector la definición de esos conceptos, veríamos que no es la misma para la Federación de Partidos de Centro, para el radicalismo del pueblo, para los justicialistas o para nosotros. Cada sector político pondría su nota distintiva, daría su propio concepto. ¿Cómo vamos a delegar entonces, en un juez que no conocemos la interpretación de una palabra que determinará que un partido pueda o no actuar en la vida política argentina?

En nuestro sistema, nosotros hemos propuesto dos normas distintas al despacho de la mayoría, que llevan los números 21 y 22, y esta que es denominada disidencia parcial, para nosotros es fundamental.

En el artículo 22 del dictamen de la mayoría se ha incorporado una palabra —y esto no me lo podrá desmentir el partido oficialista— que es fundamental para interpretar y definir lo que es un régimen democrático. Se ha agregado la palabra «especialmente» en la enumeración que realiza dicho artículo. ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo que algún distinguido colega de la comisión perteneciente al radicalismo del pueblo dijo que estaba avalado por el pensamiento de su partido el agregar esta palabra «especialmente», para que no quedara cerrada la enumeración y para que el juez, en definitiva, pudiera interpretar si aparte de las causas mencionadas en el artículo 22, hay otras no enumeradas que significaran la violación del régimen democrático y, en suma, la proscripción de partidos políticos argentinos.

Quiero recordar que hace pocos días, cuando se trataba el problema del petróleo, este bloque fue acusado por varios sectores políticos de querer mantener el tratamiento del asunto de los contratos petroleros porque estaba interesado en la proscripción de un partido político para obtener de ella dividendos. Eso se dijo.

Afirmo con absoluta seguridad que, de acuerdo con la redacción actual del artículo 22 dada por quienes nos acusaron no sólo un partido —concretamente el justicialismo— sino varios podrán ser proscritos, por la sola voluntad judicial.

El inciso a) del artículo 22 dice: «Concentración del poder político, social o económico», en los programas de los partidos, como causa para negar la personería. Debo recordar, porque he estado en el tratamiento de este problema, que este inciso decía: «Concentración personal del poder político, social o económico.» Se ha suprimido la palabra «personal» y queda claro, entonces, que el hecho de propiciar la concentración del poder político, social o económico significa una actitud antidemocrática y es causal suficiente para la proscripción.

Afirmo que este inciso es la muestra más clara y cabal del pensamiento liberal, que ha inspirado la redacción del estatuto. Mientras los grandes sectores económicos han concentrado y concentran el poder en este país para dirigir la economía y la política, nosotros, en un estatuto político, prohibimos que actúe un partido que trate de concentrar los factores económicos en sus manos para defender, por lo menos en igualdad de condiciones, la soberanía nacional.

No entiendo cómo el oficialismo, que en su prédica política y con sus actitudes pretende demostrar su patriotismo, hablando de la nacionalización de los servicios públicos fundamentales y de la defensa de la economía frente a los grandes privilegios exteriores, puede votar un inciso que ha de ser causante de la proscripción del propio partido oficialista.

Quiero referirme ahora a la concentración del poder social ¿Qué quiere decir esto? ¿Es acaso la prohibición de que un partido sostenga una CGT única para los trabajadores? ¿Si un partido sostuviera eso, podrá ser proscrito? Afirmo que un juez tendrá el derecho de interpretar así este artículo, porque al hablar de la concentración del poder social se está haciendo referencia a la clase trabajadora argentina y, entonces, tampoco se podría sostener ese pensamiento en la programática partidaria.

Se habla de un régimen republicano. ¿Qué es el régimen republicano?

Sr. Grau. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Musacchio. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Grau.

Sr. Grau. — Quiero aclararle al señor diputado que el problema de la interpretación o del significado de los términos no va a permitirnos ponernos de acuerdo, porque cada uno puede darle el sentido que desee. Nosotros aspiramos interpretar el significado de estas disposiciones por el espíritu que las anima. La palabra democracia tiene para nosotros un significado. Lo tiene en la historia de la humanidad. Nosotros vinculamos la actividad democrática a la de un pueblo. Cuando se prescinde de él, lógicamente, la democracia no existe.

Con respecto a la palabra «republicano», las definiciones de cualquier texto de derecho constitucional son suficientes. Tanto el despacho de la mayoría como el de minoría suscrito por el señor diputado Gómez Machado hablan de régimen republicano.

Por eso, si discutimos el significado de la palabra libertad, o de la palabra derecho o de justicia, o de república, no nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros tenemos un lenguaje —no hacemos una cuestión filosófica— que aplicamos con absoluta buena fe, sabiendo qué es lo que queremos decir al emplear esas palabras que han empleado hasta las constituciones europeas que

mentoné, como la de Alemania Occidental, Italia y Francia, que también hablan de democracia.

Es lógico que las democracias populares pueden constituir un régimen distinto, y recuerdo que la Constitución de 1853 no emplea el término democracia, que recién se incorpora en el año 1957 al hablar de sindicalismo democrático en el artículo 14 bis; pero corremos el riesgo de discrepar fundamentalmente si hacemos una interpretación de tipo gramatical de cada uno de los términos.

Sr. Catalán. — ¿Me permite una amable interrupción, señor diputado?

Sr. Musacchio. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Catalán.

Sr. Catalán. — No sé si habré escuchado bien, al señor diputado —y por eso le pido la aclaración—, habría dicho que el bloque justicialista ha aceptado el artículo 22. Si así lo hubiese afirmado el señor diputado, quiero significarle que nuestro bloque ha suprimido este artículo y tal criterio lo sostendrá en el tratamiento en particular.

Sr. Musacchio. — Lo que dije es que las acusaciones que se nos hicieron con motivo del debate de los contratos de petróleo por nuestro deseo de que dicho debate se agotara íntegramente, antes de entrar al estatuto, sirvió para que se nos acusara de defensores de proscripciones, pero estoy demostrando con los hechos y con las actividades que vamos a adoptar en el recinto, que es al revés.

Sr. Serú García. — Si me permite el señor diputado, para no pasar por alto alguna afirmación suya.

Al hacer el análisis, que yo y mi bloque compartimos, con respecto al artículo 22, el señor diputado ha afirmado que daría pie —si quedara tal cual está redactado en el despacho de la mayoría— a que un juez de la República pudiera, en base del inciso a) de ese artículo, resolver la caducidad de la personería de algún partido político que sostuviese, por ejemplo, la necesidad de una CGT única en el país, quiero aclararle categóricamente —y estoy seguro que no voy a ser contradicho por ninguno de los sectores— que sostener tal temperamento en materia de organización laboral no puede significar en ningún caso causal de caducidad de la personería de dicho partido político.

Pediría que los sectores si no estuviesen de acuerdo con mi interpretación se expidan porque es importante que quede aclarado en este debate el real alcance de ese inciso a), aun en el supuesto de que por el voto mayoritario de la Cámara fuera sancionado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Musacchio.

Sr. Musacchio. — Ustedes han elaborado un despacho en disidencia en el que no figura este inciso. Por otra parte, en la discusión en

particular pediremos que lo expresado sea una norma de interpretación.

Pero volviendo a lo que hacía referencia hace un instante, quiero decir que evidentemente estas palabras que usa el estatuto han sido utilizadas por hombres en la política argentina y no argentina de las maneras y con las interpretaciones más distintas. Puedo citar el ejemplo de la constitución brasileña, donde al hablar de régimen democrático se refiere expresamente a los casos de violación del régimen democrático para evitar interpretaciones duales.

Es decir, aquí se ha usado también la palabra democracia por oposición a los regímenes totalitarios; también los regímenes populares se llaman democracias. Por ejemplo, la palabra justicia ha sido usada también para cometer las más tremendas injusticias, porque en este país no hay justicia hasta que no se la establezca con sentido social verdadero y cierto. Es decir también las palabras «libertad» y «democracia» han sido usadas ligeramente. Yo no voy a enumerar las formas distintas en que fueron empleados esos vocablos. Yo exijo y quiero que el estatuto diga claramente en qué casos y en qué circunstancias se aplicarán las proscripciones, con las que estoy en desacuerdo total.

Por lo tanto, sostengo que este estatuto, tal como está redactado, deja abierta la posibilidad de las proscripciones de fuerzas políticas argentinas, porque la interpretación que de él hará en su oportunidad el juez nosotros no la conocemos. Concretamente, me voy a referir al caso del justicialismo o peronismo.

Hace unos momentos, cuando hice el análisis de la asunción de Perón al gobierno, manifesté que a nosotros nos interesa la incorporación de la clase trabajadora definitivamente al proceso social argentino, y nos interesa independientemente de cómo piense políticamente en este instante de la vida política, porque es la única clase que tiene clara conciencia nacional. Sin esa incorporación y soslayando, franca o solapadamente, a esos sectores, yo no creo que la solución este en los partidos políticos argentinos. Esa sería la declamación de una democracia que no se siente. Creo que hace falta hablar con valentía. Este debate no puede pasar así intrascendentemente.

¡Qué me interesan los plazos para apelar o los problemas procesales del estatuto! ¡Qué me interesan las cuestiones secundarias de una carta orgánica! Me interesa definitivamente que de este estatuto surja una integración absoluta del pueblo argentino.

Por ello, en el debate en particular, nosotros vamos a proponer —y también lo harán otros sectores—, cuando se trate el problema de las proscripciones, un artículo —que ya tenemos redactado y que oportunamente dimos a publicidad— que no dejará lugar a dudas, en el sentido de que no podrán interpretarse nunca como

causa de proscripciones las actitudes anteriores tomadas por los partidos políticos del país. Y esto lo digo —y no hago más que recordar palabras vertidas en este recinto y desde esta bancada que hoy ocupamos, y que en su oportunidad aglutinaba a los representantes del radicalismo del pueblo—, para poner de manifiesto una vez más la necesidad de que se termine definitivamente con proscripciones. El radicalismo del pueblo desde estas bancadas reclamaba el levantamiento total de las proscripciones y su vocero de entonces era el ex diputado Perette, quien se expresó con toda vehemencia al respecto. Yo hoy digo lo mismo, pero con una diferencia que quiero recalcar: la UCRI subió al gobierno prometiendo levantar las proscripciones y cayó del gobierno por haberlas levantado.

Sr. Grau. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Musacchio. — Sí, señor diputado.

Sr. Grau. — Es cierto en parte lo que dice el señor diputado Musacchio en cuanto al levantamiento de las proscripciones y a la derogación del decreto ley 4.161; pero también lo es que en una oportunidad, en el año 1959, el gobierno de entonces, a través de su ministro del Interior, dio instrucciones a los agentes fiscales para que no reconocieran o retiraran, en su caso, la personería política al Partido Justicialista.

Sr. Pedrini. — Es cierto, señor diputado.

Sr. Musacchio. — Lo que dice el señor diputado no quita la verdad de lo que he afirmado. La caída del gobierno de la UCRI se produjo, entre otras causas, por haber levantado las proscripciones y, consecuentemente, triunfado el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Aquí hay que manejarse con amplitud y gran generosidad política. Esa generosidad ha sido reclamada por todos los sectores, con un estudio objetivo, no apasionado, del problema. Está bien que fuimos protagonistas de hechos políticos pasados, pero tenemos la suficiente seriedad para analizar el problema sin pasiones, porque nosotros somos los que hicimos la oposición al peronismo del punto de vista político cuando Perón estaba en el gobierno, y estamos cansados de ver a hombres que se hicieron antiperonistas después que Perón cayó del gobierno y que si Perón volviese al país no sé qué actitud asumirían en ese momento.

Después de este análisis quiero decir lo siguiente. En el problema argentino, para el estudio de este estatuto de los partidos políticos, lo que nos interesa es la forma cómo pueden llegar los partidos al poder y la forma cómo el gobierno puede realizar una obra pública que sea realmente pensada y querida por el pueblo argentino.

Nosotros necesitamos realizar en este país de hoy lo que realmente es la unidad nacional.

Nosotros creemos en la coincidencia por sobre los sectores, y lo he demostrado en el análisis objetivo que he hecho de la política nacional y de los errores de mi propio partido. Necesitamos sincerarnos, porque no habrá posibilidad de que este país pueda avanzar si entre todos los partidos políticos argentinos y las fuerzas no políticas que en este momento tienen fuerza y vigencia en la Nación no nos ponemos de acuerdo sobre los objetivos básicos a lograr para que la Argentina salga adelante. ¿O acaso nosotros no comprendemos que Alemania es lo que es por un tremendo espíritu nacional? ¿No entendemos que Inglaterra se transformó en una nación poderosa también por su nacionalismo? ¿No comprendemos que el nacionalismo de los Estados Unidos lo llevó, en definitiva, a ser una primera potencia mundial? Tampoco hablamos del nacionalismo de Rusia, y yo no podría decir en este momento si es el comunismo lo que levantó a Rusia, o fue Rusia quien levantó al comunismo, pero sobre todo con un claro orgullo nacional. Y también China, por encima de los esquemas ideológicos del marxismo, se maneja con un espíritu de unión nacional, para poder levantar la economía y llegar a un estado de desarrollo. Mientras tanto, nosotros estamos todavía en este país discutiendo problemas secundarios, tratando de ponernos de acuerdo sobre la interpretación de las actitudes de los hombres que ya pasaron a la historia argentina.

Nosotros queremos mirar al futuro, y el futuro habla de unidad; pero la unidad no se puede producir por pactos electorales; la unidad no se puede producir por componendas o fusiones de sectores que tienen ideas radicalmente distintas; la unidad no se puede producir sobre la base de la mentira o la distorsión de la opinión pública que tiene que votar; la unidad se tiene que producir en la coincidencia de las grandes ideas fundamentales, que no están tan lejanas de lograrse, sobre los postulados básicos e inmediatos que este país necesita para poder avanzar más allá de sus hermanas y llegar a ser una potencia mundial.

Para ello, señor presidente, los hombres de la Unión Cívica Radical Intransigente tenemos el espíritu dispuesto. Estamos dispuestos a la coincidencia. No somos hombres que pensemos en un partido político. En definitiva, no somos hombres partidistas. Queremos manejarnos en función de argentinos, porque comprendemos que la hora que viven América y el mundo reclama que nos sinceremos de esta manera. Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras investiduras partidarias para poder lograr, sobre la base de la coincidencia con los otros sectores y con el gobierno —si es que hace lo que debe hacer—, la construcción de este país sobre fundamentos nacionalistas ciertos, que permitan terminar con esta postración económica y con esta sub-

versión popular en que se vive —a pesar de que no lo reconocen—, y dar a la democracia un contenido económico, única forma en que podremos hablar de democracia y de libertad y ser comprendidos por los hombres del pueblo, que hoy no creen en ellas porque no les han traído, hasta el momento, más que hambre y miseria.

Sobre esas bases estamos dispuestos a conversar, y no tengo temor de decir en este momento que represento el pensamiento de mi partido. Por sobre los discursos y las formulaciones teóricas, hago esta reclamación para que nos pongamos de acuerdo. Y sobre ese acuerdo serio, real y público que el pueblo argentino aprobará, podremos construir la Argentina soñada de que tanto nos hablaba Moisés Lebensohn, ese líder radical frustrado. Una Argentina soñada en la que podemos hablar al hombre humilde, de igual a igual, para que comprenda que dentro de la democracia y de la libertad podrá hallar la solución a sus problemas y a sus pesares. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rozas.

Sr. Rozas. — Debo dar, señor presidente, el fundamento del voto afirmativo de los diputados socialistas democráticos respecto del despacho de la mayoría de las comisiones intervinientes.

Los socialistas democráticos no somos demasiado crédulos en lo que atañe a la posibilidad de cumplimiento de la norma jurídica en general, esto es, a su plena aplicabilidad, porque nuestra vieja experiencia nos sigue alertando respecto de la realidad de su eficacia real y cierta.

De ahí que hayamos coparticipado en cierta medida en aquel aforismo de la filosofía gauchesca de *Martín Fierro*, sintetizado así «la ley es como el cuchillo: no corta a quien lo maneja»; a la par que siempre recordamos el aforismo tan sustancial de Ihering: «derecho que no se cumple, no es derecho».

En el caso particular del régimen jurídico sobre organización y funcionamiento de los partidos políticos fuimos muy reticentes en el pasado, aunque por efectos de procesos públicos y graves desarrollados en el país y en el mundo en los últimos decenios, hemos debido aceptar que fuera ensanchada la órbita de la intromisión jurídica sobre esas materias.

A pesar de todo, no hemos abandonado todavía algunas de nuestras reservas íntimas. Ahondando la investigación introspectiva podemos adjudicarnos a priori eclecticismo en cuanto al beneficio de la intromisión excesiva del Estado por intermedio de cualquiera de los poderes

que lo integran, aun el Poder Judicial, en orden a la vida interna de los partidos políticos.

Ese nuestro eclecticismo se refirma quizás al advertir que, a despecho de los regímenes legales atinentes a la organización y funcionamiento de los partidos, no se ha logrado efectivizar las aspiraciones fundamentales del encuadre legal, esto es, una democracia verdadera para la vida pública argentina y para la vida interna de las agrupaciones.

Las frustraciones han sido muchas y frecuentes y amenazan reproducirse. Debemos confesar que a todos nos ha alcanzado —es honrado reconocerlo— dividiéndonos, debilitando nuestros cuadros y, acaso, nuestro entusiasmo, y malogrando que propulsáramos con amplitud y con éxito nuestras vastas concepciones de bien público.

La simultaneidad y similitud de las secesiones en las agrupaciones, acaecidas casi todas en la misma época, autoriza a presuponer que ha mediado alguna o algunas fuentes causales comunes, aunque también pueden ocultarse motivaciones propias y particulares de cada agrupación.

Todo esto, que no puede ser examinado y estudiado suficientemente en la presente ocasión parlamentaria, aconseja que meditemos sobre lo ocurrido para inferir las rectificaciones futuras adecuadas. En esta oportunidad bueno sería que nuestros esfuerzos, sin titubeos ni excesivas concesiones, impidan la posibilidad de nuevas frustraciones y aseguren el afianzamiento de la democracia pública y de la democracia interna de los partidos. Anhelamos fervorosamente que el estatuto que vamos a sancionar responda a ese principio fundamental que adquiere la relevancia de una alta y patriótica aspiración. La democracia argentina para ser auténtica debe quedar bien sustentada a través de todos los elementos de integración, tanto internos como externos, vale decir, tanto en el desarrollo atinente al proceso de elección de los gobernantes como a la creación y funcionamiento vital de los partidos políticos. Para asegurar dicha autenticidad el despacho de la mayoría de la comisión ha ampliado considerablemente la jurisdicción y competencia de la Justicia Electoral Nacional, pues además de las que les atribuye la ley orgánica respectiva, ya citadas, le asigna en el artículo 69 el contralor de la vigencia efectiva de los deberes, atribuciones, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que esta y demás disposiciones reglan con respecto a los partidos, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general.

Yo acepto en los tiempos que corren que se confíen esas atribuciones a la Justicia Electoral Nacional, no sin advertir la vasta latitud de las mismas. Creo que son útiles y necesarias en las circunstancias políticas vigentes en el país y de que luego haré mérito. Esa aceptación lleva hasta anhelar que esa justicia especializada cumpla cabalmente todas las finalidades inherentes

rentes a esas vastas atribuciones. De otro modo bien pudiera ser que otra vez cayéramos en otra frustración más en cuanto a la vigencia de muchos cuerpos legales, incluso sobre otras muy diversas materias.

En el tópico general de las frustraciones jurídicas hemos percibido muy frecuentemente la presencia de intereses muy poderosos arraigados en lo profundo de la estructura de las sociedades argentinas, los que a la postre prevalecen a veces hasta sobre la propia voluntad de los gobernantes. No hay duda que son los detentadores de la riqueza, esto es, de los medios de producción y de cambio, los que con frecuencia gravitan con sentido adverso en cualquier cuerpo legal que limite o intente limitar sus privilegios, como ocurrió con los dispositivos legales de fijación de precios máximos, y como está ocurriendo desde bastante tiempo atrás con la vigencia de la legislación social, que casi todos los partidos políticos proclaman que desean ver cumplida y ampliada. A despecho de esa buena voluntad o de la declamación de ella, la verdad es que la legislación social argentina va perdiendo vigencia, que va siendo cada vez más innocua porque la gravitación de los factores económicos imponen su dura realidad y dictan la ley del hecho superior al empirismo de la ley escrita.

Es así como puede decirse que la lucha de los trabajadores es al presente muy cuenta para mantener su nivel de vida por el empleo de la acción gremial, cooperativa, mutual y política. Pero la realidad nos dice que esa lucha, a pesar de la apariencia o sonoridad de la propaganda de cierto sector gremial, es más defensiva que ofensiva. Cada mejora lograda en el salario, por ejemplo, que aspira a compensar los acrecimientos de los precios ya producidos, es absorbida a poco andar por nuevos aumentos de esos precios, por la cual el nivel de vida de los afectados vuelve a su estado anterior o acaso a una situación inferior todavía. La propia jornada laboral está muy quebrantada en buena parte del país, incluso porque muchos asalariados tienen que desempeñar dos o más trabajos para allegar a sus hogares los recursos indispensables.

A mi modo de ver, la aguada depresión económica es el factor principal que tiene conturbado a una parte del pueblo argentino, con riesgo de dejarse arrastrar hacia el quebrantamiento de la paz y de la convivencia social. Esas masas están siendo llevadas hacia tendencias demagógicas de confusión y de mero empirismo, proclives para esterilizarlas para la fecunda conquista de la elevación auténtica y perdurable, material y espiritual.

Ya dijimos que no tenemos fe excesiva en las virtudes, especialmente en su faz creadora, del estatuto de los partidos políticos que se ha proyectado, malgrado su atrayente contenido intencional y el meritorio esfuerzo, araso demasiado conciliador, de los señores diputados de

las comisiones intervinientes. Tampoco tuvimos fe, menos que ahora, en ocasión de darse los estatutos anteriores, inferiores en muchos conceptos al que estamos considerando. Estoy convencido que ningún estatuto de organización y funcionamiento de los partidos puede de por sí crear de súbito en esos partidos calidades democráticas que no tienen por anticipado. Admitimos que pueden coadyuvar a mejorarlos, pero no ha de ser por arte de encantamiento, por efecto de su sola presencia. No. El perfeccionamiento tiene que fluir del largo, cuidadoso y honrado cultivo de los militantes de cada agrupación, tanto en el orden ético como intelectual. El ascenso, siempre ponderable, no será un suceso, sino un proceso; no será una revolución espasmódica, sino una evolución, acaso en alguna etapa con ritmo febril muy acelerado, algo que en otras partes y aquí se ha llamado revolución revolucionaria, ansiada también por nosotros, los socialistas democráticos.

Es ya de antiguo que nuestro ordenamiento institucional confiera a los jueces lo concerniente a la formación de los padrones electorales sobre la base del registro militar, la designación de las mesas receptoras de votos, la ejecución de los actos preparatorios de los comicios, su organización, control y desarrollo, la realización del escrutinio definitivo, diplomación y proclamación de los electos. Tal la intervención del órgano jurisdiccional dentro del encuadre de la reforma electoral del gran presidente Sáenz Peña.

Respecto de los partidos políticos actuantes, y siempre en relación al pasado, claro está que la justicia electoral ha tenido previamente que reconocerles personería en forma expresa o implícita, según los respectivos dispositivos o las implicancias legales, para que pudieran coparticipar con candidatos en las elecciones, así como en el control de los actos conexos, ya fueran anteriores, concomitantes o posteriores a dichos comicios.

En el orden de la personería política de los partidos, el reconocimiento judicial no iba más allá de algunos formalismos, inspirados principalmente en el propósito de asegurar la autenticidad de los apoderamientos, ya fuera para lo atinente al nombre de la agrupación, forma, contenido, división y distribución de las listas de candidatos, y para asegurar el derecho de control de todo el proceso cívico.

Durante muchos años posteriores a la ley Sáenz Peña la notoriedad tenía eficacia decisoria como prueba en muchos de esos pormenores. Así fue reconocido judicialmente cierta vez en ocasión de una gestión que debí realizar a nombre de la Federación Socialista Bonaerense, de la que era secretario general, ante el Juzgado Federal del doctor Marengo, de Bahía Blanca.

Desde lejos vienen algunos dispositivos legales sobre otros tópicos, entre ellos la prohibición a los partidos políticos para recoger re-

cursos de fondos espurios y clandestinos. Pero en verdad esa prohibición no ha tenido aplicación cierta y mensurable. Estamos convencidos de que la llamada «política de masas», de presión psicológica pertinaz sobre grandes núcleos humanos por todos los medios conocidos, reclama enormes sumas de dinero, en gran medida de origen inconfesable. Es una modalidad aberrante de las contiendas cívicas modernas, incluso entre nosotros. Las fuentes de ese aprovisionamiento se mantienen ocultas, pero su realidad está en la conciencia de todos.

Hasta aquí siempre han sido letras muertas las prohibiciones de leyes y decretos, tal como acontece con los fondos de las corporaciones, incluso gremiales, sin que se haya realizado compulsu o control de los destinos dados a esas abultadas cantidades de dinero.

En el proyecto de la mayoría se ha atendido con mayor prolijidad a los respectivos recaudos de fiscalización judicial, y en verdad, mucho nos congratulamos de ello. Pero en el momento de la vida política y social que nos ha tocado vivir, aparecen otras situaciones que concentran nuestra atención y deben tener repercusión principalísima. Estoy aludiendo a la realidad política institucional argentina contemporánea en su arista más peligrosa.

Hay en nuestro país un número muy grande de ciudadanos que no han participado positivamente y en forma directa en las elecciones públicas, aunque pudieron haberlo hecho negativamente o por abstención. Subjetivamente, están al margen de esos procesos ciudadanos, acuciados por la adhesión que prestan a un régimen del pasado reciente, a cuyo factor principal reverencian como ídolo, que fuera desplazado por una revolución irreversible del pueblo argentino.

Ese régimen era, específicamente, autocrático, en cuanto estaba absolutamente subordinado a la voluntad de una sola persona en todo lo concerniente a la acción del Estado en sus tres poderes, a más de la supervisión real o virtual indudable de la acción de los gobiernos provinciales y municipales de todo el país, además de la actividad del partido y de los gremios politizados del oficialismo de entonces.

No es el caso de reproducir las críticas acerbas que por toda clase de motivaciones se hicieron y podrían hacerse sobre las consecuencias sobrevenidas a la República durante la vigencia de ese régimen, y posteriormente. Son asaz conocidas y fueron y son todavía soportadas por nuestro país. No, señor presidente. Lo que debe preocuparnos en esta ocasión es solventar perdurable y fecundamente el problema gravísimo del distanciamiento entre los argentinos —masas todas argentinas—; es borrar el abismo todavía existente es crear las condiciones jurídico-políticas que aseguren: primero, la defensa de la democracia pública y de la democracia interna de los partidos políticos, sin res-

tricciones a la libre expresión de las ideas y de los ideales, todos cuyos partidos deben estar conformados al modo de vida democrático, inherente, diría yo, a la nacionalidad argentina, con respeto de la personalidad del hombre y franca adhesión a la inspiración de enaltecer al ser humano, material y espiritualmente. Esa es una finalidad ínsita de la propia asociación y un mandato inexcusable de la historia de nuestra Nación; segundo, subordinación cierta, auténtica y leal de todos los partidos políticos a esa concepción de la democracia, para lo cual deben cumplimentar de verdad, no en apariencia, sin simulaciones ni retaceos, las normas que sean exigidas por la ley de la materia. Insistimos, pues, que en sus propósitos doctrinarios y programáticos, así como en su funcionamiento interno, para ser reconocidos, los partidos políticos tienen que ser auténticamente democráticos, tanto en el orden de sus ideas y de sus ideales, como de sus prácticas internas. No se concibe, entonces, ni la creación, ni la presencia, ni la subsistencia del partido político con personería reconocida, o pendiente de reconocimiento por el órgano jurisdiccional, si el mismo ha de quedar subordinado a las decisiones de un autócrata, quien, en la realidad de los hechos, directa o indirectamente, fuere autodeterminador de la condición del respectivo partido.

En este punto, el más fundamental por sus probables consecuencias entre todos los involucrados en el estatuto en discusión, no pueden admitirse falsas interpretaciones, y ello es así porque el propio instrumento en consideración tiene su causa-fuente, precisamente, en la experiencia recogida sobre la última dictadura argentina y sobre la conducta de los hombres que la sirvieron, entregados antes y ahora, a ojos vista, a las sordas instrucciones del autócrata y dictador.

No haya, pues, equívocos en la interpretación sobre las condiciones intrínsecas y extrínsecas que deben ofrecer los partidos para el reconocimiento de su personería política. Todo esto que dejo dicho no es sólo un deseo mío sino que está prudentemente determinado, en forma inequívoca y persistente, en todo el contexto del proyecto de la mayoría.

El título I, «Principios generales», capítulo único, fija en el artículo 3, inciso b), como condición de existencia de todo partido, que propugne expresamente el sistema del régimen democrático, representativo, republicano y de los principios y fines de la Constitución Nacional.

En el inciso c) del mismo artículo se exige a los partidos organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos.

En el título II, «De la fundación y constitución», capítulo II, artículo 16, se prohíbe que

los partidos políticos tengan designaciones personales ni derivadas de ellas.

En el título III, «De la declaración de principios, programa o bases de acción política», capítulo I, «De la doctrina y organización», se determina en el artículo 21 que la declaración de principios, el programa o bases de acción política deberán cumplimentar de manera formal y real las exigencias del artículo 3º, inciso b). A su vez, el artículo 22 apartado 1, declara que no cumplen con las condiciones exigidas en el artículo anterior los partidos que, en su doctrina política o por la vía de sus organismos, autoridades estatutarias o candidatos, auspicien o realicen de modo directo actos violatorios de los principios democráticos.

En el apartado 2 del mismo artículo se discrimina, a los efectos del inciso anterior, que se consideren violatorios del régimen democrático la promoción, especialmente, de los siguientes hechos o actos, entre otros: a) concentración del poder político, social o económico; b) partido único; c) la adhesión o elogio a actos violatorios de los principios republicanos producidos por regímenes presentes o pasados; j) la alteración o supresión del principio de la separación de los poderes.

En el artículo 23, capítulo II, «De la carta orgánica y de la plataforma electoral», incisos a), b) y c), se fijan normas de aseguramiento del carácter y finalidad democrática de los partidos políticos, el valimiento jurídico preponderante de la carta orgánica del partido; y la obligación inexcusable del cumplimiento está declarada en el artículo 24, apartado 1, cuando dice que toda carta orgánica y sus modificaciones deberán ser sancionadas por los órganos deliberativos del partido y aprobadas por la justicia electoral nacional en lo que contiene las exigencias del artículo 23, tal como lo dispone el artículo 25.

También en el artículo 34 se refirma la práctica del sistema democrático para la vida interna de los partidos a través de elecciones periódicas para la designación de autoridades y candidatos mediante la participación de afiliados, de conformidad con las prescripciones de la carta orgánica.

La justicia electoral nacional podrá nombrar veedores en los actos electorales partidarios, a pedido de parte interesada, según lo indica el artículo 36.

Por último, el artículo 63, inciso c), eleva a la categoría de causal de extinción de un partido cuando su actividad, a través de la acción de sus autoridades o candidatos no desautorizados por aquéllos, fuere violatorio de los principios fundamentales establecidos en los artículos 3º, 21 y 22. Estos principios son los de afirmación democrática.

He querido reseñar solamente algunos de los dispositivos del proyecto que exige a los parti-

dos profesar la democracia interna y externa. En realidad, toda la contextura del proyecto de estatuto impone esa profesión y esa práctica.

No obstante, siento la inquietud de advertir que la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las otras dos coadyuvantes no han consignado algunas expresiones del proyecto del Poder Ejecutivo; pero no debe entenderse por ello que han descartado las inspiraciones conexas a dichas expresiones. Me refiero a aquellas expresiones excluyentes en cuanto al reconocimiento de partidos políticos que auspiciaren en forma directa o indirecta, o llevaran a la práctica, inclusive en su organización y vida interna, cualesquiera de las condiciones o características inherentes a los regímenes autocráticos o totalitarios; expresión legislada en el proyecto del Poder Ejecutivo en los artículos 3º, apartado 2; 19, apartados 1, 2 y 3, y 86, inciso c).

Confieso que, con arreglo a nuestra experiencia de los últimos decenios, yo hubiera preferido la incorporación de esta expresión contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo. Ella tiene una gran fuerza pedagógica, directa, inequívoca, porque nos plantea a lo vivo, sin cortes filológicos, una tremenda y aleccionadora realidad, soportada por los hombres libres y democráticos, muchas veces con dolor del cuerpo y siempre con dolor del espíritu. Era justa y necesaria la inclusión de esa expresión, en particular ahora que se especula con el retorno del dictador y se exalta otra vez el inconsciente y repulsivo sometimiento colectivo, tal como en el pasado irreversible.

No obstante, no llego a discrepar en el fondo con el proyecto en consideración, porque en realidad la prohibición legal de la existencia y actuación de los partidos autocráticos o totalitarios está incorporada en tanto se previenen exigencias de índole democrática muy explícitas en el proyecto de la mayoría, ya que se involucra la repulsa de los partidos autocráticos y totalitarios en orden a un reconocimiento o aceptación de su personería. En otros términos, en relación a la antítesis irreconciliable entre democracia y antidemocracia, el régimen autocrático o totalitario entra en la última clasificación, esto es en la antidemocracia, expresión que también comprende a otros regímenes que tampoco son democráticos. En una palabra, la antidemocracia es el género, y la autocracia y el totalitarismo son la especie. De esta suerte, pues, en las prohibiciones y exclusiones del proyecto mayoritario deben considerarse comprendidos a los partidos autocráticos y totalitarios.

Aquí creo que conviene decir algo relacionado con las proscriptciones. Mucho se ha hablado y declamado en el seno de la Honorable Cámara y fuera de ella, y desde mucho tiempo atrás, contra las proscriptciones aplicadas al peronismo como partido político en oportunidad de algunos de sus intentos de intervenir o de

coparticipar con otros núcleos en el proceso electoral. La primera proscripción fue establecida por la Revolución Libertadora, que lo había depuesto del gobierno. La segunda proscripción fue decretada por el presidente Guido. En el gobierno de Frondizi no hubo proscripción preelectoral del partido peronista propiamente dicha, pero sí hubo una cosa peor: se anularon las elecciones provinciales, realizadas simultáneamente con las nacionales, en las que había triunfado el peronismo.

Yo encuentro que ambos actos gravísimos —proscripción del partido peronista y anulación de las elecciones donde había triunfado el peronismo— tienen la misma finalidad concreta; pero encuentro realmente censurable la anulación de los comicios referidos. No obstante, hemos escuchado de ciertos sectores una sostenida diatriba contra las proscripciones, interin guardaban un absoluto mutismo sobre la anulación de las elecciones.

Pero no era esto lo principal de mi preocupación en orden a las proscripciones. Quiero advertir que ellas comprendían al partido peronista, pero no comprendían a los ciudadanos peronistas. Ellos pudieron votar, y lo hicieron en gran proporción para que ascendiera Frondizi a la presidencia de la Nación, y luego para favorecer a otros partidos. No en balde actúan en esta Cámara los integrantes de un sector que gusta llamarse peronista y que no habrían sido ungidos sin los votos de los pretensos abstendidos del peronismo *anvage*. El distinguo obtiene su importancia, porque nos está señalando esto que es fundamental y sobre lo que debemos reflexionar, porque puede ser la senda de la paz espiritual entre los argentinos. En realidad, nadie que se precie ha querido en nuestro país que fueran privados de los derechos políticos los peronistas. El problema fue siempre planteado desde otro enfoque, en orden a las encrucijadas por que ha pasado el país y por las que parece querérselo hacer pasar todavía. Lo que muchos argentinos queremos no es que los peronistas sean excluidos de la vida cívica, sino que no sigan ungidos a un sistema político-social fundamentalmente incompatible con la auténtica, con la fecunda democracia.

Si el peronismo se torna en un partido realmente democrático, vale decir, se libera de su conducción autocrática y se ajusta con lealtad y limpieza a las exigencias previstas en el proyecto de ley de la mayoría, que estamos discutiendo, nosotros, algunos casi al llegar a los cincuenta años de militancia socialista, tan honrada y tan honrosa la que más, nos sentiríamos felices y los saludaríamos, entonces sí, como el comienzo del proceso de la verdadera y perdurable reconciliación entre los argentinos.

A eso hay que llegar, y quiera el destino que así sea. Entonces podremos decir y repetir fuertemente, emotivamente, acaso hasta con desme-

dro de nuestra legítima ambición de crecimiento, que ansiamos que los ciudadanos que hoy se llaman peronistas se organicen en un partido político ajustado sinceramente a las exigencias del estatuto que sancione el Congreso de la Nación. Si con verdad se avienen a esa conformación legal, apreciados los hechos por jueces argentinos y no por decretos ejecutivos, se marcará la gran fecha del reencuentro nacional, tanto más promisorio si cada grupo político aparece con su propio bagaje de doctrina y programa diferenciados, sí, pero todos conducidos por el deseo de ponerse al servicio de la República. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ritacco.

Sr. Ritacco. — Señor presidente: el hombre es un animal político, decía el filósofo 384 años antes de Cristo; y la política, según la definición clásica, es la ciencia y el arte de gobernar: ciencia, porque se deben estudiar científicamente los problemas, y arte, porque se deben aplicar armoniosamente los principios científicos. Y como en una democracia auténtica son los partidos políticos los órganos naturales que orientan la opinión pública y los únicos que pueden elegir candidatos, llegamos a la conclusión de que los partidos políticos son los órganos más importantes de la democracia.

Sarmiento decía que los partidos políticos son «la opinión asociada, organizada en grupos». Para Clemenceau «la democracia es tanto más perfecta cuanto menos imperfectos son los órganos que la encauzan e interpretan». Aramburu, en los fundamentos del Estatuto de los Partidos Políticos aprobado por el decreto 19.044/56 decía que los partidos políticos son «órganos esenciales de la democracia representativa, destinada a encauzar y orientar la voluntad popular mediante el contrato entre el elector y el elegido». Pero ese contacto entre elector y elegido no se ha realizado ni se realiza hoy plenamente en nuestro país, por lo cual los partidos políticos sólo orientan parcialmente la voluntad popular.

Sáenz Peña, por su parte, hizo lo que correspondía a su época. En el mensaje que enviara a este Congreso el 11 de agosto de 1911 acompañando al proyecto de ley electoral, decía que había que «garantizar el sufragio y crear al sufragante». Agregaba que «la colectividad tiene el derecho de exigir al ciudadano que no deje inactiva la facultad de votar, pues de su buen o mal desempeño depende el bien inapreciable del Estado. Las leyes electorales resultan de la combinación de aquellos medios que en determinado momento pueden ser aconsejados como convenientes y oportuno para asegurar la libertad personal del elector, la emisión consciente del voto y la perfecta verdad del escrutinio que condensa la voluntad popular». Y añadía, como epílogo, que «cada día tenía su

tarea y su necesidad». El cumplió con su tarea y así lo ha reconocido la historia.

De estos conceptos compartidos por todos los ciudadanos democráticos surge la gran importancia de los partidos políticos y sobre todo de su buena organización, que es a lo que aspiramos con el estatuto en debate. La democracia otorga al gobernante el poder institucional, y el gobernante no tiene poder, ni fuerza moral, ni razón, cuando su autoridad no emana de las fuentes de la soberanía, que es la voluntad del pueblo. Cuando un gobierno no es fiel representante de la opinión pública, se produce entre el poder institucional y el político un divorcio que puede dar origen a la anarquía, al desorden y al despotismo.

Los partidos políticos no deben ser sólo un mecanismo electoral, sino escuelas de civismo y de capacitación cívica, sobre todo para la juventud. Ya desde la edad joven, desde la edad plástica, se debe advertir que la democracia es el mejor sistema de gobierno y que en ella todo el mundo tiene igualdad de posibilidades y de oportunidades.

Todo esto lo comprendió históricamente Sáenz Peña y porque tuvo fe en el porvenir de los partidos políticos les confirió la exclusividad de las candidaturas. Pero los partidos políticos en la Argentina no han cumplido con la misión histórica que les confió el prócer y no han sabido captar a la población, puesto que sólo el 8 por ciento de los ciudadanos actualmente está afiliado a los partidos políticos y el 92 por ciento de la ciudadanía se mantiene alejada de los partidos políticos. Por eso cuando se dio a publicidad el anteproyecto de la Comisión de Asuntos Constitucionales nosotros opinamos que debía incluirse un artículo por el cual se autorizara a los partidos a tener en sus listas candidatos extrapartidarios. Por desgracia, en el proyecto final, se ha excluido esta cláusula, con la cual se le daba participación al 92 por ciento de los ciudadanos que forman el sector independiente, sector que en muchos casos es el más progresista y el más capaz.

Es bueno recordar el desarrollo de los partidos políticos y también los proyectos de estatutos de los mismos que se han presentado a la Honorable Cámara. Muchas veces mirando hacia atrás se descubre el mejor rumbo para seguir hacia la democracia que deseamos, así como el ingeniero toma referencias a su espalda para colocar su teodolito cuando desea medir con exactitud un punto ubicado hacia adelante.

En el siglo pasado los rudimentos o esbozos de partidos políticos que existían eran en realidad sectores de opinión, organizados por *élites* que arrastraban a la acción cívica y aun a los comicios solamente a una parte de la ciudadanía. Fue el radicalismo quien incorporó a la vida cívica a la pujante clase media y también a una parte de los sectores populares; pero poco tiempo

después tanto la clase media como esos sectores populares descubrieron que habían caído de nuevo en poder de *élites*, o lo que es peor, bajo la férula de caudillos que estaban muy lejos de representar lo mejor del país y que apelaban a cualquier artimaña para mantenerse en las directivas partidarias y para ser candidatos a cargos electivos. Por eso se alejaron de los partidos políticos algunos de los hombres más idealistas y es por eso que el radicalismo no cumplió con el papel que le había adjudicado la historia. De esto no se puede culpar únicamente al radicalismo, porque sucedía, y sucede hoy en casi todos los partidos, y acaso sea este el factor principal por el cual solamente un 8 por ciento de la ciudadanía actúa activamente en política y por el cual se alejan de ella sectores progresistas.

Pocos años después de la ley Sáenz Peña empezaron las inquietudes para organizar efectivamente la vida interna de los partidos políticos. El primer proyecto presentado en esta Cámara el 24 de junio de 1925 fue del ex diputado José Antonio Amuchástegui, quien proyectó un estatuto en el que se fijaban normas para que las autoridades de los comités y los candidatos fueran elegidos por el voto directo de los afiliados. Además, los partidos políticos debían llevar bien registrada su contabilidad, tener un programa definido y fijar una cuota obligatoria para los afiliados.

En dos artículos de ese proyecto se incluían disposiciones que aún hoy serían tema candente para esta Cámara. El artículo 7º establecía que los legisladores, concejales u otros representantes elegidos por el pueblo estaban obligados a acatar y cumplir el programa sancionado por el partido al que pertenecían —y conste que era en el año 1925—. Y el artículo 8º decía que si algún representante fuera expulsado del partido que lo había llevado a ocupar el cargo, cesaría *ipso facto* en su función. Este tema debería ser ampliamente debatido en esta Cámara, aunque pienso que no es ahora la oportunidad más conveniente.

Desde esa época en adelante se sucedieron las tentativas para dictar normas que mejoraran las prácticas dentro de los partidos políticos, y el 14 de julio de 1927 Alvear y Tamborini enviaron a esta Cámara un proyecto en el que se insistía en que los partidos políticos debían tener un programa partidario sancionado, se establecía la elección de los candidatos en asamblea pública y el control de la contabilidad; además los padrones serían secretos. Pero ese proyecto también muere, como el de Amuchástegui, sin ser tratado jamás en esta Honorable Cámara.

Luego vinieron las normas decretadas por el general Uriburu después de la revolución de 1930, que terminaron llevando al gobierno a hombres que no eran fiel expresión de la voluntad popular.

Sin embargo Uriburu decía: «Debemos asegurar la auténtica expresión de la voluntad popular»; pero al mismo tiempo afirmaba: «Las autoridades federales no deben otorgar personería a agrupaciones que carezcan de significación popular o de organización permanente o programa gubernamental concreto.» Esto estaba evidentemente dirigido hacia el radicalismo, que en esa época era indudable mayoría en el pueblo argentino.

Durante los trece años del gobierno conservador se sucedieron muchos proyectos, pero nunca fueron tratados en esta Honorable Cámara, porque no existía el clima propicio, ya que no se daba una auténtica democracia en el país.

Los proyectos presentados durante los gobiernos conservadores fueron varios.

Adrián Escobar, en proyecto del 17 de mayo de 1933, propugnaba entre otras cosas el voto directo para elegir autoridades y candidatos y voto indirecto para elegir candidatos a diputados nacionales y autoridades provinciales y nacionales; disponía que se llevaran libros de contabilidad, sellados y rubricados por los juzgados electorales, y creaba por primera vez la figura jurídica de «corrupción electoral», a la cual se imponían severas penas.

José Nicolás Matienzo, en un proyecto presentado el 18 de junio de 1933 al Honorable Senado, propiciaba también el voto secreto y directo para la elección de autoridades y de candidatos partidarios y padrón abierto desde seis meses antes de la elección hasta tres meses después.

Justo y Melo, el 8 de septiembre de 1933, proyectaban el voto directo para la elección de autoridades tanto locales como centrales y establecían número mínimo de adherentes para formar un partido político; también imponían penas al fraude y a la corrupción electoral dentro de los partidos políticos, y proponían que se castigase a aquellos que ofrecían dádivas para obtener adeptos. En este proyecto, con la perspectiva que nos da el tiempo, yo diría que parece campear un deseo de mejorar las prácticas de aquel entonces.

Alfredo Palacios presentó al Senado un proyecto el 17 de mayo de 1938, en el que consideraba ilícito todo aporte de la Nación, de las provincias o de las municipalidades a los partidos políticos, así como el aporte de los empleados públicos. En su artículo 10 imponía penalidades para evitar la violencia y el fraude en el acto comicial, o las promesas de puestos o la distribución de bebidas alcohólicas o de dinero. Reprodujo este proyecto el 16 de mayo de 1940 y el 29 de mayo de 1942.

Todos estos proyectos no prosperaron por los motivos que mencioné al comienzo de mi exposición.

Arquímedes Soldano presentó el 21 de noviembre de 1938 un proyecto muy completo.

Daba normas para la constitución de los partidos políticos y exigía que los ciudadanos supieran leer y escribir para ser afiliados; la secretaría electoral debería llevar ficheros y confeccionar los patrones partidarios, se controlaban los aportes y la contabilidad de los partidos, las actas y las convenciones, y las elecciones internas serían por voto directo. Se permitían ya en el año 1938, los candidatos extrapartidarios, pero elegidos por el voto directo de los afiliados. El partido caducaba si no tenía en una elección el cuarenta por mil del padrón de electores inscritos en el registro.

Luego hubo proyectos presentados por Armando Antille, en esta Cámara, el 29 de mayo de 1940; Santiago Fassi, el 1º de agosto de 1940; Jorge Walter Perkins, Aníbal Arbeletche y Julián Sancerni Giménez, presentado a esta Cámara el 2 de septiembre de 1941.

Un proyecto de código político fue presentado también a ésta por el ministro del Interior Culiatti en 1943. En éste se fijaban normas para las mujeres adherentes. Ya se estaba creando el clima para el voto femenino. También con respecto al registro de afiliados, para las elecciones de autoridades en la asamblea, con la presencia del treinta por ciento de los miembros, y el voto directo para autoridades centrales y candidatos. Todos estos proyectos mencionados, por los motivos invocados no fueron jamás tratados en esta Honorable Cámara.

Todos recordamos que, después de la revolución del 43, Ramírez disolvió los partidos políticos, con su ministro Perlinger, por el decreto 18.409 del 31 de diciembre de 1943. Caído Ramírez, el presidente Farrell nombró una comisión especial redactora de un estatuto de los partidos políticos. Esa comisión especial —esto ya es historia más reciente— estaba formada por Villegas Basavilbaso, Rodolfo Medina, José Manuel Astigueta y, como secretario, don Segundo Linares Quintana. Poco después Farrell —era la etapa de las buenas intenciones— derogó el decreto de Ramírez sobre los partidos políticos por otro, el número 27.246 del 20 de octubre de 1945, y casi enseguida puso en vigencia el estatuto de los partidos políticos que había elaborado esa comisión especial que era bastante aceptable.

Como dije antes, era la etapa de las buenas intenciones. Pero poco antes de la elección de Perón, este estatuto fue derogado por otro decreto de Farrell. No le convenía a Perón, que se encontraba en la necesidad de formar un partido político urgentemente, el conjunto de normas que reunía este estatuto de los partidos políticos de la comisión especial.

Es interesante analizar aquel estatuto porque va fijando las bases para el que nosotros estamos considerando y muchas de sus normas han sido adoptadas por éste, que saldrá de una vez de este Parlamento de la proporcionalidad. Creaba entre otras cosas la Corte Federal Elec-

toral, parecida a la Cámara Nacional Electoral que rige hoy y que regirá, de acuerdo con el nuevo estatuto de los partidos políticos, y los juzgados federales electorales.

Imponía el voto secreto, directo y obligatorio para la elección de autoridades partidarias y de candidatos. Además, daba representación a las minorías internas, cosa que no hace el estatuto que estamos tratando y que me parece debe ser incorporado como noma en el artículo correspondiente.

El artículo 60 de aquel estatuto dice: «Los afiliados que ejerzan cargos partidarios y aceptasen un empleo público quedan, por ese solo hecho de la aceptación, separados de los cargos partidarios.»

Ese estatuto fue enviado por Perón al Honorable Senado el 26 de julio de 1946. Aprobado por aquel cuerpo, pasó a esta Honorable Cámara. Pero ya se había terminado la etapa de las buenas intenciones, y se advirtió que no convenía un estatuto que tenía un artículo 60 como el que he leído, porque ya en ese momento eran obligados a afiliarse los empleados públicos y ya éstos comenzaban a actuar en las organizaciones partidarias y estaban en camino de formar el partido peronista.

Pasaron los diez años de la dictadura de Perón y no se volvió a hablar jamás del estatuto de los partidos políticos, a pesar de que hubo una gran cantidad de pedidos de pronto despacho, sobre todo de los diputados López Serrot y Edmundo Zara.

Pasó la etapa peronista y el país siguió sin estatuto de los partidos políticos; y esto sucedía porque no existía ningún afecto del dictador hacia los partidos políticos, malquerencia que mostró en muchas oportunidades, no solamente no dejando pasar por el Congreso Nacional, que dominaba, el estatuto de los partidos políticos que él mismo había enviado, sino en otras circunstancias, que demuestran cabalmente la falta de afecto de Perón hacia los partidos políticos.

Hay un hecho que demuestra fehacientemente lo que digo. Después de los sucesos de junio de 1955, ya a fines de agosto, en aquella oportunidad en que habló de colgar cinco por uno, también ofreció su renuncia, lógicamente verbal, pero no al Honorable Congreso como correspondía de acuerdo con la Constitución, ni tampoco a su propio partido político por el que sentía tanto desprecio como por los otros. Lo envió a la CGT, convalidando de esa manera a dicha organización como a la institución política más importante del país. Por desgracia todavía, hoy, por la blandura del gobierno y de algunos partidos políticos, la CGT sigue siendo el organismo político más importante del país y la consecuencia de 10 años de eliminada la dictadura peronista, están manteniendo el mecanismo político de la CGT; no sólo los trabajadores peronistas, sino también aquellos que están muy lejos de serlo, y que tienen que contribuir para que los diri-

gentes políticos de la central obrera sigan haciendo esas campañas pro retornos imposibles.

Luego —y esta es otra demostración terminante de la falta de calor de Perón y del conglomerado peronista hacia los partidos políticos— se dictó la ley 13.645, del 30 de septiembre de 1948, con la cual se trababa la acción de los partidos políticos. Ya esto es historia más reciente, y todos recordamos que mediante esa ley no se reconocía a un partido político hasta tres años después de su fundación. También todos recordamos que ni siquiera se reconocían las fusiones de partidos políticos, ni las federaciones, ni las uniones de partidos políticos hasta tres años después de su fundación, porque se los consideraba como recién fundados, como en los casos en que dos partidos deseaban unirse para ir a una lucha común contra el dictador, hecho que, evidentemente, no le convenía.

Además había una cláusula que decía que serían disueltos los partidos políticos que no presentaran candidatos o no concurrieran a un acto electoral.

Este recuerdo del totalitarismo o del amor del dictador hacia el partido único, que ya pronto iba a tener milicias, es lo que quizá haya tocado a los legisladores peronistas, que se oponen tan firmemente a que en ninguna parte del estatuto que estamos considerando se empleen los términos «autocrático y totalitario». Por consentimiento de la mayoría de los bloques se eliminaron esos términos y en mi concepto coincidiendo con lo que muy bien dijo hace unos instantes el señor diputado Rozas, deberían incorporarse para tranquilidad de los demócratas argentinos, cosa que vamos a pedir en la discusión en particular.

En verdad deseamos la incorporación al proceso democrático de todos los que se burlaron de la libertad y de la democracia cuando ejercieron el gobierno, pero ellos deben reconocer sus errores y no pretender que la ciudadanía crea que fueron un dechado de virtudes, porque si proceden así y siguen haciendo la apología de todos aquellos hechos bochornosos, lógicamente se puede sospechar que más adelante pueden volverlos a poner en práctica, por lo cual nosotros deberíamos empezar a defenderlos desde ahora.

Además, no deben jugar a que es floja la memoria de los ciudadanos democráticos del país, porque se podrán olvidar o perdonar algunos hechos y atropellos de entonces, pero conviene, para un futuro promisor de la democracia argentina, que no se olviden otros hechos de aquella época y que se incluyan en el estatuto las cláusulas necesarias para que tales abusos no se vuelvan a repetir.

Después vino la gloriosa Revolución Libertadora, durante cuyo transcurso en el seno de la Junta Consultiva Nacional se discutió ampliamente un proyecto de estatuto de los partidos políticos. De él surgieron muchas de las cláu-

sulas que aparecen hoy en el estatuto que estamos tratando.

En el seno de la Junta Consultiva Nacional se dijeron cosas muy interesantes y se aconsejó también la creación de la justicia electoral o, en su defecto, se ampliara la competencia de la justicia federal para intervenir en la vida interna de los partidos políticos.

Así mismo, en el proyecto que trató la Junta Consultiva Nacional se solicitaba la colaboración del Poder Ejecutivo —por primera vez en la vida del país— para solventar los gastos de los partidos políticos, mediante la impresión de boletas, el uso gratuito de los servicios del correo y el telégrafo, de espacios radiales y televisados, como así mismo la liberación de gravámenes a los partidos políticos y un aporte en dinero después de cada elección de acuerdo con los votos obtenidos por cada partido político. También se dijo entonces que los partidos totalitarios debían ser proscritos.

Hay conceptos vertidos en los debates de la Junta Consultiva Nacional que merecen ser reproducidos. Por ejemplo, en la página 722 del Diario de Sesiones se puede leer lo que dijo uno de sus miembros: «El partido totalitario está esencialmente fundamentado en el liderazgo, basado en una triple estupidez referida a ese caudillo y a ese dirigente: que es omnisciente, es decir, el único que puede saber lo que otros no pueden saber; que es omnipotente, pues se le considera como el único que puede hacer lo que otros no pueden hacer; y que es justo en cuanto es el único que puede sentir lo que otros no pueden sentir. Y es así, sobre este fundamento absolutamente absurdo, como resulta esta trágica realidad contemporánea sufrida en cuerpo extraño y en nuestro propio cuerpo a través de los Hitler, los Stalin, los Mussolini, los Franco y los Perón.»

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Está en el uso de la palabra el señor diputado Ritacco.

Sr. Ritacco. — Aquellas palabras, que no necesitan comentario, fueron pronunciadas —diríjase a él, señores diputados— por el actual canceller, doctor Zavala Ortiz.

También en la misma Junta Consultiva se dijo: «Nosotros, cuando éramos legisladores, hemos convivido con los legisladores de la dictadura. Nadie hablaba peor de Perón y de su mujer que aquéllos en sus confidencias, en sus revelaciones personales. Nadie pensaba peor de los excelsos líderes que ellos porque los conocían y los veían tal como eran. Muchas veces nosotros pensábamos: ¿por qué no nos sacan de nuestros asientos?, ¿por qué no nos dejan decir lo que decimos? No había nada más que una explicación. No les faltaba valor personal para agredirnos, pero tenían conciencia de nuestra razón. Había en cada uno una inhibición moral porque sabían que nosotros obrábamos bien, porque revelábamos un pensamiento que ellos no

se animaban a formular. Sin embargo, el partido único, a través de un sistema de fuerza, daba la apariencia de una absoluta y total coincidencia con el líder.» (Página 723 del Diario de Sesiones de la Junta.)

También esas fueron palabras del actual canceller Zavala Ortiz, que deberían repetirse en esta circunstancia, empleando los mismos métodos sinceros que se empleaban en aquel entonces, cuando se luchaba realmente por la libertad y por la democracia. Es lástima grande que no se apliquen hoy estas palabras, porque el ciudadano está totalmente escéptico, sobre todo hacia los dirigentes políticos, y ese escepticismo puede ser fatal para la democracia. Es necesario que de una vez por todas se emplee la verdad para luchar por nobles ideales políticos.

El estatuto del gobierno de Aramburu fue aprobado por el decreto...

Sr. Pedrini. — ¡Qué va a ser gobierno el de Aramburu!

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvese no interrumpir, señor diputado Pedrini.

Sr. Ritacco. — Fue el que libertó al país después de los diez años de la dictadura peronista. ¿Le parece poco?

Sr. Pedrini. — Fue el que fusiló.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados. La Presidencia ruega al señor diputado Ritacco se sirva dirigirse a ella.

Sr. Ritacco. — De acuerdo con ese estatuto del gobierno de Aramburu los padrones debían ser públicos; se prohibían los aportes a los partidos políticos de las organizaciones patronales, obreros y profesionales; se contemplaban penas para los ciudadanos con doble afiliación, de hasta cinco años de inhabilitación de los derechos políticos.

Sr. Pedrini. — La pena de muerte se decretó.

Sr. Ritacco. — Vea, señor diputado; a propósito de la pena de muerte voy a decirle lo siguiente. Cuando Castelli fusiló a Liniers, también lo culpaban, lo criticaban y muchas veces lo mencionaban como al asesino. Y Castelli contestó con estas palabras: «Los que dicen que soy asesino son los que disfrutaban de la libertad.» Acaso Aramburu tenga que decir algo parecido a los que están en la posición de los integrantes de la bancada justicialista.

Sr. Serú García. — En tiempos de Castelli no regía la Constitución, que prohíbe el fusilamiento por causas políticas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvese no interrumpir, señor diputado Serú García.

Sr. Ritacco. — Aquellos que dicen esas cosas son justamente los que hoy disfrutaban de una libertad que no merecen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Señor diputado Ritacco: sírvase dirigirse a la Presidencia y evitar los diálogos.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Ritacco.

Sr. Ritacco. — En 1960, como dijo el señor diputado Belgrano Rawson, se dicta la ley 15.793, sobre régimen de franquicias y subvenciones para los partidos políticos; franquicias postales, telegráficas y telefónicas; pases libres para los dirigentes —cinco para todo el país y diez para cada distrito electoral—, espacios sin cargo en radios y canales de televisión, y diez pesos por cada voto obtenido. Todo esto ha sido recogido en el proyecto que estamos tratando, en el cual se aumenta a veinte pesos el importe por voto obtenido, lo cual me parece bien.

En cuanto al resto de la historia de los estatutos de los partidos políticos, diré que los aprobados durante los ministerios de los doctores Adrogue y Martínez tomaron, en esencia, muchas disposiciones de los anteriores, por lo cual no son necesarios mayores comentarios al respecto.

Consideramos que constituye una real necesidad dictar un estatuto de los partidos políticos, con el fin de vigorizar a los partidos y de democratizarlos en su vida interna.

Aunque nuestra Constitución no se refiera explícitamente a los partidos políticos, los reconoce implícitamente al permitir por el artículo 14 la asociación de ciudadanos con fines útiles.

El estatuto es necesario para una buena organización política, porque es menester que existan normas que rijan la vida interna y externa de los partidos políticos. Pero es preciso evitar una exagerada ingerencia del Estado, que es lo que sucede, a nuestro juicio, en el proyecto que estamos considerando.

Por otra parte, deben ser satisfechos por la justicia los reclamos lógicos de los afiliados. Los partidos políticos son entidades de interés o de servicio público, y la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejan en su vida interna. Además, los afiliados tienen derecho a defenderse ante la justicia cuando son objeto de arbitrariedades de las autoridades partidarias.

Debe haber un estatuto que obligue a los partidos políticos a cumplir con ciertos requisitos como, por ejemplo, tener una declaración de principios, para que la ciudadanía pueda orientarse conociendo la doctrina de ese partido político, un programa de acción política, para que se sepa cómo se llevarán a la práctica los principios que se fijan en la declaración, y una carta orgánica para garantizar la vida interna de los partidos.

Pero tienen derecho a que se les otorgue la personería jurídica y una personería política para ser respetados y reconocidos como sectores de opinión.

En una democracia, las instituciones y las personas jurídicas o físicas deben estar sujetas a normas que les garanticen derechos, pero que también exijan ciertas obligaciones. El doctor Carlos Ortiz, en una conferencia pronunciada en la Escuela Naval Militar, cuya inserción solicito en el Diario de Sesiones, dice que la formación de grupos es obra de la organización y que organizar es sujetar las partes integrantes de un todo a reglas de número, de orden, de armonía y de dependencia. La organización es un proceso dinámico que persigue el funcionamiento armónico de las partes para lograr la finalidad buscada por el todo. Y el doctor Ortiz se refiere a las reglas necesarias para que la ciudadanía se agrupe formando partidos políticos con la suficiente representatividad.

Esto es lo que tratamos de solucionar con el estatuto en debate y para que se incorpore a los partidos políticos ese 92 por ciento de la ciudadanía que se mantiene alejada de ellos por no encontrar el clima propicio para desarrollar sus inquietudes.

En los fundamentos del Estatuto de los Partidos Políticos de la Revolución Libertadora que he citado se decía que los inconvenientes en el seno de las actividades partidarias pueden trascender al ámbito de las actividades oficiales, lo que es cierto y peligroso. Si un partido no es democrático en su vida interna no lo será cuando llegue al gobierno, y ese peligro lo debemos salvar agregando al despacho de la mayoría las cláusulas pertinentes.

Hubiera sido mejor tratar este estatuto un poco más alejados en el tiempo de las próximas elecciones de marzo a fin de que ni los intereses partidarios ni la pasión influyeran en el ánimo de los legisladores. Deberíamos haberlo tratado cuando se tenía más fe y más confianza en el actual gobierno y no en un instante en que se habla de las vueltas y revueltas de Perón. De esta demora no hay que culpar al Poder Ejecutivo, que nos remitió el proyecto el 19 de marzo, pues el atraso es atribuible a los legisladores, que no lo trataron ni en las sesiones ordinarias ni en las de prórroga.

Este bloque votará favorablemente el despacho de la mayoría, pero tratará de insertar algunas modificaciones en algunos de los artículos, que juzgamos muy importantes.

Deseamos y tenemos la esperanza de que este estatuto del Parlamento de la proporcionalidad inspire confianza a todos los partidos políticos; inspire confianza también a los ciudadanos independientes que muchas veces son los más patriotas y los más capaces, para que se incorporen a los partidos políticos y se aumente ese porcentaje ya citado del 8 por ciento que actúa direc-

tamente en política. Si esto sucede, este estatuto del Parlamento de la proporcionalidad será como un faro que marcará un comienzo luminoso para la democracia argentina.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Señor presidente: mi firma acompaña a la de los colegas que suscriben el despacho de la mayoría precedida por una reserva que advierte acerca de la existencia de disidencias parciales. Significa eso mi conformidad con el objetivo o propósito central de la iniciativa, esto es, con la estructura general del proyecto de ley que comenzamos a considerar, pero sin perjuicio de que en la discusión en particular señale las discrepancias.

No he redactado las disidencias con el despacho de la mayoría porque en alguno de los dictámenes en minoría aparecen recogidas mis preocupaciones. Por esa razón me he abstenido de confeccionar el pliego de observaciones, convencido de que en este asunto, cuanto menos papelería impresa, tanto mejor.

Nuestro partido ha estado siempre, desde hace años, en favor de la sanción de un estatuto de los partidos políticos, de la vigencia de un cuerpo legal de pocas y muy claras disposiciones que asegure real y efectiva democracia en la vida interna de las agrupaciones, como así mismo que establezca las condiciones necesarias para que los fondos que reciben las agrupaciones políticas sean de limpios orígenes y administrados con corrección en función de la labor cultural y ciudadana que deben cumplir.

El proyecto que estudia la Honorable Cámara se compone de 86 artículos, vale decir, es un proyecto extenso, de mucho detalle que anticipa lo que será materia reglamentaria. Mi voluntad hubiera sido hacer una cosa distinta, que se acomodara mejor a los propósitos que persigo, pero he aceptado el despacho en general porque lo estimo bueno en lo fundamental y merecedor del debate en el que, estoy seguro, se le introducirán enmiendas que lo mejoren.

Recuerdo de mis lecturas de Ihering, el gran maestro alemán, que mientras la ley duerme los hombres elaboran el derecho. Si algunas leyes no pueden dormir, ni siquiera pequeñas siestas, son las de tipo político, porque la política es asunto en permanente cambio, muy fluido. Las leyes políticas tienen que moverse continuamente, recogiendo las nuevas realidades para traducirlas en el plano de la juridicidad. En cuanto estas leyes duermen un poco más de la cuenta, quedan atrasadas y no sirven para nada.

Esto explica también la razón por la cual tales leyes no se dictan para un porvenir lejano, sino que contemplan una realidad de momento, aunque sin perjuicio de algunos ingredientes de futuro. Son, como aquí se ha anticipado, leyes para periodos históricos cortos, perfectamente delimitados; constituyen, como lo dijo el señor

diputado Serú García, normas de juego para ciertas circunstancias de la vida política de la Nación y, en consecuencia, de la acción de los partidos políticos como organizaciones esenciales de la democracia.

Si en algo vale poco la experiencia extranjera, incluso la de países cercanos al nuestro, y por tanto muy vinculados por la lengua y por la historia, es en el plano de las leyes de tipo político. No acepto el ejemplo que algunos han recordado, al pasar, de los Estados Unidos, pues en este país los partidos políticos son desorganización y corrupción. Tamany Hall y los «pasilleros» son productos norteamericanos. De modo que lo que es propio de los Estados Unidos, sus costumbres políticas, no sólo no nos sirven para nada sino que debemos rechazarlas por inconvenientes. Felizmente entre nosotros, sin perjuicio de algunos episodios desagradables, los empresarios del capital petrolero, del eléctrico y de los grandes trusts internacionales no han llegado a operar a ojos vistas ni a gravitar decisivamente, como en los Estados Unidos, dentro de la vida de los partidos y de las convenciones que proclaman los candidatos.

Hay ejemplos en el mundo que a mí, personalmente, me cautivan. Son frutos de una larga y en ocasiones dolorosa experiencia histórica que ofrecen hoy, a los partidos políticos y a las luchas cívicas, en niveles superiores. Mencionaré a los países nórdicos y a Bélgica, naciones en que los partidos políticos admiten la afiliación colectiva de los gremios de trabajadores y, también, la afiliación colectiva de las cooperativas. Otro tanto ocurre en Israel. Y en Inglaterra, nación de la que algunos argentinos copiaron lo malo y lo muy malo pero olvidaron lo bueno que en ciertos aspectos distingue a los ingleses, como en materia política, en la que los partidos también aceptan la afiliación de los gremios obreros, la afiliación colectiva de los sindicatos. El partido laborista inglés está integrado por afiliados individuales y por afiliaciones colectivas de los gremios, situación esta última en la que los trabajadores aceptan que el partido les descuenta las cotizaciones mientras no haya una manifestación de voluntad en contrario.

Yo soy partidario de la actuación política de los gremios. Lo digo con toda claridad, porque estimo que la acción política de los sindicatos afiliados al partido de los trabajadores, que es el que representa, constituye una expresión de cultura cívica y política.

Claro, señor presidente, que no me atrevo a proyectar medidas en el sentido que dejo indicado porque sé que el grado de desarrollo político de nuestro país todavía no permite llevar a la práctica iniciativas de esta naturaleza. No olvido que en estas horas, en virtud del decreto 12.530 que regula la vida de los partidos, los dirigentes gremiales están proscritos no solamente para ser candidatos a cargos públicos

sino, lo que es mucho más grave, para ocupar puestos directivos dentro de los partidos.

En concreto, señor presidente —vuelvo al comienzo—, que en esta materia, tratándose de leyes políticas de esta naturaleza, tenemos que confiar en nuestra propia fuerza y en nuestra aptitud, en nuestra capacidad para recoger y sintetizar la experiencia del país penetrando con agudeza política en la hora que estamos viviendo, que es la que, en última instancia, debe indicarnos cómo debemos conducirnos en la sanción de estatutos como el que estamos tratando.

No acepto bajo ningún concepto que el estatuto contenga discriminaciones entre partidos grandes y chicos. Sé que ese propósito existió, precisamente en quien colaboró en la redacción del anteproyecto del Poder Ejecutivo —que no fue el ministro— incurriendo en el grave error de copiar para la Argentina disposiciones de leyes norteamericanas, a tal extremo que leyendo el texto del proyecto original no se sabía exactamente en qué idioma estaba redactado: si en inglés o en castellano. Esto no se puede aceptar de ninguna manera.

En la historia de nuestro país y en la del mundo ha habido y hay partidos chicos con un historial y una labor realizada altamente positiva en beneficio del progreso social. Han sido, generalmente, partidos chicos los que abrieron camino a ideas nuevas que, con el correr del tiempo, fructificaron en las grandes multitudes.

En cambio hemos conocido, aquí y fuera de nuestras fronteras partidos grandes a los que recordamos como una verdadera calamidad. Vale decir, que el carácter de chico o de grande no es un elemento para la valoración política, ni para la cívica ni para la electoral.

¿Qué fue en sus orígenes el cooperativismo? Un puñado de pioneros cuyo número se contaba con los dedos de una mano. Unos ilusos, según algunos. Sin embargo, en nuestros días el movimiento cooperativo ha tomado, en la idea y en la práctica, al mundo entero, y hay naciones que se vanaglorian, a justo título, de ocupar un puesto de avanzada en la realización efectiva del movimiento cooperativo. Nuestro actual presidente, el doctor Illia, en discursos que he leído y subrayado con placer ha exaltado el movimiento cooperativo y ha afirmado que la Argentina debe organizarse cooperativamente, con lo que estoy de acuerdo. Esto comporta un cambio revolucionario que ojalá no le dé ningún dolor de cabeza.

¿Qué ejemplos podemos traer del plano confesional? ¿Qué fue en sus primeros momentos la Iglesia Católica Apostólica Romana? Media docena de héroes, mártires de los que cada día quedaban menos porque los devoraban las fieras. Perdían sus vidas en el circo, a donde los arrojaban los paganos. Durante muchos años vivieron en catacumbas, aferrados a su fe, a su creencia que yo no comparto pero que respeto. Se los tenía, con verdad, como un grupito huma-

no pequeñísimo, minúsculo. En su origen no sé si llegaban a media docena los presentes en el momento del nacimiento en el histórico pesebre, y hoy es un movimiento confesional importante.

En los mismos términos podría expresarme del islamismo, de la religión mahometana y de los israelíes, que también comenzaron siendo grupitos insignificantes de hombres y mujeres que, ante la necesidad o demanda espiritual de encontrar explicación a acontecimientos que tenían por escenario al mundo, o que afectaban al hombre, se entregaron a las prácticas de la religión.

¿Desde cuándo el legislador tiene atribuciones para decidir que lo grande es bueno y lo chico es malo? La ley debe asegurar a todos los argentinos, sean pocos o muchos, el derecho a organizarse como cada uno de ellos lo estime conveniente, sin exigirles otra cosa que respeto y acatamiento a las normas que componen la Constitución Nacional y el sistema de convivencia democrático.

Por eso, advirtiendo que se ha elegido un camino equivocado, anticipo que en la discusión en particular impugnaré el artículo que establece un mínimo de afiliados para la constitución de partidos nuevos, ya que, hasta desde el punto de vista moral me lastima que para una empresa espiritual, como lo son en su esencia los partidos, jueguen las matemáticas e interviengan los porcentajes. Lo que hay que exigir a los partidos es democracia efectiva, conducta moral, propósitos levantados, abnegación y espíritu de sacrificio para servir a la República, sin importar que los que hoy —o mañana— están empeñados en esa labor y guiados por nobles ideales, reúnan o no el cuatro, el tres o el dos por mil de los ciudadanos empadronados.

Los partidos socialistas también empezaron siendo núcleos numéricamente insignificantes, pequeñísimos, constituidos por modestísimos trabajadores despreciados por las clases gobernantes, a los que de vez en cuando adhirió algún elemento de las clases altas, como entonces se las llamaba, que ayudaba o aportaba sus conocimientos y sus luces en beneficio de la acción política y gremial de los obreros. Partidos pequeñísimos, es cierto, pero que con una organización modelo constituyeron un ejemplo de disciplina y de conducta para las otras organizaciones políticas. Hoy son partidos gobernantes en países paradigmas para el mundo entero, como los nórdicos, como Inglaterra y como Israel, para no citar sino a algunos de los más importantes.

¿Y acaso el credo socialista, resistido hasta pocos años atrás en que eran muy pocos los que sostenían en alto sus banderas, no ha penetrado en las cabezas y en los corazones de millones de mujeres y hombres? ¿Es que por la vía de los porcentajes podemos cerrar posibilidades hoy, mañana o en el futuro, para que se agrupen

ciudadanos adscriptos a un nuevo credo, a una nueva visión o interpretación de la política, a un nuevo sistema de convivencia o una filosofía social? ¿Es que la historia de las ideas concluye con nosotros? Evidentemente los porcentajes no pueden ser. Es el pueblo, y nadie más que el pueblo, el único con atribuciones incuestionables para juzgar a los partidos. Cuando al pueblo no le gusta un partido no lo vota; cuando le gusta, lo vota. Y este veredicto del pueblo, la *vox populi*, que en esto sí es divina, es la única que debemos respetar y acatar. Es el pueblo, con su adhesión o con su repudio, el que dirá el partido que debe morir y el partido que debe sobrevivir; el que debe proseguir en el sitio en que se encuentra y el que debe agrandarse. En estos años que vivimos partidos grandes se han deshecho mientras partidos denominados chicos, como el mío, siguen muy bien, lo cual implica, por sí sólo, un innegable progreso.

Me parece de buen gusto no detenerme a hacer historia de los partidos. En este recinto no se sienta ni un solo legislador, político militante, que no tenga por lo menos una idea somera de lo que han sido los partidos políticos argentinos y lo que son los actuales; de cómo han actuado, qué intereses han representado o representan y cómo se proyectan históricamente en medio de las fuerzas que actúan en este momento. Y menos aún entrar en el detalle de los proyectos sobre estatutos de partidos políticos porque será una tarea agobiadora e inútil.

Ha habido proyectos por centenares, con la característica, en casi todos ellos, de atender al propósito de reprimir, de perturbar, de coartar las libertades del pueblo. Y esto es lo que no tiene que hacer este Congreso, en el que con justo título se depositó tanta confianza por ser el Parlamento de la proporcionalidad.

No diré nada más, en general, sobre el proyecto. Ya he dicho lo suficiente al expresar que estoy de acuerdo con él. En la discusión en particular señalaré mis discrepancias, las que felizmente no son muchas, sino contadas aunque sustanciales, respecto de ciertas prescripciones que estimo inconvenientes.

Pero no quiero concluir —cumpliendo la promesa de ser breve— sin hacer lo que llamaré una reflexión en voz alta. No será, deliberadamente, ni una opinión ni un juicio, sino una reflexión, como he manifestado, en alta voz, con la esperanza de contribuir al éxito de este debate transitando por los caminos que yo estimo los únicos que nos conducirán al objetivo que todos anhelamos.

Recordarán los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales que muchas veces, desde que tuvo entrada el proyecto del Poder Ejecutivo, expresé mi deseo ferviente y sentido en orden a lograr un dictamen unánime. Algunos se habrán extrañado de mi propósito, reiteradamente expresado, de lograr un dictamen sin disidencias, sobre todo quienes me conocen como

un disconformista orgánico que abomino de las unanimidades, a las que considero altamente peligrosas. En la democracia, son un verdadero veneno, y es por eso que hay que cuidar mucho que se produzcan.

„Por qué trabajó tanto en mí la idea mencionada? Obré acuciado, señor presidente, por una profunda preocupación que me angustia —lo digo con franqueza— y que ha sido generada por acontecimientos políticos que está viviendo el país después de hechos que todavía están muy cerca de nosotros y que no cometeré la torpeza de recordar porque los sé en la memoria de todos. Para mí es importante la coincidencia en este asunto porque ella reflejará que las corrientes de opinión representadas en la Cámara de Diputados han encontrado la manera de dictar un estatuto político con idoneidad para posibilitar que en el juego de la democracia participen todos los argentinos; pero en un juego sin limitaciones, sin proscripciones; como dijo Belgrano Rawson con verdad, en un juego sin trampa y sin arteria. Quedemos juego claro y limpio, es decir, verdaderamente democrático, dentro de la vida de un país republicano.

La idea de conseguir el objetivo mencionado sigue machacando en mí en este momento. Diré como final de esta reflexión que aspiro vivamente a que antes de comenzar el debate en particular hagamos un esfuerzo más para alcanzar y, si es posible, eliminar las diferencias que separan a los distintos dictámenes, sin detenernos en pequeñas cosas, por encima de las pasiones, superando resentimientos que no ayudan a construir. Hagamos un esfuerzo levantado para lograr la unanimidad. Somos hombres políticos y será imperdonable nuestra insensibilidad en la hora que vive la Nación.

Debemos sancionar un estatuto con el voto unánime de todas las fuerzas de opinión. Sólo así el estatuto será, estoy seguro, instrumento hábil para afirmar la democracia, para borrar viejos odios, resentimientos y malos entendidos incluso para que los que han cometido errores no los paguen con castigos impuestos por terceros, sino mejorándose por sí mismos, en algo así como un acto de contrición.

Un estatuto logrado de esta manera y con estos objetivos —y aquí viene lo que más me preocupa— servirá para aventar de ciertas cabezas pensamientos suicidas y para frustrar propósitos abrigados por algunos ciudadanos que, confundidos con quienes odian al pueblo, reniegan de la democracia y no han advertido todavía —o acaso habiéndolo advertido no les importan las consecuencias— que la República no aguanta otra aventura que rompa la continuidad de sus instituciones y la libertad del pueblo. Con la sanción del estatuto de los partidos políticos —y concluyo, señor presidente—, estamos haciendo algo más que dar vigencia a unas normas de juego: estamos contribuyendo a fortalecer los partidos, y con ellos a la democracia, para parar ahora mismo a los aventu-

remos que con el correr de las horas se muestran menos agazapados, al punto de que algunos ya no ocultan sus garras.

Por lo expuesto, concito a los señores diputados para que, en un noble e inteligente esfuerzo común —esfuerzo que nos agradecerá la República— aprobemos un estatuto que abra caminos a la pacificación, a la libertad y a las posibilidades que ofrece la democracia para el pueblo trabajador argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Señor presidente: en oportunidad en que consideramos este proyecto de ley, que se ha dado en llamar Estatuto de los Partidos Políticos, corresponde que determinemos con la mayor precisión posible las razones que han determinado nuestra firma puesta al pie del despacho de la mayoría. Esa firma no significa, en absoluto, que hayamos coincidido con la totalidad del articulado incluido en ese despacho. Significa, sencillamente, que nos hemos hecho cargo del problema de fondo que, a nuestro juicio, afecta a la Nación, y hemos querido demostrar en los hechos, una vez más, que estamos dispuestos a agotar todas las instancias para ahorrar al país las horas difíciles que pueden acercarse a su horizonte si los sectores responsables de la conducción no advierten, como bien lo decía hace muy breves instantes nuestro colega, el señor diputado Muñiz, que la República ya no podría soportar las aventuras a las que ha estado sometida en los últimos años.

Después de haber perdido el gobierno constitucional por la fuerza de las armas levantadas en contra del orden jurídico, los peronistas que esta bancada representa, nos debatimos en las jornadas más aciagas de nuestra vida pública y debimos afrontar unidos, con una solidaridad ejemplar de que quizás no haya parangón en la historia argentina, el enfrentamiento total con nuestros adversarios políticos, y recorrimos, con una profunda fe en los destinos de nuestra patria, el camino de la persecución, de la cárcel y del destierro, por defender nuestras ideas políticas.

A través de esa rica experiencia de esos años de persecución, advertimos que nuestra contribución al bienestar futuro de la República quizás estaba en esforzarnos para encontrar dentro del territorio del país la posibilidad de una coexistencia pacífica con sectores que pensaban de manera distinta y diametralmente opuesta a la nuestra. Pensamos que si en un momento se ha levantado en el mundo esa tesis de la coexistencia pacífica, bien podría usarse y practicarse dentro de los límites del país.

Desde ese instante y hasta el presente —nosotros que somos una cabal representación de esa posición partidaria— hemos querido aprovechar todos los resquicios de legalidad que a

través del tiempo y las circunstancias se nos han ido ofreciendo para convivir con nuestros adversarios que, de manera muy retaceada, nos han ido reconociendo los derechos que hemos ido conquistando con nuestra acción persistente y decidida.

Este estatuto en alguna manera constituye una nueva posibilidad de convivencia inmediata. Por eso entendemos que más que una ley de la Nación significa reglas de juego para el futuro inmediato.

No creo que este estatuto pueda sobrevivir por muchos años, y ojalá que en breve término no fuese necesario y podamos volver al único estatuto de los partidos políticos que debiera regir la vida de los argentinos y que no es otro que aquellos simples y grandes artículos de la Constitución Nacional que permiten asociarse con fines útiles y posibilitan a los ciudadanos elegir libremente a sus representantes sin cortapisas ni reglamentaciones de ninguna naturaleza.

Reconocemos que el proceso actual argentino exige que nos pongamos de acuerdo en algunas reglas fundamentales de la convivencia. Hemos luchado en la comisión para modificar algunos de los preceptos del proyecto del Poder Ejecutivo, porque ese mensaje no colocaba en un pie de igualdad a todos los sectores que integran la ciudadanía argentina y había algunas disposiciones importantes que tenían como destinatarios particulares al movimiento peronista.

Se le hacían imputaciones veladas, pero debe señalarse que el movimiento peronista nunca fue un movimiento totalitario, sino democrático, y por eso en la comisión insistimos para modificar algunas cláusulas que enviara el Poder Ejecutivo. Conseguimos nuestro propósito en alguna medida, pero entendemos, como también lo entienden otros sectores que ya han dado su opinión en el recinto, que varias de las disposiciones del estatuto, particularmente sus artículos 21 y 22, entre otras, resultan innecesarias y es conveniente suprimirlas.

De todas maneras, señor presidente, creemos que si estas reglas de juego se aceptan con honestidad y se practican con probidad quizá podamos abrir una brecha en el horizonte del país y marcar un rumbo que sirva para el futuro, por el que podamos transitar con mayores posibilidades de paz y de convivencia.

Tenemos confianza por una razón fundamental que creo que todos habremos de comprender. Este estatuto, si nos atenemos a las normas incluidas en su articulado, no es proscriptivo. No hay ninguna norma que pueda invocar en el futuro ningún juez de la República para resolver la proscripción del partido justicialista, por ejemplo. Salvo que algún mal juez lo interpretara de manera interesada, cometiera prevaricato o falseara las normas de este estatuto, ninguno podría utilizarlo para proscribir al partido justicialista. Esto debe quedar bien

en claro en la sesión de hoy, para que en el futuro, cuando los jueces tengan que interpretarlo no puedan invocar la voz de un solo legislador siquiera, en ese sentido.

Nosotros tenemos confianza, porque entendemos que este estatuto que consideramos en la sesión de hoy y que seguramente habremos de sancionar próximamente, más que una ley de la Nación constituye un acuerdo de los sectores argentinos que deben opinar sobre el destino de la patria. Como es un acuerdo, nadie tendrá derecho a no cumplirlo, porque el sector que no lo cumpla tendrá que hacerse responsable ante la historia de las horas oscuras que habrán de sobrevenir en la República.

Afirmo que nuestro movimiento, el movimiento peronista, ha hecho en los últimos años como contribución a la paz y a la conciliación argentinas mucho más de lo que se le podría exigir, y si en el futuro al aplicarse esta ley que habremos de sancionar no se la aplica con la honestidad que esperamos y se pretende utilizarla para proscribir a sectores de la ciudadanía, no le quepa duda a nadie de que el peronismo se habrá de sumar definitivamente al enfrentamiento armado, para destruir los intentos oprobiosos que pretendan acallar la voz del pueblo. Cuando nosotros, que somos el último dique de contención de ese pueblo, cuando nosotros que somos esta bancada justicialista, nos decidamos a esa acción, toda esperanza de paz se habrá destruido en el país, porque al haber perdido la fe junto con importantísimos sectores de la población argentina no nos quedará otro camino que la guerra civil, que tan descabelladamente se nos impone. Se acabarán entonces estas discusiones a veces bizantinas acerca de lo que es o no es totalitarismo, acerca de lo que es o no es autocracia. Serán otras las voces que hablen: serán las voces de las armas. Y los responsables —lo digo con toda seriedad— no seremos nosotros, porque tenemos la absoluta tranquilidad de conciencia de que hemos agotado hasta las últimas instancias las posibilidades de conciliación y de paz.

Por eso tengo confianza en este instrumento que vamos a votar. No me interesa lo que establecen ciertos artículos que algunos piensan que se pueden aplicar contra el peronismo. Tengo confianza en que no se van a aplicar torcidamente, porque si así ocurriera, vuelvo a repetir, los que así actúen serán los responsables de haber cerrado toda posibilidad de conciliación nacional. Este es el sentido de nuestra firma al pie del despacho.

Por estas razones casi me resulta difícil decirme a enumerar y a analizar el articulado del dictamen. Lo considero casi innecesario, pero obligado un poco a ello señalaré como ya lo dije antes, que a nuestro juicio significa un mejoramiento sustancial en cuanto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En ese sentido se ha actuado con mayor ecuanimidad en la

comisión y se ha escuchado la voz de los distintos sectores. Se ha actuado con menos prevención, de tal suerte que se han eliminado algunos de los vocablos o de las frases que podían aparecer como confusos y dificultar la labor de quienes tuvieran en su momento que aplicar las disposiciones de este estatuto. A pesar de esas mejoras, hemos entendido necesario acompañar una planilla de observaciones, a las que está condicionada nuestra firma del despacho.

Estas observaciones se refieren particularmente al artículo 39, inciso b), cuya supresión propiciamos, por cuanto entendemos que basta con que los partidos políticos se ajusten a las prescripciones de la Constitución Nacional. Consideramos redundante exigir, además, el sostenimiento del régimen democrático, representativo y republicano, por cuanto estos principios fundamentales están incluidos en las normas de nuestra Carta Magna.

También hemos observado el artículo 69, que se refiere a la creación de la justicia electoral nacional. Entendemos que se debe mantener por ahora la justicia federal con función de justicia electoral, para que los tribunales que deban administrarla sean los actuales tribunales federales, a fin de evitar que precisamente en ocasión de las primeras elecciones de marzo se pueda abrir la perspectiva de que el Poder Ejecutivo designe jueces prácticamente especiales para ese acto comicial. En síntesis, a nuestro juicio ofrece mayor garantía la justicia federal actual que una nueva justicia electoral.

En el artículo 15 proyectamos el agregado de una norma que la consideramos importante para reafirmar el sentido antiproscriptivo y que mejora el despacho de la comisión. Consiste en agregar un apartado tercero que establezca categóricamente que en ningún caso se negará el reconocimiento de la personería por hechos anteriores a la vigencia de la ley.

También modificamos el artículo 21 y suprimimos totalmente el artículo 22. El artículo 22 ha sido uno de los que han merecido nuestras más severas críticas. El apartado 2 del actual artículo 22, que en el proyecto originario llevaba el número 19, caracterizaba una serie de hechos o de actos que a juicio de los autores del mensaje significan actitudes antidemocráticas, totalitarias o autocráticas. Bastaba una rápida lectura de la enumeración para advertir que de manera intencionada se pretendía hacer referencia a la actuación del partido peronista. Nunca aceptamos, desde luego, estas imputaciones veladas, pero lo cierto es que en el lenguaje político contemporáneo de los argentinos esas imputaciones se formularon al movimiento peronista. La comisión comprendió que hubiera sido sectario de su parte mantener estas solas caracterizaciones y agregó entonces otras tipificaciones de actitudes antidemocráticas que, desde luego, no pueden, prima facie, ni de ma-

nera tendenciosa o interesada, imputarse al movimiento peronista y sí, en cambio, a la actuación de otros partidos políticos que con anterioridad o con posterioridad ocuparon el poder público. Así fue como se estableció que constituyen actitudes antidemocráticas el promover o auspiciar la aplicación de la pena de confiscación, destierro o muerte por causas políticas, que también constituyen notas definitorias de actitudes antidemocráticas promover o elogiar el fraude o la violencia electoral en cualquiera de sus formas; que así mismo implica una actitud antidemocrática por parte de los partidos el desconocimiento del derecho de las mayorías a gobernar y de las minorías a controlar la gestión gubernativa. Y finalmente se establece en este despacho que constituye una actitud antidemocrática, el auspiciar la implantación, por medio de leyes o decretos, de proscripciones o inhabilitaciones electorales de personas o partidos determinados. Agregado este último que le da sentido a todo el estatuto.

Si bien es cierto que estas incorporaciones que se obtuvieron en la Comisión de Asuntos Constitucionales vendrían, por así decirlo, a equilibrar las imputaciones veladas que traía el mensaje del Poder Ejecutivo, hemos sostenido —y por eso propiciamos su supresión— que este apartado segundo del artículo 22, constituye, en definitiva, un verdadero muestrario de los defectos, errores y desviaciones políticas de los argentinos en los últimos cuarenta años.

Los distintos apartados del inciso 2º del artículo 22, que van desde el a) hasta el k) son otros tantos sayos que se han echado al aire para que le caigan a quienes les quedan bien, pero de todas maneras no queda bien la República con este artículo. Si los argentinos hemos cometido todas estas transgresiones a los principios cívicos en lo que va del siglo, no creo edificante ni necesario que a manera de inventario de defectos nacionales las incluyamos en estas disposiciones legales. Bastan otros artículos del proyecto, para la protección de los principios democráticos y de los preceptos constitucionales, sin necesidad de tener que llegar a estas alusiones groseras de un pasado que nos pertenece a todos por igual, porque ningún sector político argentino se salva de sus responsabilidades por los errores que se señalan en el artículo 22, apartado 2º del estatuto.

Sr. Murmis. — Pero han ocurrido, señor diputado.

Sr. Luco. — Estamos hablando en serio, señor diputado.

Sr. Pedrini. — Escuche, a ver si asimila algo.

Sr. Murmis. — Si, estamos hablando en serio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Estas motivaciones son las que nos han inducido a suscribir el despacho de la mayoría, pero con las disidencias que hemos acompañado en las planillas que sirven de suplemento número 2 al orden del día 417.

No creo necesario ni oportuno hacer una defensa de la ejecutoria de nuestro partido cuando ejerció el poder público. Parecería ser que, en principio, tendría que hacerlo, frente a las agresivas manifestaciones de algunos señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra. Pero basta señalar que ninguno de los que ocupan bancas en este recinto tiene la potestad ni la facultad de juzgar, en jerarquía de juez, el pasado y el presente argentinos. Somos todos protagonistas de ese pasado y de ese presente. Hemos puesto en él nuestras inquietudes y pasiones con la mayor buena fe y con la mejor intención argentina de que somos capaces. De modo que ese tono docente, ese tono profesoral que han usado algunos señores diputados para reclamar de los hombres que militan en este sector el reacondicionamiento de sus conductas cívicas como condición para poder ingresar en la convivencia democrática como ellos la entienden no tiene fundamento jurídico ni asidero moral. Nosotros respondemos que somos democráticos porque convivimos con nuestro pueblo, porque no haremos nada que el pueblo no quiera y porque sólo respetaremos la voluntad popular libremente expresada, aspirando a que esa expresión de la voluntad pueda articularse a través de las urnas electorales. Por ello es que hemos puesto nuestra firma en este estatuto de los partidos políticos, y por ello es que tenemos confianza, por las razones que hemos dado, de que habrá de aplicarse lealmente para poder posibilitar definitivamente la conciliación de los argentinos (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señores diputados: la Presidencia informa que los oradores que estaban anotados o previstos para hacer uso de la palabra en la sesión de hoy no se encuentran ni en el recinto ni en la casa. Por tanto, si hubiera asentimiento del cuerpo, se levantaría la sesión para realizar mañana la de tablas a las 16.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Habiendo asentimiento, queda levantada la sesión.

—Es la hora 22 y 5.